satisfacción sicológica que Constituyen un lazo so-
cial muy fuerte, debido a que el derecho de pro-
piedad se enraíza, en definitiva, sobre el derecho mis-
mo de libertad, carácter esencial de la voluntad inte-
ligente de la persona humana. De aquí que Joseph
Höffner atribuya a la propiedad privada las funciones
siguientes: 1) Despierta la iniciativa personal y
fortalece la responsabilidad individual; 2) Garantiza
la seguridad económica; 3) Sirve para una clara es-
tructuración y delimitación de las competencias y
de los ámbitos de responsabilidad dentro de la eco-
nomía; y 4) Es garantía de la libertad y de la digni-
dad humana, desde el momento que su supresión
conduciría a un acumulamiento de poder (económi-
co, político, militar y propagandístico) que desem-
bocaría en su ejercicio abusivo.

Precisamente la gran tragedia de la humanidad de
nuestros días, como señala Joseph Höffner en la o-
bra citada, es que la sociedad industrializada ha pro-
ducido la crisis de las funciones que cumple la pro-
piedad privada. Por ello el clamor de los Pontífices
pensando todavía en la posibilidad de adquisición
de una propiedad territorial que podría servir de sal-
vaguardia de la libertad y de seguridad económica,
y el clamor de la hora actual para que la propiedad
se extienda a todos los sectores y no sea concentra-
da en pocas manos, que la manejan a su antojo y ar-
bitrio en grave perjuicio de la comunidad. Esto ha
llevado a escribir a Antonio Hernández Gil: “La ma-
yor garantía del derecho de propiedad es conseguir,
su multiplicación. Sin paz social, la propiedad, por
muchas que sean las garantías jurídicas, no se mante-
tiene. Y es muy difícil conseguir una sincera y eficien-

151
te paz social sin el acceso a la propiedad privada". Así, según Hilaire Belloc, la restauración de la propiedad ha de lograrse a base de considerar los tres aspectos principales en el problema: a) La restauración del pequeño productor agrario, distribuidor o comerciante, ya sea en la forma familiar o patronal, pero en el sentido humano, doméstico, de la palabra patrono; esto es, del que trata con pocos subordinados, a quienes conoce personalmente; b) La división de la propiedad de empresas necesariamente grandes, entre una cantidad suficientemente numerosa de personas; y c) La consolidación de esa división con instituciones que deberán mantenerla, y evitar de nuevo una degradación de la propiedad en el capitalismo. También se ha planteado esta cuestión Héctor Rodríguez de la Sotta, quien sostiene que no hay más dilema: "o comunismo o capitalismo"; pero que, sin embargo, aboga no sólo por corregir los abusos de "la propiedad privada del capital" sino por extenderla, "para que los que hoy tienen sigan teniendo y los que hoy no tienen empiecen a tener". Y Guillermo Viviani ha expuesto el problema con mayor crudeza: "El dilema es fatal: o todos propietarios o todos comunistas". Ya Aristóteles había dicho: "En tanto que cada uno no vea su derecho tan respetado como el derecho de los demás, la idea revolucionaria existirá en el Estado. Todas las veces que unos tengan inmensas riquezas y otros no posean cosa alguna, se tendrá por resultado, o la peor de las democracias, o una oligarquía desenfrenada, o una tiranía intolerable". Esta es la razón por la cual Luiz Legaz Lacambra considera que toda propiedad debe ser limitada, de un lado, por el postulado de
que toda persona habrá de tener propiedad, al menos en aquel mínimo que es necesario para su existencia física, en el nivel de dignidad que corresponde al modelo sociológico que exigen las sociedades más desarrolladas y, por otra parte, su limitación provenirá de que la propiedad ha de servir también a las exigencias comunitarias, contra las cuales no puede prevalecer más allá de ciertos límites el egoísmo de los intereses particularistas.\textsuperscript{159} En este sentido —Carmelo Ottaviano— se pronuncia por privatizar la propiedad, o sea, hacer de todos los ciudadanos propietarios, donde la propiedad individual sobre los bienes de producción dependa de los méritos personales, con el objeto de no matar la iniciativa particular que es tan necesaria para el progreso social.\textsuperscript{160}

He aquí por qué los autores que se enfrentan a esta cuestión coinciden únicamente —como decíamos más arriba— en que el \textit{concepto de la propiedad del capitalismo hay que superarlo si queremos salvar a la humanidad de la tragedia y del caos}; sin embargo, existen varias corrientes en cuanto al procedimiento para llevar a cabo dicha superación. Hay quienes piensan que es suficiente introducir reformas a la propiedad capitalista de modo que se consiga humanizarla, y, por ende, difundirla más en la sociedad; otros, por el contrario, llegamos inclusive a proponer la sustitución total del sistema capitalista de la propiedad por el sistema comunitario; dándose dentro de estas dos posiciones opuestas toda clase de gamas o gradaciones. Sin embargo, Fernando Fueyo Laneri, sin perder de vista la tendencia social de la propiedad como una bondad incontestable, afirma que corresponde al Derecho y a la técnica jurí-

153
dica el centro de gravedad en cuanto a las soluciones en materia de propiedad, teniéndose en cuenta también que el estudio de este tema exige un tratamiento simultáneo de las materias de la libertad, el trabajo y la empresa.\textsuperscript{161} Es decir, que el civilista chileno pareciera inclinarse por un enfoque de la propiedad marginada de los conflictos ideológicos el cual, en definitiva, vendría a resolverse dentro de las actuales estructuras económico-sociales.

Louis Salleron nos señala, que la sociedad actual se encamina hacia un socialismo, que si permanece democrático será anémico, y si quiere ser dinámico y creador se transformará en totalitario; por lo tanto, la posibilidad de eludir una de estas dos alternativas es mediante la conjugación de las formas tradicionales de la propiedad individual con las nuevas formas de la propiedad corporativa.\textsuperscript{162} Estamos, ante una actitud que se mueve dentro de esa escala, gama o gradaciones de que hablábamos hace un momento. Indiscutiblemente que la intención que le inspira a Salleron es garantizar a la persona a través de la propiedad privada el ejercicio de sus derechos individuales a fin de escapar a una economía íntegramente asalariada que desembocaría en el despotismo; pero, al mismo tiempo, frenar y encauzar la libertad individual encajándola dentro de los moldes de la propiedad corporativa. Por eso él propone como ideal: “Una economía en que el trabajador asalariado fuese al mismo tiempo trabajador propietario, tendría muchas más probabilidades de asegurar la libertad individual a la vez que acrecentaría hasta el máximo los ingresos correspondientes a cada in-
dividuo”, si bien reconoce que el capitalista es opuesto al acceso del obrero a la propiedad como, asimismo, entre la clase obrera hay quienes son hostiles también a ello, por considerar que es una trampa que se les tiende para ahogar sus reivindicaciones sociales, por temor a participar en responsabilidades que exigen más trabajo o esfuerzo personal y por preferir seguir en la cómoda postura de pedir más y más sin intenciones de dejar de ser asalariados.  

Aquí Salleron al propiciar la fórmula del trabajador propietario ha entrado de lleno en la sustitución del régimen capitalista por el sistema comunitario.

Es patente que la propiedad privada está sufriendo una sacudida profunda en su contenido de acuerdo a las posiciones cristianas que la tienen sometida a total revisión. Hay que considerar que este derecho de propiedad se encuentra limitado desde el exterior y desde el interior. Desde el exterior por los derechos de los demás y de la comunidad, que permiten en atención al bien común una división o reparto de las propiedades y una socialización estatal; y desde el interior hay que establecer una diferencia no solamente entre bienes de producción y bienes de consumo, sino entre bienes de primer rango (alimentos, vestidos, viviendas, trabajo personal) y bienes de segundo rango, que no están ligados con las necesidades actuales de la familia ni con el trabajo personal del interesado, y por lo tanto, poseen relaciones más difusas con la persona humana, que transforman el derecho de propiedad en un simple poder de distribución y administración en vista del bien común.

Es también una opinión bastante generalizada que
todos los bienes y servicios que se refieren a las necesidades primarias del hombre (alimentación, vestido, vivienda de primer rango, agua, electricidad, gas, transportes públicos, etc.) habrán de sustraerse a la explotación de la propiedad privada tal como la comprende el capitalismo liberal; o sea que dichos comercios e industrias deben hallarse fuera del juego de la oferta y de la demanda y, por consiguiente, de todo lo que signifique ánimo de lucro, a base de buscar su administración por el Estado u otras entidades de la comunidad.\textsuperscript{166}

9. LA PROPIEDAD INSTITUCIONAL

Dentro del pensamiento cristiano han venido a constituir propiamente una escuela los que se agrupan en torno a la teoría institucional. En esta dirección se distinguen dos propiedades: la una individual, la otra institucional. La primera es la irradiación de la personalidad humana sobre las diferenciaciones producidas por el juego de los factores económicos en función del bien de la comunidad, que es su título de legitimación.\textsuperscript{167} En este último supuesto el propietario viene a ser un funcionario del orden económico puesto al servicio de la propiedad familiar, corporativa o estatal, que le revisten de derechos y obligaciones en función de la comunidad.

La propiedad privada es una típica manifestación del principio de la autonomía de la voluntad que se conexiona al derecho subjetivo o derecho del sujeto, de la persona, que surge en función de un interés individual suponiendo la afectación de riqueza intui-
ti personae o ratione personae. Su máxima expresión se produce en la propiedad de los bienes de consumo, que están al servicio de personas determinadas. Por eso esta especie de propiedad no la encontramos en las sociedades primitivas vinculada a la propiedad colectiva: el hombre ha tenido siempre la propiedad de las cosas que consume. La Rusia soviética jamás ha pensado someter estos bienes al colectivismo. La propiedad privada de los bienes de consumo tiene una fuerte dosis de subjetivismo y de finalidad personal. Ella está ligada a su titular. Todas las legislaciones modernas declaran los bienes de consumo inalienables e inembargables. Para ellos es exacto decir, que no hay propiedad sin propietario y propietario sin propiedad. Esta propiedad es la menos gravada con las cargas sociales. Prácticamente ella permanece siempre a la entera disposición de su titular quien puede disponer de ella a su manera. Al lado de los bienes de consumo podría citarse la pequeña propiedad artesana, que es la que se adapta mejor al subjetivismo social. 168

La propiedad institucional es la que gira en torno a una idea objetiva de finalidad social, siendo una expresión de la técnica-función y suponiendo la afectación de riqueza ratione materiae se caracteriza por lo siguiente: 1) No es a los beneficiarios de la afectación a quienes corresponde administrarla; y 2) La regla de los administradores es velar por el interés de los beneficiarios; v.gr., una fundación. Luego resalta en ella la objetividad y la finalidad social, debido a lo cual el propietario se convierte en un funcionario que debe velar porque la afectación sea bien utilizada. Por ello es que jurídicamente esta propie-
dad entra en la esfera del *deber jurídico*. En la propiedad institucional se nos presenta lo siguiente: 1) La cosa no está íntimamente vinculada a una persona determinada; por lo tanto las personas, en sentido estricto, tan sólo pueden usarla; y 2) Los administradores de la cosa no disfrutan de más libertad que la establecida en el *estatuto legal* que regule su propiedad, puesto que más bien son sus *servidores*. De aquí que se haya señalado que en esta especie de propiedad prevalece más que la fórmula incompleta e inexacta: “La propiedad se perpetúa transmitiéndose”, por esta otra que tiene la ventaja de despersonalizarla y ponerla al servicio de una idea: “La propiedad se perpetúa institucionalizándose”.

158
NOTAS

12. Sum, Th. II-II. 66 a. 7.
13. Según Platón “los magistrados decidirán sobre las uniones de los hombres y mujeres a fin de perfeccionar la especie humana; y los hijos serán separados de sus madres y educados y considerados de la sociedad” (Félicien Challaye, Histoire de la propriété, París, Ed. Presses Universitaires, 1948, p. 25).
26. Lucien Jansse, La Propriété, París, 1953, pp. 36-38 y 54.
27. Ibídem, op. cit., pp. 67-68.
29. Lucien Jansse, op. cit., p. 49.
36. Ruiz-Giménez cit. por José Castán Tobeñas, op. cit. p. 42.
40. Cit. por José Castán, op. cit., p. 48.
42. Eduardo Novoa Monreal, Nacionalización y recuperación de recursos naturales ante la ley internacional, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, pp. 9-10.
44. A. Cobban, Interpretación social de la Revolución francesa, Madrid, 1971, pp. 78, 112 y 211.
47. Corso de Diritto romano, 1926, II, pp. 190 y s. s.
53. La función social del Derecho Privado, Madrid, 1904, p. 29.
57. La propiedad de la tierra y su función social, Barcelona, Ed. Bosch, 1953, p. 219.
60. La Propiedad. Una crítica del dominiocentrismo, Madrid, 1959, p. 145.
78. “Armonía Social —‘Estatificación’— Doctrina de la Iglesia” (7 de mayo 1949), op. cit., p. 508.
83. Mater et Magistra, p. 27.
84. Mater et Magistra, p. 7; y Pacem in terris, p. 10.
90. Mater et Magistra, p. 22.
92. Documentos del Concilio Vaticano II, Santander, Ed. Sal Terrae, 1966, pp. 624-628. Sin embargo, José María Castán Vásquez advierte, que la apertura de la Iglesia hacia las formas existentes de propiedad pública, no supone la admisión de los esquemas comunistas, por ser éstos incompatibles con la defensa de la propiedad privada que realiza la “Gadium et Spes”; pues el colectivismo que practicaron en algún momento los primeros cristia-
nos no fue verdadero comunismo, en el sentido político y económico actual de ese término, porque constituía una forma de comunidad puramente voluntaria, local y transitoria (“La propiedad privada y la propiedad pública según la doctrina del Concilio”, Rev. de Estudios Políticos, Madrid 1966, p. 107).


95. Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio, Panamá, Centro de Capacitación Social, s.f., pp. 26 y 41.

96. Ibídem, p. 46.


104. Para Carlos Ramírez, el proceso de descomposición del sistema autocrata ruso era tal, que el asesinato del zar Alejandro II no le altera, ejemplo de ello es que aplicó ciertas reformas, como la ley de multas, que limitó un tanto la arbitrariedad de los capitalistas, y esto no resolvió nada (“Comentario crítico. Acerca de la propiedad comunitaria”, Anuario de la Facultad de Derecho. Mérida, Universidad de Los Andes, Centro de Jurisprudencia, 1970-71, vol. II, p. 587). Sin embargo, queremos dejar constancia de que no es que afirnemos que Alejandro II tenía la panacea de los males rusos, sino que su muerte vino a agravar y precipitar la revolución sangrienta.
105. O.S. Ioffe, Derecho civil soviético, México, Imprenta Universitaria, 1960, p. 37. También el Estado soviético suprimió la propiedad privada capitalista en otras áreas de la economía nacional. En virtud del Decreto del 27 (14) de diciembre de 1917, fueron nacionalizados los Bancos privados. El Decreto del 8 de febrero de 1918, nacionalizaba la flota mercante; el del 22 de abril de 1918, el comercio exterior; y el del 20 de agosto de 1918, el fondo de viviendas en las ciudades (N. Kolesov, La propiedad social sobre los medios de producción en la URSS, Moscú, 1961, p. 39).


112. Cit. por José Gascón y Marín, Limitaciones del derecho de propiedad por interés público, Madrid, 1906, p. 25.


114. Le régimen de la propriété en URSS. París, Institut de Droit Comparé, 1962, p. 11.

115. Félcien Challaye, op. cit., p. 100.


129. N. Kolesov, op. cit., p. 50.


133. N. Kolesov, op. cit., pp. 82, 83 y 89.


137. Trajan Ionasco, Considerations générales sur la notion du droit de propriété, sur le droit de propriété socialiste d'état et sur les droits reels de type nouveau y afferents, en Perspectivas del siglo XX (Homenaje al profesor Enrique Sayagués-Laso), Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1969, Tomo V, p. 114.
143. Aurelian Ionasco, La propriété socialiste cooperative en droit roumain, en Perspectivas del Derecho público en la segunda mitad del siglo XX (Homenaje al profesor Enrique Sayagués Laso), Madrid Instituto de Estudios de Administración Local, 1969, Tomo V, pp. 133 a 138.
144. Sobre la acertada manera de resolver las contradicciones en el seno del pueblo. Pekín, 1960, p. 36.
146. Cit. por S. Chandrasekhar, La China Comunista Hoy, Barcelona, 1962, pp. 54-59.
149. Angel Sánchez de la Torre, El Derecho natural de proprie-
dad en la ideología católica moderna, Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 1961, VIII, p. 163.
153. La propiedad en la sociedad industrializada, Madrid, 1961, pp. 7-10.
156. La propiedad privada del capital, Santiago de Chile, 1959, pp. 49 a 51.
158. Cit. por José Gascón y Marín. Limitaciones del derecho de propiedad por interés público, Madrid, 1906, p. 17.
160. Crítica del socialismo ossia introduzione alla teoría della proprietà per tutti, Padova, Cedam, pp. 45, 63 y 315.
161. "La propiedad y las soluciones que el Derecho ofrece al orden social", en Revista de Derecho Privado, Santiago de Chile, 1966, No 2, pp. 22-23, (Separata).
165. El problema de la propiedad, Caracas, Ed. por el Centro de Investigación "Humanismo y Economía", Colección de Estudios Sociales, No 1, pp. 8, 9, 31 y 33.


II. LA PROPIEDAD COMUNITARIA*

1. ECONOMIA DE GRUPO

Esta nueva modalidad de la propiedad responde a las exigencias de nuestro tiempo en los que la persona ha tomado conciencia de sus derechos igualitarios y de la necesidad que tiene de vivir en cooperación con los demás hombres, percatándose a la vez que la "escasez de bienes" de que padecemos en la tierra, nos exige producirlos y disfrutarlos "en común" dentro de un "espíritu de solidaridad humana". Luego entramos de lleno en la corriente de nuestra época de la "economía de grupo" que tiene sus antecedentes en la "comunidad de bienes" del cristianismo primitivo y también, en algunos aspectos, en las Encíclicas Pontificias, correspondiendo así a las formas de vida cooperativas que son esenciales a la naturaleza humana y que han tenido destacada expresión en el socialismo utópico y en la doctrina autogestionaria.

La concepción de la economía de grupo encuentra ya elementos visibles en el pensamiento de Godwin, Owen, Fourier y otros teóricos socialistas antiautoritarios, que vienen a ser los precursores de Proudhon (1809-1865), quien es el verdadero fundador y teórico máximo de la concepción autogestionaria, cuya frase escrita desde la cárcel resume toda su concep-
ción personal: "Yo no quiero ser ni gobernante ni gobernado". Así toda la teoría proudhoniana está basada en el federalismo, el anticentralismo, el mutualismo y el cooperativismo. De esta manera a nivel productivo postula los talleres autogestores, y a nivel político la federación. Pues él nos hablaba de una propiedad "mutualista y federativa”, que hace a todos los obreros "coproprietarios”, puesto que pensaba que el mundo se orientaba hacia una "democracia industrial" en la que se diese el equilibrio entre el Estado y la sociedad económica organizada, hablándonos de un derecho económico como un verdadero derecho de integración. Así este derecho económico rige la vida interior de los grupos sociales, que se afirman por estareglementación como seres colectivos reales y vivientes, con lo cual los hombres vienen a integrarse entre sí para constituir una nueva personalidad real distinta de la suya particular, donde aparece el derecho económico como el más alejado del "derecho del más fuerte" y el derecho más próximo a la justicia. Porque este derecho económico es subyacente a todas las agrupaciones que integran la sociedad económica. Por el contrario, el derecho político, que es subordinado a aquél, debe tender a alcanzar la unión federativa de los grupos corporativos, integrando su derecho económico individual dentro del derecho económico común que dirija las corporaciones obreras. Luego Proudhon propugna una síntesis entre el universalismo y el individualismo, la unidad y la variedad. De aquí su célebre fórmula: "Quien dice socialismo dice federación o no dice nada".  

Se trata, por consiguiente, de un sistema socioeconómico basado en la igualdad. De esta manera se ga-
rantiza a todos los que quieran trabajar la posibilidad de utilizar los medios de producción bajo las mismas condiciones. Luego esto implica: a) La propiedad social de los medios de producción; b) Derecho a trabajar; y c) Derecho a manejar la producción; es decir, *poder de decisión* sobre las funciones básicas de la empresa: como las decisiones acerca de la cantidad y calidad de producción, los suministros, las ventas, los precios, las inversiones y los jornales, etc.³ Es una forma de que el trabajador tenga acceso a la propiedad de la empresa, realizándose así el principio proudhoniano: “Cuando todos son propietarios, las fortunas están más igualadas y cada uno trabaja”.⁴ Es por eso que Angel Pestaña sostiene, que el trabajador que no esté de acuerdo con el grupo productor donde preste sus servicios, puede marcharse a formar parte de otro, con la seguridad de que se le facilitará un centro de producción en el que pueda prestar sus servicios para subvenir a sus necesidades, puesto que se trata de una *comunidad libre de productores*, es decir, la unión espontánea de cada trabajador al grupo productor que más afinidad tenga con él.⁵ Sin embargo, esta posición anarquista merece por nuestra parte reparos, pues desde el momento que el trabajador ingresa voluntariamente en una comunidad empresarial contrae deberes que dimanan de la “vida en común”, que necesariamente le imponen ciertas restricciones a que tiene que sujetarse cuando él quiera abandonar su trabajo.

Proudhon, en su concepto de la *federación*, busca el “contrapeso de la autoridad por la libertad, y viceversa”.⁶ “La autoridad no se presenta con toda su grandeza sino en la colectividad social, y, por con-
secuencia, no puede ni manifestar su voluntad ni obrar sino por medio de la colectividad misma o de alguien que la represente. Otro tanto sucede con la libertad, la cual no es perfecta sino cuando está para todos asegurada, bien porque todos participen del gobierno, bien porque el gobierno no haya sido deferido a nadie. Es de todo punto imposible salir de esas alternativas: respecto al régimen de autoridad, *gobierno de todos por todos o gobiernos de todos por uno solo*; respecto al de libertad, *gobierno en participación de todos por cada uno o gobierno de cada uno por sí mismo*. Todo esto es fatal, como la unidad y la pluralidad, el calor y el frío, la luz y las tinieblas”.

De esta manera nos presenta a la ANARQUIA como una variedad del régimen liberal, donde cada individuo se gobierna por sí mismo (*self-government*).

Es necesario recoger aquí que esta exaltación individualista proudhoniana está lejos de ser compartida por el marxismo. Es cierto que Carlos Marx, en la alocución al Comité Obrero Internacional (1864), elogió el *movimiento cooperativo*, cuando consiguió establecer empresas creadas sobre el principio de la cooperación, porque ello venía a demostrar que la producción puede organizarse sin necesidad de que exista la clase de los empresarios como alimentadora de trabajo de la clase obrera, que los instrumentos de trabajo, para rendir fruto, no necesitan ser monopolizados precisamente como instrumentos de explotación y de dominio sobre los obreros, que el *trabajo asalariado* no es, como antes el trabajo de los esclavos y de los siervos, más que una forma condicionada y transitoria, condenada a desaparecer ante el *trabajo cooperativo*, el único que cumple su difícil
cometido con mano pronta, inteligencia propicia y corazón alegre.9 Empero —añade Marx—, el trabajo cooperativo, limitado a estos ensayos ocasionales, no acabaría nunca con el *monopolio capitalista*; pues sólo haciéndole cobrar *dimensiones nacionales* podría el trabajo cooperativo salvar a las masas. Sin embargo los grandes señores de la tierra y del capital procurarían acogerse en todo momento a sus *privilegios políticos*, para eternizar sus monopolios económicos. Por eso el primer deber de la clase obrera es *conquistar el Poder*.10

Luego se advierte como la concepción autogestionaria de los soviets era incompatible con el *centralismo bolchevique*. Pues, según ha observado Martín Buber, “Lenin acepta los soviets como parte de un programa de acción, pero no como una idea estructural”. Lenin no dejó de repetir en ningún momento que el Estado proletario había de ser centralista y que los consejos de fábrica habían de subordinarse a un “gobierno fuerte”. En consecuencia el elemento decisivo de la revolución no era para Lenin los soviets ni los sindicatos, sino los revolucionarios profesionales. La concepción de Lenin era *elitista*, la de los soviets democrática. Prueba de eso es que la independencia de los soviets fue en realidad muy breve: desde octubre de 1917 hasta la primavera de 1918.11 Es por eso que en los países comunistas la economía de grupo se orienta hacia la *estatalización*, por lo tanto, tiene un predominio la propiedad pública, ya que, aun cuando se reconozcan tipos cooperativos de organización propietaria, siempre se hallan subordinados a aquélla.

De esta manera se conciben las unidades de pro-
ducción en razón de su gigantismo, por lo cual no pueden ser gestionadas sino centralmente por una tecno-burocracia privada o partidaria, dentro de una rigidez en sus imperativos de funcionamiento y de rentabilidad, que le quita a la clase trabajadora toda iniciativa y toda capacidad de elección. Pues al no prestarse en su configuración los aparatos institucionales de producción al control y a la propiedad por los productores asociados en reales comunidades de trabajo y de vida, hace que la “propiedad institucional de Estado” perpetúe la división social del trabajo, la estratificación en clases de la sociedad y, en particular, la existencia de una burocracia de privilegios que mantiene al proletariado en una dependencia y subordinación tan iguales como las impuestas por el capitalismo privado. Esta tesis estatal se afianza en los países comunistas, porque se dejan llevar de un afán tecnológico competitivo con el mundo capitalista, importando su tecnología, sin importarles que para ello tengan que crear empresas igualmente alienantes, marginantes, autoritarias y destructivas de las posibilidades humanas. A este respecto se olvida, que el gigantismo de las máquinas sofisticadas que dominan a centenares de trabajadores que las sirven, no es necesariamente más eficaz que el equipo de hombres y mujeres colaborando en el manejo de máquinas más ligeras y más pequeñas, perfeccionadas por los propios obreros.\(^{12}\)

Dentro de la propiedad capitalista, también se da esta tendencia a la economía de grupo, ya que el hombre de ahora no puede enfrentarse aislado a los hechos sociales que le circundan, cuales son la concentración de la riqueza, para alcanzar un mayor bienestar ma-
terial y espiritual, y la masa de los individuos que deben prestar su esfuerzo para hacer funcionar la poderosa vida de las máquinas. Con todo, no debemos perder de vista, que la tecnología productiva diseñada a partir del siglo XVIII busca un doble objetivo: producir y dominar, aun cuando para ello tenga que deshumanizar la fuerza del trabajo. Téngase presente, que el mecanismo utilizado por el capitalismo para alcanzar su gran desarrollo económico, es la sociedad anónima, que bajo la apariencia anómala del concepto de persona jurídica, encubre siempre un "complejo de intereses" que no se mueve por otro motivo que por la satisfacción del ánimo de lucro.

La empresa capitalista, considerada como una unidad económica autónoma, tiene por objeto la producción de bienes y servicios, y está constituida por una comunidad de personas que, según las indicaciones de la dirección, contribuye a la producción, mediante el capital aportado por los accionistas o empresarios y el trabajo de los obreros. Luego el trabajo es remunerado tan sólo después que el capital ha devengado sus beneficios, muchas veces sin las adecuadas trabas legales que eviten se produzcan injusticias sociales, porque aquí casi el exclusivo móvil es el dinero con el propósito de obtener un provecho personal ilimitado, lo cual ha conducido a un régimen de irresponsabilidad y de inmoralidad, salvo excepciones muy honrosas y raras. Esto se ha agravado porque la mayoría de los accionistas lo que pretenden, no es dirigir la sociedad de la que detentan una parte del capital, sino realizar las inversiones más rentables. Entonces, la paradoja que se está dando, es que el
**poder burocrático** de los estados mayores de las empresas es el que ejerce su soberanía, si bien siempre el capital tenga, en última instancia, poder para desestabilizar la empresa que se le pretenda descarrilar. De esta guisa, el **automóvil** que se proclama a los cuatro vientos que responde por completo a las exigencias de los clientes de hoy, se proyecta en las oficinas técnicas de los ingenieros con tres años de antelación, intervalo necesario para su lanzamiento al mercado. La **publicidad** sugiere al consumidor que, supuesto que se han logrado fabricar los desodorantes, él no debe tolerar un minuto más su propio sudor. Los **fabricantes de armas** se encargan, por su parte, de aconsejar y aun de persuadir a los poderes públicos, sobre el material de guerra que deben adquirir.¹⁷

Se pone en evidencia, que de los tipos de economía de grupo que hemos examinado aquí, es el sistema autogestionario el único de ellos que consigue estructurarse como una *comunidad de trabajadores*; pues el sistema imperante en los países marxistas y en los capitalistas no llega a integrarse plenamente en tal modalidad, por cuanto en los primeros el Estado, de hecho, detenta la propiedad en nombre del pueblo, mientras que, en los segundos, el capitalista es el dueño de la empresa dentro de una concepción privada de la propiedad. Luego el trabajador, en ambos supuestos, es un **asalariado**, bien lo sea del Estado o del empresario particular.

En el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en México del 20 al 25 de Agosto de 1975, a propuesta del Profesor E. Novoa Monreal, se estableció en materia de derecho de propiedad, entre otras cosas, lo que sigue: “La conve-
niencia de que las Constituciones Latinoamericanas establezcan el derecho de todo hombre al acceso a una propiedad privada capaz de satisfacer sus necesidades esenciales para una vida y un hogar dignos”. En este sentido, nuestra concepción de la propiedad comunitaria cumple plenamente esta aspiración de los juristas latinoamericanos, por cuanto que el trabajador pasa a ser propietario de la empresa sin dejar de ser tal, con lo cual revestimos de una mayor riqueza y amplitud el contenido institucional de la propiedad, que el término Autogestión, que presenta un fundamento esencialmente económico y se afinca en fuentes meramente de solidaridad social sin ningún contenido espiritual. Aparte de que en la empresa autogestionaria la propiedad de los bienes aparece diluida en una “propiedad social” en la que a los trabajadores se les reserva tan sólo la “propiedad en la gestión” y no en la “comunidad de bienes”, como es característica en la especie de propiedad que exponemos aquí.¹⁸

Es natural, pues, que partamos del concepto de propiedad como “irradiación de la personalidad humana” sobre las diferenciaciones producidas por el juego de los factores económicos en función del bien de la comunidad, que es su título de legitimación, dentro de la elaboración de la “Teoría de la Institución” que nos hace principalmente Georges Renard,¹⁹ basándose en la doctrina tomista del “bien común”. De esta manera esta propiedad la concebimos como “la comunidad de trabajadores sobre los medios de producción, en la que se comparten los bienes obtenidos mediante el trabajo de acuerdo a las exigen-
cias de la justicia social, observando una jerarquía de valores que sitúa en primer plano los que atañen a la dignidad de la persona, al bien de la comunidad y a la voluntad de servicio”.

Queda patente que en este concepto de la propiedad comunitaria desaparece la dicotomía de capital y trabajo en distintas manos o proviniendo de distintas fuentes, ya que surge la figura del trabajador-propietario, mientras que en el régimen capitalista el capital está en manos del empresario y el trabajo lo pone el obrero a cambio de un salario; y en los países comunistas, el capital lo detenta el Estado, aun cuando el pueblo sea su titular, por lo que el obrero presta su trabajo en reciprocidad también de una remuneración, por tratarse en la práctica de un “capitalismo estatal”. Es menester dejar constancia, que la propiedad comunitaria no se adquiere por una mera liberalidad, que se hace a los trabajadores por su condición de tales, sino que éstos han de merecerla por su capacidad y laboriosidad, como un derecho de opción que se les otorga para que con su esfuerzo muscular e intelectual contribuyan al desarrollo nacional. Luego aquí tiene primacía el trabajo, como motivo de una conducta actuante, que se dirige a la consecución de un bienestar personal y comunitario, conforme a la expresión paulina de que el que no trabaje que no coma.

Es evidente, pues, que estamos en presencia de una concepción de la propiedad como instrumento de la productividad en la que se pueden conseguir las mejores condiciones para realizar un trabajo sin explotación que ofrezca rentabilidad y, al mismo tiempo, sea “sinónimo de alegría”, en la medida que
satisface las exigencias de la personalidad humana\textsuperscript{20} y contribuye al desarrollo de la comunidad nacional. Así también la propiedad comunitaria adquiere el rango de “sociedad intermedia” a través de la cual el pueblo puede participar en los bienes económicos a fin de satisfacer las necesidades individuales y familiares a la vez que interviene en las decisiones económicas del país.

2. DEL COOPERATIVISMO AL COLECTIVISMO PERSONALIZADO: EL HOMBRE NUEVO

Se puede apreciar que las nuevas modalidades de la propiedad privada —a pesar de las tendencias socializadoras de nuestro tiempo— no superan la característica del sistema liberal —capitalista en el sentido que respetan el mantener disociados, o en distintas manos, los conceptos de capital y trabajo. Muy distinto es lo que sucede en el régimen cooperativista que, si bien es verdad ha surgido en el seno del liberal-capitalismo, fusiona en las manos del socio los conceptos de capital y trabajo, semejándose en esto a la empresa autogestionada y a la propiedad comunitaria; pero, sin embargo, conserva como remedio del liberalismo la facultad de abandonar la empresa —signo individualista— cuando así lo crea conveniente para sus intereses, aun cuando ya hay legislaciones que teniendo en cuenta la función social del cooperativismo imponen restricciones a esta facultad del socio cooperativista.

Aquí se advierte la base contractualista en que
se fundamenta el cooperativismo, nacido sobre todo para defender al socio frente al “ánimo de lucro” del capital, lo cual impulsa a los trabajadores a asociarse entre sí para competir con la empresa capitalista y eludir el pago de la “plusvalía” de que habló Carlos Marx y que Proudhon calificó de robo del propietario al trabajador. Es cierto que, como escribe Heleno Saña, las cooperativas no han podido liberar a la clase trabajadora de la opresión capitalista, pero han contribuido sin duda a fomentar su espíritu de iniciativa y su capacidad creadora, enseñándoles los elementos de una administración integralmente obrera. Las cooperativas deben por ello ser consideradas como una dimensión esencial del movimiento autogestionario.21 Es por eso que también nosotros siempre consideramos al cooperativismo como el punto de partida del comunitarismo, debido al predominio del espíritu democrático en la organización de la empresa. De aquí que a la cooperativa se le señalen estos dos objetivos:

1) Ser eficiente en el sentido económico, es decir, debe ser capaz de sobrevivir a la competencia en el mercado; y

2) Ser democráticamente gestionadas, en el sentido de que las autoridades de la empresa provengan del mandato expreso de los miembros de ella bajo el sistema “un hombre un voto”. Además esta forma democrática debe ser estable en el tiempo y no tener tendencia a degenerar a formas autocráticas de gestión.22

De todas maneras se dice que el cooperativismo no ha sido capaz de florecer en gran escala ni den-
tro del sistema capitalista ni del marxista, porque el Estado en ambos sistemas se preocupa de proteger o bien la propiedad privada en el primero o bien la propiedad pública en el segundo, jugando un papel subordinado la propiedad cooperativa. Es decir, que, por lo general, el cooperativismo se encuentra desamparado de protección y aliento estatal. De otra parte, en nuestra sociedad actual, el cooperativismo choque con el inconveniente de que los complejos industriales son cada vez más costosos por la automación y, en contrapartida, requieren menos mano de obra por esa circunstancia. De esta forma, necesariamente tiene que disminuir el número de cooperadores en la misma proporción en que habrá de aumentar su aportación, con lo cual todavía se hace más difícil su coexistencia con el sistema capitalista. Por eso, es frecuente que la cooperativa surja sobre la base de empresas privadas ya constituidas que no han sido capaces de desenvolverse con holgura o han estado al borde del colapso, y es en tales momentos de crisis, cuando los propios hombres que trabajan en ella se deciden a salvarlas, v. gr., los casos de Máquina Alfa o de la Sociedad Anónima Laboral de los Transportes Urbanos de Valencia.23

Es evidente pues, que aun cuando se pensó en ello, el régimen cooperativo no ha sido la solución para acabar con los males del capitalismo, a pesar de que lleva en su entraña la “idea de solidaridad humana” que es esencial para la construcción de una nueva sociedad. Quizá tampoco haya cumplido este cometido siendo —como lo es— una idea maravillosa, porque no ha llegado a constituir una ideología capaz de inspirar un principio vital de una sociedad en ge-
neral; esto es, no se puede decir que haya una ideología cooperativista que trate de estructurar toda sociedad sobre la base del cooperativismo.  

Es por eso que nosotros tomamos al cooperativismo como punto de arranque de la propiedad comunitaria que sí aspira a la implantación de un "nuevo sistema de vida", que necesariamente tiene que partir de presupuestos muy distintos a los que prevalecen en el liberal-capitalismo a fin de imprimir un sentido humano a la relación hombre-cosa o empresa, tomando como fundamento para ello los ingredientes ideológicos a que hicimos referencia más arriba. Esta salvación de lo humano, que es nuestra preocupación fundamental, sin perder de vista el que está inmerso en el conglomerado social, nos lleva a dirigir la mirada hacia un colectivismo personalizado de profunda raigambre cristiana. Entonces se trata de establecer un régimen de personas colectivas integradas por un individuo libre y responsable en su acción económica, en virtud de la simbiosis o adecuación del principio personalista unido a las condiciones colectivas de la producción moderna. Así prevalecerá la "ley de la comunidad" sin desconocer a la persona humana.  

A este respecto, cabe señalar, que la Iglesia —como ha escrito Jaime Castillo Velasco— si es verdad que no ha condenado el capitalismo como sistema, tampoco ha condenado el colectivismo. De aquí que dicho autor nos dé la siguiente definición: "El colectivismo es aquella manera de proceder en lo económico en virtud de la cual los ciudadanos, voluntariamente o interpretando el bien común de la sociedad, en-
tregan al Estado o a comunidades de trabajo, la propiedad de los medios de producción fundamentales”.

Desde otro punto de vista, ya Joaquín Costa se había adherido a la doctrina del colectivismo agrario, que tan bien expuso el norteamericano Henry George en su celebrada obra Progresse and Poverty (Progreso y Miseria), en 1877, que hace compatible con la admisión de la propiedad privada no tan sólo de los productos del trabajo, o sea de los objetos de consumo, sino también de los instrumentos de producción, con la sola excepción de uno: el suelo, o sea la tierra. Es decir, que la propiedad individual no puede legítimamente recaer más que sobre bienes que sean producto del trabajo individual; la tierra es obra exclusiva de la naturaleza, por consiguiente, no es susceptible de apropiación, con lo cual se proclama el sistema de nacionalización de la tierra, que hemos visto imperar en los regímenes socialistas. Así, según Joaquín Costa, por este medio de nacionalización de la tierra, el Estado contaría perpetuamente con ese patrimonio colectivo a disposición de cuantos quisieran hacer uso de él. De este modo, cualquier individuo podría ocupar la porción de tierra que le conviniese, siempre que no estuviese ya ocupada y en cultivo, con estas dos condiciones: satisfacer una renta al Estado, y no subarrendar a terceros lo ocupado, sino que en el momento que no quiera o no pueda seguir beneficiándose de su parcela ocupada, puede dejarla a disposición de un nuevo ocupante que quisiera hacer uso de ella. Luego no se haría una división del territorio en haciendas o labranzas iguales, sino que cada uno tomaría la tierra que le acomoda-ra en proporción a sus medios y necesidades; pues
aun los obreros industriales que quisieran emplear sus ratos de ocio en el cultivo de una parcela, podrían tomarla con igual derecho que cualquier otro ciudadano.  

Como puede advertirse, según la posición de Joaquín Costa, el colectivismo agrario es compatible con la propiedad privada sobre los medios de producción tan sólo exceptuándose el dominio de la tierra. Sin embargo, en la propiedad comunitaria existe una verdadera comunidad de trabajadores sobre todos los medios de producción, inclusive la tierra, reservando al Estado un papel de fiscalización. Por lo tanto nos movemos dentro de un colectivismo personalizado que deja a salvo el valor de la persona humana, pero que, al mismo tiempo, hace hincapié en la noción de bien común. En consecuencia, también se mueve dentro del colectivismo personalizado la posición de Joaquín Costa, pero con la diferencia de que según él coexisten la propiedad privada y la propiedad pública (ya que concibe la nacionalización de la tierra), mientras que en la concepción comunitaria se admite una propiedad colectiva que, por relevancia de la persona humana, se caracteriza por los derechos personales de ésta sobre los beneficios obtenidos por su trabajo a la vez que posee una titularidad comunitaria que recae sobre los bienes comunes de la empresa. Luego se conjugan plenamente los derechos de la personalidad y los de la comunidad. Para Hegel la personalidad envuelve el ejercicio de la voluntad sobre las cosas para poder adquirir un dominio sobre ellas excluyendo aquellas otras cosas que están identificadas con otras personalidades.

Así tratando de precisar hasta el máximo el pensa-
miento de Renard diríamos que dentro de nuestra concepción de la propiedad el elemento esencial es la comunidad, que es la idea objetiva de finalidad social a la que deben subordinarse todos los miembros de la sociedad política sin despersonalizarse. Estamos, pues, ante el hombre con sentido comunitario. Por consiguiente, la propiedad desciende del pedestal en que la coloca el sistema liberal capitalista y se subsume en la comunidad; de donde que lo primero sea la comunidad y después la propiedad, que subsiste en tanto y en cuanto sirve a aquélla. Es obvio que no se entiende por comunidad un simple conglomerado de individuos, sino que, por el contrario, se aplica el término a un grupo humano (sociológicamente hablando) que comparte objetivos y metas específicas, que se encuentra cohesionado de hecho y que tiene sentido de unidad en la acción. Comunidad implica por tanto:

1) Ciertas concepciones comunes.
2) Ciertos valores compartidos.
3) Ciertas normas aceptadas; y
4) Acciones coordinadas e integradas para el logro de objetivos y metas previamente establecidos.\textsuperscript{29}

Así, como escribe Rafael Caldera, la propiedad comunitaria buscando caminos a la justicia y al bienestar de todos, pone su sujeto en la comunidad, como un medio de eliminar barreras entre clases y sectores sociales, y de estimular a los hombres al esfuerzo común.\textsuperscript{30} Porque bajo el imperio de esta perspectiva, el trato y relación del hombre con el hombre, en lugar de estar signado y dirigido por la explota-
ción y el dominio, asume también la forma de una co-laboración y co-operación en el trabajo. De esta manera —según Ernesto Mayz Vallenilla—, se acentúan los valores y el sentido de la participación en la convivencia social y afloran las múltiples modalidades de comunitarismo en la tenencia y usufructo de la propiedad, y, en síntesis, prevalecen las formas y modos de un estilo de existencia donde el hombre, en lugar de autoobjetivarse como un Yo aislado y solitario, se siente miembro activo y solidario de un Nos-otros que lo trasciende y le confiere sentido a su quehacer vital de acuerdo a las exigencias del bien común. Entonces se vive no simplemente para satisfacer egoístamente las necesidades y deseos individuales, sino para compartir con otros, bajo la luz del altruísmo y del amor, los bienes que se alcancen como fruto del trabajo y del común esfuerzo.\textsuperscript{31}

En consecuencia, lo importante aquí es que la persona no se disuelve, no se esfuma, no se aliena —empleando un término marxista— en la sociedad. Per-vive con plena vigencia en ella y la trasciende como dimensión espiritual. Es por eso que Jean-Yves Calves ha señalado que la propiedad no cumple para con la persona las funciones de tal más que cuando haya primero una sociedad, en la cual la persona se encuentre, se desenvuelva y se realice, como, por ejemplo, en la familia o en una comunidad religiosa.\textsuperscript{32} Se advertirá, pues, que nuestro pensamiento prescinde por completo de la propiedad privada conforme al sistema capitalista y pone en su lugar una nueva modalidad de la propiedad que exige:

190
1) Una nueva mentalidad en los hombres (la comunitaria).
2) Una nueva jerarquía de valores (lo humano, la comunidad, el trabajo, la idea de servicio); y
3) Un cambio de estructuras (la revolución comunitaria).

Sólo entonces podrá implantarse la propiedad comunitaria en la sociedad, acaso después de haber pasado, en su realización imperfecta, por un período de transición de coexistencia con la propiedad capitalista en que ambas se respeten sus sucesivas zonas de influencia. Sobre el particular, Manuel Lizcano se refiere a que el cooperativismo y las experiencias de trabajo asociado constituyen un camino abierto hacia lo que él califica de un circuito o subsistema de una economía comunal, en una “sociedad compartida” con la empresa capitalista y la empresa pública.\textsuperscript{33}

Sin duda alguna, que ante la esperanza de una nueva sociedad vuelve a tener vigencia el perenne problema del hombre nuevo de que nos habla San Pablo, como el integrante de una humanidad rehabilitada, creación del nuevo Adán y capacitada para las obras de justicia.\textsuperscript{34} Estimamos que la tarea de crear el hombre nuevo y la del cambio de estructuras debe ser simultánea, sin dejarnos seducir por la una o por la otra; pues hay quienes inclusive consideran que la pretensión de alcanzar el ideal de un “hombre nuevo” está más allá de la utopía, es una ingenuidad; pues de lo que se trata es de crear unas condiciones objetivas mediante las cuales el hombre no pueda

191
ser un lobo para el hombre sino que haya de verse obligado a ser solidario lo quiera o no.\textsuperscript{35} Claro es que para alcanzar esta etapa es menester contar con hombres que tengan nuevos "esquemas mentales" y rechacen por igual la explotación capitalista y la opresión marxista.

3. CARACTERISTICAS Y AREAS DE LA PROPIEDAD: LA PEQUEÑA EMPRESA

Estamos conscientes que la propiedad comunitaria está al servicio de una comunidad real, viva, que conlleva jerarquía y especialización de funciones, sentido de la solidaridad y conciencia del nosotros; empero su definición no afecta en cuanto a sus características del derecho a \textit{usar, gozar y disponer de una cosa}. Esta noción abstracta no cambia de su acepción tradicional. Sus modos de ejercicio y los bienes a que hace referencia, sí cambian radicalmente.\textsuperscript{36} Pues téngase presente que se trata de un régimen de propiedad referido a una "comunidad de trabajadores" que tiene como función esencial la realización del bien común. Es obvio que para alcanzar éste será conveniente establecer la regulación de las diferentes \textit{áreas de la propiedad}.

Es notorio que el tipo de sociedad que nosotros deseamos impere, habrá de fundamentarse sobre la \textit{propiedad comunitaria} en su sentido estricto; pero ello no es obstáculo para que coexistan a su lado otras modalidades dominicales, tales como:

a) La propiedad privada o personal.
b) La propiedad familiar (o artesanal).
c) La propiedad pública (o estatal); y
d) La propiedad mixta (o propiedad comunitaria imperfecta), en la que coexiste la propiedad del antiguo empresario y la de los trabajadores.

a) En el libro de los Proverbios (XXX, 8-9) se encuentra la admirable plegaria de Agur, que ilumina la oración dominical: “No me des ni pobreza ni riqueza; concédeame el pan que necesito, pues tengo miedo de que en la abundancia me harte y reniegue de ti, y diga: ¿quién es el Eterno?, y tengo miedo también de que por ser pobre me vea arrastrado al robo y deshonre el nombre de mi Dios”. De aquí que Jean Carbonner comentando este pasaje bíblico, considere que la propiedad está implicada en la condición humana desde el momento que los bienes de la tierra han sido distribuidos a los hombres con medidas de defensa contra el robo y la codicia, es decir, con las marcas de una apropiación exclusiva condicionada; pues el mismo ser del hombre en que se funda la propiedad, exige a ésta unas dimensiones, ya que nada de lo que es humano puede, sin usurpar lo divino, sin impiedad, por tanto, pretender ser infinito o eterno. Luego una exigencia religiosa postula así que se le pongan límites a la propiedad en el espacio y en el tiempo. Esta es la tarea que corresponde al Derecho. En este aspecto hay que hacer lo posible porque cada persona tenga a su disposición los bienes suficientes para no incurrir ni en la desesperación ni en la codicia.

b) Sin duda alguna que la propiedad familiar es un medio útil de organización comunitaria, si bien consi-
deramos que tiene una sustantividad propia que la distingue del tipo específico de propiedad comunitaria. Empecemos diciendo que la propiedad no suele edificarse a la escala del hombre, sino a la escala de la familia, razón por la cual todo el Derecho de sucesiones y de liberalidades responde a esta tendencia familiar del ser humano. Porque su objetivo es conseguir la estabilidad y seguridad económica a un grupo humano numéricamente dado, teniendo en cuenta las exigencias técnicas y el mercado económico. Es por eso que a los bienes familiares se les imprime el sello de la inalienabilidad y de la indivisibilidad. El riesgo que acecha aquí es que se despierta la ambición familiar de conservar sus bienes hasta el infinito, poniendo a la sociedad en peligro de sufrir graves desajustes a causa de las propiedades que se resisten a morir, queriéndose mantener una acumulación indefinida de los bienes en unas mismas manos, con las consecuencias desastrosas en lo económico y en lo social que todos sabemos.38

Es evidente que el fermento de perdurabilidad que conlleva toda propiedad familiar es saludable siempre que no se desborde, por cuanto que ayuda a proporcionar una estabilidad social. Ahora las mismas características del grupo familiar, le hacen difícil su adaptación a los nuevos cambios producidos por el crecimiento, por las circunstancias del medio y por el progreso técnico, lo cual motiva la fragilidad de las empresas industriales llamadas familiares.39

c) En cierto sentido también, la propiedad pública cumple la función de la propiedad comunitaria, desde el momento que está al servicio de la comunidad nacional, ya que trata de conservar ciertas rique-
zas de interés general; v. gr., no se concibe la explotación destructiva de un bosque patrimonial. De todos modos consideramos que este tipo de propiedad entra dentro de la calificación de la propiedad pública, cuya protección corresponde directamente al Estado o a organismos infraestatales (región, municipio).

Así vemos cómo se diversifica el concepto de la propiedad, que ni en su extensión ni tampoco en su heterogeneidad podemos decir que ha llegado al término de su evolución a pesar de varios siglos de economía capitalista. Quizá, por eso, el régimen comunitario tendrá el efecto de provocar nuevas modificaciones a través de las cuales tome mayor relevancia la persona humana en la forma de relacionarse con los bienes.40 Esto lo abordaremos en el párrafo siguiente cuando nos refiramos a la "propiedad colectiva". De todas formas, conviene insistir aquí en que, la generalidad de los autores modernos, se pronuncian por la necesidad de proteger al pequeño comercio y a la pequeña industria, como un medio de estimular a la clase media y así buscar un cierto equilibrio social frente a la superioridad de las grandes unidades económicas, que hoy tienden a imponerse en el mundo a través de las empresas transnacionales.41

Es notorio, que las características de la pequeña empresa permiten, de una manera natural, al artesano aportar sus dones innatos y su talento en su trabajo, estableciéndose una relación personal entre el patrono y sus obreros, aun cuando su rendimiento económico no alcance una productividad importante;42 por lo tanto hay que defender a la pequeña y mediana empresa independiente como un medio de
mantener la iniciativa particular e impedir la implantación de un tipo de colectivismo radical. Además, habrá de tenderse a que esta pequeña industria pase a manos de los trabajadores como un medio de estimular a éstos al rendimiento en su trabajo, por cuanto que, hasta ahora, la pequeña y mediana empresa ha podido subsistir gracias a una aminorada presión fiscal y sindical, pero a medida que ésta aumente se exponen a desaparecer a menos que no se acojan al régimen comunitario.

Pues lo importante en la empresa comunitaria es que su volumen sea fácilmente manejable eludiendo caer en las empresas gigantes. Es por eso que siempre que sea factible es saludable acogerse a la fórmula de Bevan cuando exclamó: "¡Una economía mixta!", en el sentido de propiciar siempre la constitución de empresas que vinculen el sector público o privado con el comunitario, a fin de que únicamente se acuda a la nacionalización de aquella industria que resultara eficiente, para evitar una excesiva gestión y control en manos de los burócratas. Es decir, que resulta evidente que la tendencia de la economía de grupo se orienta hacia un maridaje de lo público o de lo privado con lo comunitario, a fin de reducir al mínimo necesario la explotación exclusivamente pública o privada, tendiéndose así a hermanar los intereses que siempre juegan en el interior de un país.
4. LA PROPIEDAD COLECTIVA: CLASES Y EL TRABAJO ORGANIZADO

De acuerdo con lo indicado hasta aquí, la propiedad comunitaria se configura como una modalidad de la propiedad colectiva. Porque después de haber sobrevivido la humanidad a dos guerras mundiales, hoy se advierten nuevas tendencias en las relaciones sociales. Así, terminado el primer ciclo, comprendiendo por tal el primer conflicto bélico, se aceleró la crisis del liberalismo y la sociedad se dirigió hacia un régimen corporativo adulterado, que tuvo su expresión política en los sistemas de Italia (Mussolini), Alemania (Hitler), España (Franco) y Portugal (Oliveira Salazar), y se caracterizó porque la sociedad se organizó de arriba hacia abajo, o sea en una fuerte y totalizadora autocracia bajo el mando de un Jefe carismático y rodeado de cierta aureola romántica y patriótica.

Posteriormente a la segunda guerra mundial, han desaparecido estos sistemas de vida y se han puesto al desnudo problemas sociales específicos y particulares exigencias colectivas, que reclaman con urgencia soluciones satisfactorias. Precisamente, la necesidad de hacer frente a estas circunstancias, ha exigido la progresiva y creciente invasión de la esfera privatista por la acción estatal, sobre todo en el ámbito de la propiedad, que ha llevado a hacer pasar los bienes de la producción de manos particulares a las organizaciones estatales o autónomas. Esta situación ha conducido al descubrimiento del momento “comunitario”, que impone el deber hacia los otros,
integrado en la estructura de la propiedad, emergido de una valoración crítica de la teoría personalista, que ha tenido el mérito de introducir en la relación de dominio, junto a la presencia de la incuestionable conexión del hombre y cosa, la relevancia del factor “intersubjetivo” 47 es decir, la de los otros individuos que de una manera directa o indirecta se encuentran dependiendo del sistema de la propiedad. Tal giro de los acontecimientos históricos ha conducido a la disminución del ámbito de la propiedad agrícola, industrial y comercial de signo unipersonal y a la dilatación correspondiente de la esfera abierta a la intervención pública. 48

En la actualidad se afirman, pues, los deberes que tienen los ciudadanos con respecto al Estado moderno de contribuir con sus propios medios personales y patrimoniales, a la realización del interés público, sacrificando todo lo que sea necesario, para que se pueda apreciar el valor ético del sacrificio en la correspondencia del resultado, de modo que sean evitados inútiles dispersiones o destrucciones de valores y riquezas. 49 De esta manera se viene a destacar más el principio de interés público que aparecía relegado en las épocas históricas anteriores, que en este momento pasa a primer plano e incide de una manera directa en la institución de la propiedad, que siempre ha sido considerada como un bastión de la vida individual.

Es obvio que esto trae consigo el que deje de presentarse como paradigma la denominada por Pugliatti “propiedad solitaria”, o sea la que se constituye a base de la única relación de un individuo con una cosa, es decir, la presencia de una exclusiva titularidad que disfruta de forma absoluta un bien sin la par-
ticipación de los otros individuos o de la misma so-
ciedad.\textsuperscript{50} Es por ello que contemplamos una \textit{debili-
tación de los derechos del propietario}, en el sentido
de una progresiva disminución de su poder o seño-
río sobre la cosa, que hoy no sólo el Estado limita
en sus excesos sino que reduce al mínimo para sa-
tisfacer las exigencias de los sectores sociales más hu-
mildes. Por esta razón, las legislaciones de los pueblos
más avanzados se preocupan ahora de que el propie-
tario no tan sólo \textit{no destruya} su cosa sino de que pon-
ga cuidado en su \textit{administración}, restringiéndose
sus posibilidades de libre transmisión de la misma
conforme a las exigencias de los intereses de la comu-
nidad.\textsuperscript{51} Veamos, por lo tanto, lo atrás que ha que-
dado el concepto de la \textit{propiedad romana}, en la que
el sujeto tenía un poder absoluto sobre la cosa, pre-
valeciento hoy día la tesis que ya defendió Luis Re-
gaud del llamado \textit{derecho real institucional}, en la
que se busca un equilibrio entre el poder que debe
conservar el propietario sobre la cosa (o el \textit{lado inter-
no} de la relación de propiedad) y los deberes que
los demás individuos ajenos a esta titularidad tienen
de respetarla sin inmiscuirse en ella (o \textit{lado exter-
no}).\textsuperscript{52}

De todos modos, no hay que perder de vista que
el reconocimiento del \textit{lado interno} de la propiedad,
o sea la relación directa entre el sujeto o individuo
y la cosa, nos pone de relieve que la propiedad con-
tinúa siendo la institución que permite al individuo
disfrutar de una esfera —como dice Salvatore Roma-
ño— de \textit{autonomía privada} dentro de la cual su titu-
lar puede ejercer poderes y derechos.\textsuperscript{53} Indiscutible-
mente que al prevalecer hoy un sentido \textit{sociológico}
de la propiedad, se restringe mucho más el ámbito de libertad de que disfruta el individuo en la propiedad unipersonal o solitaria, porque hoy presionan sobre él las exigencias del interés común y también, por lo general, la concurrencia de otros sujetos titulares o comunes que comparten el goce de la cosa. De todos modos la autonomía privada del titular propietario es insuprimible (porque suprimida aquélla se elimina también al hombre), y encuentra su justicia, esto es, su concreto derecho en el “honeste vivere”, “neminem laede” y en el “suum cuique tribue”, el cual conlleva no tan sólo un imperativo jurídico sino más intenso, que puede formularse así: “En tu vida y en tus acciones, será siempre justo, y no tan sólo no ofenderá a los demás, sino que se comportará atribuyéndose a sí mismo y a sus acciones, un significado social, esto es, el significado de los auténticos bienes, de los cuales la sociedad pueda directa o indirectamente obtener beneficio para su conservación y prosperidad”. Esto quiere decir, que el centro promotor de los bienes sigue permaneciendo en el individuo, pero que la circunferencia de aquel centro está en la sociedad. En consecuencia, no habría centro, sino hubiese circunferencia mas no podría haber circunferencia sin un centro de la misma. Luego a más potencia de la acción del centro, más rica y más amplia es la estructura viviente de la circunferencia, y, viceversa, a más vivacidad y operatividad de la circunferencia, mayor posibilidad de valores se determinan al centro.54

Está visto, pues, que se busca un equilibrio entre el polo individual y el polo social, que es lo que nos lleva a considerar la que se califica de “propiedad dis-
tribuida” (Pugliatti), en la que varios propietarios concurrentes comparten su señorío o poder sobre la misma cosa. Ya la propiedad, en este supuesto, no pertenece a un solo individuo, sino que corresponde a un grupo de personas que, como tales, constituyen un sujeto autónomo que disfruta en común de la cosa. Es decir, que esta socialidad de que hemos hablado más arriba al referirnos al significado social de la propiedad individual, sin atentar para nada a la autonomía privada del propietario, nos ha conducido al mundo de la propiedad colectiva, que a pasos agigantados va minando el terreno a la propiedad solitaria e inclusive a la concepción de tipo romano, que es una propiedad distribuida o colectiva de cuotas ideales, en la que la pluralidad de sujetos o individuos concurrentes conservan una independencia de sus poderes o derechos sobre la cosa, pero abstracta o idealmente, lo cual les permite gravarla o disponer de ella a su voluntad a favor de terceras personas.

Dentro de esta clasificación de la propiedad colectiva incluimos —como ya hemos señalado— la propiedad comunitaria, que es de característica netamente social, en la que se conjugan una pluralidad de individuos que actúan como un haz de voluntades, constituyendo un autónomo grupo social y, frecuentemente, una actividad laboral inteligentemente organizada y dirigida a la consecución del bien de la comunidad. Resulta evidente que esta especie de propiedad exige una compenetración entre los individuos que participan del objeto común, cuyo interés debe hallarse siempre compresente en cada uno de ellos como
manifestación unitaria del impulso que debe animar-
los a la actividad de los recursos que tienen en su po-
der para el logro de la función social que se les ha en-
comendado.

Estamos, pues, en presencia de un nexo inderoga-
ble entre la propiedad comunitaria y el trabajo orga-
nizado, debido a que siempre los individuos que par-
ticipan en ella con la titularidad de comuneros, lo 
hacen en virtud de una conciencia activa de ser suje-
tos actuantes en el desarrollo nacional. De aquí que 
esto tipo de propiedad especifique su carácter colec-
tivo constituyéndose como una auténtica comunidad 
de trabajadores, que hace de esta propiedad un instru-
mento de cambio social, considerado permanentes-
mente como un elemento dinámico de la estructura 
comunitaria, que no admite estancamiento aun cuan-
do se hayan alcanzado estadios sociales más progre-
sistas que los actuales.

Ya dijimos que la polarización de la sociedad ha-
cia un régimen de propiedad comunitaria, tiene como 
finalidad suprimir la explotación del trabajo ajeno. De 
esta guisa se hace partícipe de los bienes a la totali-
dad de los hombres de una comunidad nacional a 
base del imperativo de que todo individuo tenga que 
trabajar y lo suficiente para cubrir sus necesidades; 
o sea que estamos en presencia de lo que pudiéramos 
calificar “la inversión del capitalismo”, desde el mo-
mento que estamos poniendo el capital en manos del 
trabajo organizado.

Este paso en el régimen de la propiedad viene a 
significar, no tan sólo la superación de la etapa del 
liberalismo y del neoliberalismo, sino también de la 
propiedad cooperativa. ¿Por qué? Sencillamente por-

202
que la propiedad liberal capitalista es el prototipo de la propiedad privada, cuyo elemento fundamen-
tal es el capital, mientras que la propiedad cooperativa surge como una reacción contra los abusos del capitalismo y se constituye como un instrumento de defensa de los socios que participan en ella; y en la empresa autogestionada, los trabajadores tan sólo son dueños de la gestión y de los ingresos que perciben, pero no de la propiedad de la empresa, cuyo titular nominal es el pueblo o, en última instancia, el Esta-
do o alguno de los organismos infraestatales.

En la propiedad comunitaria, por el contrario, cu-
ya médula es la comunidad de trabajadores, respon-
de primordialmente a las exigencias del bien común, de tal modo que tan sólo debe existir cuando éste lo requiera, cumpliendo una quintuple finalidad:

a) Favorecer los intereses de la comunidad.
b) Garantizar los intereses de los comuneros.
c) Promover el trabajo organizado.
d) Hacer producir al capital mediante la obten-
ción de una utilidad; y
e) Plasmar en una acción dinámica el principio de justicia social.

Sin embargo, la distinción entre la propiedad coo-
perativa y comunitaria viene casi a desaparecer en la llamada cooperativa de producción, en la cual “el cará-
tér contradictorio del trabajo de dirección des-
aparece, puesto que el director es retribuido por los trabajadores, en lugar de presentarse frente a ellos como el capital”.58

Es manifiesto que en esta clase de propiedad jue-
ga un papel sustancial el principio de justicia social, por cuanto que el propietario deberá ostentar el status de miembro de la comunidad de trabajadores, razón por la cual aportará a la sociedad los bienes o servicios que se le exijan como tal y, en compensación, recibirá de ésta lo suficiente para llevar una vida digna.

Es indudable que la imagen que acabamos de dar de la propiedad comunitaria corresponde al modelo tipo al que puede llegarse también por un proceso gradual, con lo cual estamos abogando por otras modalidades de la propiedad comunitaria, que calificamos de incompletas o imperfectas; v. gr., los casos de propiedad horizontal o el condominio de vivienda, cuando tengan carácter eminentemente popular; o la empresa agrícola o industrial, en que la propiedad sea compartida entre el empresario o dueños del capital y los trabajadores, etc. Sin duda alguna, que el concepto de propiedad comunitaria imperfecta corresponde —como dijimos— al de propiedad mixta, que inclusive René Dumont considera puede tener una gestión tripartita: Estado, empresario y trabajadores. Estos últimos recibirían una parte de los beneficios de la empresa para estimularles a desarrollar un esfuerzo mayor en su trabajo, a cuyo objeto se les haría también participar en su junta directiva a través de representantes elegidos democráticamente. Así esta propiedad viene a ser una solución intermedia, pues dentro de este tipo podría aceptarse la aportación por extranjeros de sus técnicas y máquinas, las que de momento no serían adquiridas por la empresa, sino de manera progresiva y después de haber dado pruebas los trabajadores de competencia y res-
ponsabilidad social.\textsuperscript{59}

Por último, advertimos que el \textit{contenido} de la propiedad comunitaria responde a una \textit{trilogía}:

a) A una pluralidad de sujetos o individuos que establecen entre sí una relación intersubjetiva.

b) A una \textit{cosa}, para su uso (la vivienda popular), o \textit{prestación de servicios} (el transporte público, las Cajas de Ahorro), o para su \textit{explotación} (la empresa agrícola o industrial); y

c) A la \textit{justicia social}, en cuanto se funda en el beneficio de la comunidad.

5. EL PATRIMONIO DE AFECTACIÓN

En el régimen de \textit{propiedad capitalista} el patrimonio pertenece al propietario individualista, mientras que en la \textit{propiedad marxista} el patrimonio está en manos del Estado, aun cuando teóricamente su titular sea el pueblo. Por el contrario, en la \textit{propiedad comunitaria} estamos en presencia de un \textit{patrimonio de afectación}; es decir, que son \textit{bienes} destinados a un \textit{fin social}, con la característica de que pertenecen a los titulares y a la comunidad de trabajadores. Porque en el sistema de \textit{propiedad privada} es notorio que ésta pertenece con exclusividad a su dueño, que no tiene otro compromiso con la sociedad que el pago de las cargas impositivas y las restricciones legales que se impongan al ejercicio de su derecho individual. Y por lo que se refiere a la \textit{propiedad pública} y a la \textit{propiedad cooperativa} de la sociedad marxista, es cier-
to que sus patrimonios también cumplen una finalidad social, pero propiamente los trabajadores no pasan de ser más que unos simples asalariados, cosa que vemos no sucede en la propiedad comunitaria, donde a pesar de esta afectación social del patrimonio, los trabajadores son unos verdaderos propietarios de su comunidad. Por lo que es natural que esta especie de propiedad no encuentre régimen legal apropiado dentro de las pautas del individualismo liberal, ni del sistema marxista.

Se hace patente, pues, que descartamos la filosofía individualista que confronta lo mío con lo tuyo y propiciamos “la filosofía del nosotros” de que hablara Emmanuel Mounier. Esto supone también minimizar hasta el máximo el principio de “ánimo de lucro” que preside toda la economía de mercado de la sociedad capitalista. Porque estamos convencidos de que la economía de mercado, en su vertiente de lucro y no de utilidad racionalizada, conduce al desorden, a la anarquía y a la inmoralidad en que se debate la sociedad de nuestro tiempo; pues dentro de ella la tendencia del capitalista es invertir exclusivamente en aquellas cosas que proporcionan desorbi- tantes beneficios, inclusive tratándose de valer de una propaganda sicológicamente dirigida o del monopolio de la producción o mediante la protección arancelaria, cuando desgraciadamente no se recurre a otros procedimientos reñidos con la más elemental ética de los negocios.

Por descontado que también rechazamos la filosofía colectivista que todo lo pone en manos del Estado y reduce a la persona a la mínima expresión de un número más del agregado social desconociendo
así su dignidad moral y espiritual, que conlleva que las cosas estén a su servicio y no, por el contrario, que el hombre sea un mero instrumento de la producción en beneficio de un pueblo hipotético y abstracto, cuando la sociedad está integrada por hombres de carne y hueso, que piensan y son libres y siempre tienen la esperanza de alcanzar un mundo mejor.

6. LA ECONOMIA CAPITALISTA Y LA ECONOMIA DE NECESIDADES: LOS INCENTIVOS AL TRABAJO Y LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Hay que tener en cuenta que la economía capitalista, impulsada por el “ánimo de lucro” —sin hallarse controlada por ningún principio moral—, su objetivo es producir más y más. Indudablemente que esto exige la presencia de un hombre insatisfecho constantemente, desde el momento que el desarrollo de la producción está sometido a un constante crecimiento. Porque es obvio que la finalidad de una sociedad productiva no es satisfacer las necesidades verdaderamente sentidas por el individuo, sino en producir necesidades para vender sus productos; por lo mismo, necesita crear un hombre en estado perpetuo de necesidad. Aparte de que el aumento de nivel de vida no implica como correlato una disminución equivalente del tiempo de trabajo; pues todo nivel de vida nuevo despierta el afán de adquirir una vida de rango superior que exige necesariamente más gastos que únicamente pueden cubrirse o por más
trabajo o por el logro de más beneficios alcanzados por un desmesurado ánimo de lucro, que responde al apetito insaciable del “egoísmo individual”, que en su exacerbación sí puede recurrirá a la especulación y a la evasión de impuestos, provocando así en la sociedad la desorganización social y casos mayúsculos de injusticia hiriente.

Así el crecimiento del consumo es necesario a una economía que no puede subsistir más que mediante el aumento constante de la producción; es decir, que no se acaban de satisfacer unas nuevas necesidades para inmediatamente pasar a crear otras nuevas. De aquí que estemos en un círculo vicioso, donde el trabajo se encuentra sometido al servicio de la producción.61

Estamos, por el contrario, a favor de una economía al servicio del hombre, que se ha llamado economía humana, por el predominio del elemento moral, que fue desterrado de esta área por el capitalismo. A este propósito hablamos de una economía de necesidades, que consiste en la producción de las cosas que necesita el hombre para vivir una vida digna y decorosa; y no como sucede actualmente en que el hombre de nuestro tiempo vive angustiado (a esto respondió la filosofía existencialista de Sartre) las más de las veces por alcanzar a precios fabulosos (el ánimo de lucro de la economía capitalista) bienes superfluos o de lujo, llevado del afán de querer satisfacer con bienes materiales sus vacíos o crisis espirituales en un tipo de sociedad que ha propiciado la “subversión de valores”, colocando en primer término los económicos cuando este lugar le corresponde a los de signo espiritual o moral. Desde este
punto de vista la economía de necesidades tiene que hacer un replanteamiento de los valores que hoy están en circulación, para llegar a articular una auténtica "jerarquía de valores" que devuelva al hombre su iniciativa particular, libre de sometimientos más o menos solapados, para que a través de mecanismos adecuados consiga establecer una permanente participación popular que, en cada circunstancia histórica, sea capaz de satisfacer las preferencias del conglomerado comunitario.

Se trata, pues, de actuar así para alcanzar una nueva orientación metodológica en el campo de las ciencias sociales, que nos permita desarrraigar al hombre de su fruición economicista a fin de hacerle tomar conciencia de su humanidad, para que recobre la dignidad que tiene perdida; y esto sobre todo nos interesa hacerlo con el trabajador, por integrar la clase social limpia del pecado de explotación. Ya que el esquema de la propiedad comunitaria no se propone alcanzar el estadio del trabajador-propietario con el propósito de convertir a éste en un nuevo pequeño burgués, que es lo que vino a realizar la Revolución francesa con los resultados de todos conocidos: el desbarajuste social que hoy vivimos.

Para esta reestructuración axiológica la doctrina comunitaria aporta un fermento, una luz; no provee de recetas circunstanciales, ni de un plan de conjunto definitivo, sino que contiene en germen múltiples soluciones, según la calidad de los dirigentes, el valor humano de los hombres, la tenacidad de los hábitos y de las tradiciones, el contexto económico y las oposiciones políticas. Es menester construir a partir de los hombres, aceptar un conjunto de ob-
jetivos comunes, de esfuerzos comunes, de sufrimientos comunes, admitir dirigentes comunes. Hay que operar grupo por grupo, sector por sector, tanto a través de las ramas profesionales como de las unidades territoriales más naturales.⁶²

Téngase en cuenta que la cuestión de la propiedad no es más que uno de los problemas planteados por el mundo moderno en lo que concierne a los bienes del hombre, si bien para nosotros radica principalmente en la conjugación de los conceptos de propiedad y comunidad. Empero, no debe olvidarse, que los problemas económicos de los bienes materiales están ligados a los problemas supraeconómicos de los bienes del cuerpo y del espíritu; por lo tanto, sería vano tratar de reformar el régimen de la propiedad sin restablecer antes los principios metafísicos y morales que están en su base. Por eso hacemos entrever que la propiedad reviste, a los ojos del filósofo, un doble significado:

a) El de una prolongación de la persona en los bienes poseídos, ya que la propiedad es una salvaguardia de la libertad de aquélla; o
b) El de una sublimación de los bienes poseídos por su accesión a la persona,⁶³ como medio de satisfacer sus necesidades espirituales y materiales.

De esta manera se comprende como se trata de establecer, sobre el plano ideológico, un ligamen entre la propiedad y la esfera de la personalidad al poner la cosa o la empresa al “servicio del bien común”, categoría que encuentra su acepción en la teoría tra-
dicional en la llamada propiedad intelectual o dere-
cho de autor,\textsuperscript{64} que nosotros hemos calificado de
“derecho real intelectual” sobre “bienes inmateria-
les”, porque son el producto de la creación espiritual
del hombre y significan la proyección de su persona-
lidad sobre los bienes.\textsuperscript{65} Es decir, se hace necesario
decantar al concepto de la propiedad del sentido ne-
tamente \textit{económico} que le ha imprimido el liberal
capitalismo, como del carácter de \textit{poder} que le insu-
fló el Derecho romano a fin de investirle en nuestra
época de una orientación \textit{personalista y comunitaria},
que haga del concepto de la propiedad en su senti-
do dinámico la posesión de los bienes para el disfru-
tes de la persona el crédito moral.
ral, de los derechos políticos en los países de adop-

ción.66

Nuestra meta es alcanzar una economía de nece-
sidades, esto es, humana, en la que se ponga límites
a la producción de acuerdo a las exigencias de un
mercado competitivo, que ofrezca justos beneficios
a los productores y mercaderías de buena calidad
a los consumidores y a precios racionales y morales.
Para ello hoy disponemos de una tecnología avanza-
da que permite la máxima producción con el míni-
mo esfuerzo humano, con lo cual se podrán reducir
notablemente los horarios de trabajo para acabar con
la lacra del desempleo y así conseguir que todo hom-
bre sea un trabajador, lo cual permitirá asimismo su
formación intelectual y cultural para mitigar hasta
el máximo los espectáculos indecorosos que ofrecen
los hombres "animalizados" por el alcohol, las dro-
gas u otros vicios.

Tenemos que seguir incentivando al trabajador
para que alcance un rendimiento eficaz. Estos estí-
mulos tienen que ser de tipo moral y de índole econó-
mica; entre los primeros se citan, entre otros, la exalt-
tación de sus méritos, la concesión de condecoracio-
nes, las facilidades para mejores y más vacaciones,
opportunidades para su perfección cultural y técnica,
etc.; y en cuanto a los económicos caben señalar:
mayor participación en los beneficios de la empre-
sa, nuevos empleos mejor remunerados, primas por
el trabajo mejor realizado, etc. Ya escribió Lenin, que
había que conjugar el interés material de los obreros por
los resultados del trabajo con el entusiasmo revolucionar-
rio de las masas y con la profunda comprensión de los

212
intereses de toda la sociedad. Es por ello que hay que interesar también a cada individuo por separado, o sea, elaborar estímulos concretos del trabajo individual; a la vez que hacer comprender al productor que, el trabajo para la sociedad es, al mismo tiempo, trabajo para sí.\textsuperscript{67} Es indudable que el mantener la mística elevada en el mundo del trabajo es fundamental para alcanzar una buena productividad en calidad y rendimiento; pero su perseverancia —que es aquí lo más importante— depende de que el ambiente de la sociedad sea igualmente sano y apropiado para la realización de los valores humanos, culturales y morales, ya que de no ser así habrá que acudirse más pronto o más tarde a métodos coercitivos que obliguen a trabajar, puesto que el “entusiasmo en las masas” siempre es una nota pasajera que hay que apuntalar —como dijimos— con los incentivos morales y materiales y, sobre todo, con un ambiente de legítima libertad —no abuso— que permita a la persona sentirse a gusto para realizar sus labores cotidianas de trabajo y creación personal.

No se pierda de vista que el hombre frente al trabajo tiene muy diferentes actitudes: hay quienes trabajan para matar el aburrimiento. Por eso se aconseja que los jubilados tengan la posibilidad de seguir siendo útiles a la comunidad, siempre que lo deseen, a cuyo fin se recomienda que se les permita continuar trabajando en los talleres y centros laborales públicos.\textsuperscript{68} Otros, por el contrario, se ven impulsados a trabajar por un afán vocacional, sin dejar de tener en cuenta al hombre común, que únicamente busca en el trabajo satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Por consiguiente, hay que to-
mar en consideración esta gama de satisfacción de necesidades a fin de configurar la propiedad comunitaria más allá de su simple concepción lógico-normativa, como una institución humana, que cuenta con resortes morales y materiales capaces de impulsar al hombre a encontrar en el trabajo la satisfacción de sus propias necesidades a la vez que se ve movido a actuar en beneficio de la comunidad.  

Arturo Uslar Pietri, a raíz de la compra de trigo que efectuó la Unión Soviética a los Estados Unidos, por el monto total de 750 millones de dólares, teniendo en cuenta que Ucrania ha sido siempre el granero del continente europeo, se hacía las siguientes reflexiones: El granjero norteamericano es el representante de una mentalidad individualista y de un tipo humano que se ha formado bajo los principios de la ética puritana, movido por ideales de trabajo, ahorro y propiedad. El campesino soviético, por el contrario, ha sido incorporado a un sistema que se propone cambiar la mentalidad humana y sustituir los propósitos e impulsos egoístas y adquisitivos por finalidades altruistas y colectivas. Ahora bien, se pregunta: “¿Se puede llegar a cambiar efectivamente la naturaleza y la mentalidad humanas y lograr que libremente los hombres realicen todo el esfuerzo que han hecho en el pasado movidos por el interés individual y egoísta, impulsados ahora por fines abstractos, ideológicos y altruistas?”.

A nuestro entender, el legislador nunca podrá perder de vista las exigencias de la naturaleza humana en la regulación que haga de la vida del trabajo y sus incentivos para estimular al ser humano a una acción permanente; por lo tanto en su legislación tendrá
po de la *ganancia* y en el del *consumo*, ya no tan sólo en la esfera de los llamados hombres de negocios sino que a todos los niveles de la sociedad, incluyendo a los mismos profesionales, que ya son cada vez más raros los casos de los que hacen sus estudios por vocación, y de los trabajadores, que también suelen abusar en cuanto pueden, bien trabajando mal o a desgana o no acudiendo al cumplimiento de su horario de trabajo. Por esta circunstancia la situación se ha agravado en todos los campos de la *economía* y de los *servicios sociales*, a nuestro modo de ver porque no se tienen en cuenta los factores “racionales”, “morales” y “personales” que deben ser consustanciales a toda buena organización social, sino que, por lo general, las instituciones públicas se rigen por prioridades políticas y de conveniencia, mientras que en las privadas prevalece desmesuradamente el “ánimo de lucro”.

¿Cómo habrá de resolverse esta situación? Obviamente, mediante la “comunitarización de la sociedad”, que es el punto de equilibrio entre el “marxismo totalitario” y el “neofascismo” que cada vez toma más cuerpo y virulencia entre amplios sectores de la juventud y grupos económicos interesados en fomentarlo. ¿En qué consiste esta “comunitarización”? En planificar racional y moralmente la “socialización” a la vez que se estimula la “iniciativa particular” para evitar el engrosamiento de una burocracia parasitaria. A este propósito, hay que tender a buscar, en el orden de los bienes, un *consenso general* sobre cuáles son las necesidades primordiales a satisfacer, lo cual requiere una participación planificadora de acuerdo a una política de necesidades. Dicha planificación
le corresponde fijarla al Estado conjuntamente con las *sociedades intermedias*, comprendiendo entre las mismas a las comunidades de trabajadores y a las “asociaciones de consumidores”. Así se producirá un *sistema de equilibrio de poderes* a través del cual se busque prevalezca el beneficio común frenando, hasta donde sea posible, la tendencia *egoísta* humana que, siempre a la postre, le ocasiona al ser humano más perjuicios que ventajas. Por eso la economía de necesidades, que imprima relevancia a sus aspectos moral y humano, con un adecuado mecanismo de planificación, fiscalización y control, para evitar las desvirtuaciones y abusos que siempre aspirará a cometer el hombre egoísta insatisfecho, es muy superior en sus realizaciones a una economía de “lucro”.

Es indudable que, en este aspecto, jugarán un papel capital las “asociaciones de consumidores”, que deben mantener un alto grado de autonomía frente a la Administración Pública. Independencia jurídica que requiere asimismo de la económica. Aquí es donde puede encontrarse el primer esclavo importante para su constitución. Sin embargo, si aquellos que promueven una asociación de este tipo cuentan con una gran base de apoyo, pueden solicitar préstamos o hacer participar a los asociados con una pequeña cuota inicial; de esta manera podría informarse objetivamente al consumidor de la variada gama de productos que se ofrecen en el mercado, analizando sus características mediante ensayos comparativos, organizando servicios consultivos y delatando los fraudes cuando los haya. Para realizar esta tarea se precisan laboratorios y oficinas de información repartidas por todo el país. Es muy posible que a esta labor puedan
colaborar las instituciones educativas, especialmente las Universidades.

Sobre el particular, cabe señalar que los derechos reconocidos a los consumidores, pueden resumirse así:

1) Derecho a la seguridad; es decir, a que los productos no sean perjudiciales para la salud.

2) Derecho a no ser engañados por la publicidad u otras prácticas en uso, como en el etiquetaje y precios.

3) Derecho a una completa información, incluso de carácter comparativo entre los distintos productos; y

4) Derecho a participar en las deliberaciones relativas a los productos, en iguales circunstancias que agricultores, comerciantes y otros grupos que afectan directamente a sus intereses.

Es fácil colegir, como montando toda esta estructura participativa popular, se trata de poner a disposición del pueblo unos mecanismos de acción que le permitan alcanzar la categoría de sujeto activo de la sociedad en toda la gama de actividades humanas, desde la propiedad de los bienes de producción hasta la de los bienes de consumo, a fin de instaurar una democracia auténtica, fuerte y solidaria, que tienda a la superación de la lucha de clases. De este modo, la economía no tendrá más fin que facilitar el desa-
rollo integral de la persona humana. A este objeto se ha propuesto, que así como el Código civil defiende nuestras libertades cívicas, se promulgue un Código económico que defienda nuestras libertades económicas.75

7. ¿EN QUIEN RADICA LA PROPIEDAD?
¿QUIEN APORTA EL CAPITAL?

Varían los criterios en cuanto a si la propiedad debe radicarse en las personas que integran la comunidad de trabajo o, por el contrario, en la misma comunidad. Jacques Chonchol y Julio Silva Solar, han considerado que la propiedad del patrimonio comunitario está radicada en la comunidad en cuanto tal, y no en los individuos. Las justas diferencias que originan distintas necesidades entre los diversos participantes de la comunidad, de acuerdo con las responsabilidades propias de cada una, se establecen en el plano de la dirección y participación en las utilidades, pero no del dominio. Es decir, que según estos autores, en el sistema comunitario las comunidades son los dueños reales, pero de ninguna de las maneras el Estado capitalista.76

Algunos han alegado que al hacerse radicar la propiedad en la comunidad, según proponen, entre otros, Chonchol y Silva, se corre el riesgo de dejar desamparada de protección y de defensa a la personalidad del trabajador. Sin embargo, para Mario Zañartu la cuestión principal radica en que la autoridad de la empresa se hace depender de la comunidad de trabajad-
dores, aun cuando esta comunidad no sea la propie-
taria de los capitales utilizados, si bien considera que
esto sería lo ideal, pero no se plantea si la propiedad
correspondería a la misma comunidad o a sus miem-
bros comuneros.77 De todas maneras, parecen coi-
cidir las opiniones en que la propiedad comunitaria
constituye una sociedad de tipo germánico (colec-
tivo) en “mano común”, donde los comuneros se
encuentran vinculados por lazos de solidaridad, sien-
do cada uno de ellos dueño de la totalidad de la co-
sa, con las restricciones que impone la explotación
comunitaria y las exigencias de la justicia social.
A nuestro parecer, la pregunta ¿a quién correspon-
de la propiedad? vale contestarla: La propiedad per-
tenece a los trabajadores EN TANTO Y EN CUANTO
participan en la comunidad de trabajo; esto es, no
se asigna a los trabajadores independientemente, ni
tampoco a la comunidad aislada y abstractamente.
Porque el trabajador aquí se inviste de propietario
por cuanto se vincula a la comunidad de trabajo, com-
penetrándose así las partes con el todo, en el sentido
de que ninguno de ellos puede considerarse separado
de los demás miembros. De aquí las limitaciones de
los poderes y derechos de que disponen los comu-
neros. Así superamos el concepto que algunos pu-
dieran tener de que la propiedad comunitaria es la
“simple suma de los trabajadores que la integran”
o, por el contrario, es “una comunidad abstracta y
descarnada” aislada de su componente humano. El
trabajador vive en función de su comunidad de tra-
bajo, del mismo modo que ésta vive en función de
la comunidad nacional. Es por eso que admitimos
en la propiedad comunitaria una titularidad perso-
nal que corresponde a cada trabajador-propietario como tal, y, a la vez, una titularidad comunitaria, cuyo ejercicio atañe a cada trabajador en nombre de todos los integrantes de la comunidad de trabajo, o a la totalidad de los trabajadores de la empresa.

En cuanto al capital de la propiedad comunitaria, parece ser opinión unánime, que él desempeña un papel auxiliar en las empresas constituidas en esta especie de régimen. Así lo expresa, entre otros, Alejandro Dubois, en la revista francesa Professions, quien afirma: “El problema no está en suprimir al aportador de capital, sino en colocarlo en su verdadero lugar, el de un servidor de la empresa y no el de dueño de la empresa, de un propietario exclusivo, de un dominador”. También Jean Gondry, en La Revue Nouvelle, de Bruselas, señala: “Lo que ha ocurrido es que la propiedad ha sido transferida a un nuevo ser: la empresa. Los dirigentes –añade– ya no son los mandatarios de los accionistas cuyos bienes administran, sino los gerentes del patrimonio económico de la empresa”.78 Sin embargo, tanto Dubois como Gondry no parecieran descartar la figura del capitalista, sino el relegarla a un lugar secundario, o sea, el de servidor de la empresa.

A este respecto, responde más genuinamente al sentido comunitario, Andrés Garrigou-Lagrange, quien se pronuncia por la superación de la dicotomía capital y trabajo que se da en la empresa capitalista fusionando ambos elementos en manos del trabajador-propietario de manera que en la propiedad comunitaria los capitales sean aportados:
a) O por el Estado.
b) O por personas distintas de los trabajadores de la empresa; y
c) O por los mismos trabajadores.\textsuperscript{79}

Jaroslak Vanek considera que es mejor el\textit{ financiamiento externo de la empresa}, es decir, por intermedio de una corporación o institución externa como un\textit{ banco estatal}, en el caso de países socialistas, o de una\textit{ asociación de ahorros} integrada en parte o enteramente por miembros de la empresa, o lo que él califica de Agencia Nacional de Autogestión, porque de esta manera se facilita la formación de\textit{ empresas nuevas}.\textsuperscript{80} En esta misma línea de pensamiento nos encontramos a Claudio Huepe, para el cual también es preferible que la empresa comunitaria reciba el capital a través de un Fondo externo, sin que la empresa tenga que saber su procedencia. Así se evita la presión sobre ellas. Dicho Fondo aporta a las empresas los capitales necesarios y cobra un\textit{ interés} por el uso de ellos. El aporte se hace sin plazo de vencimiento y la empresa nunca lo devuelve salvo que se disuelva. Si el Fondo aporta a plazo redimible, a medida que se vaya amortizando, los trabajadores se irán haciendo dueños del capital, creando y guardando ellos mismos un\textit{ fondo de reserva de depreciación}, a medida que los activos se vayan desgastando.\textsuperscript{81}

Estamos de acuerdo en que lo propuesto por Vanek y Huepe es lo más adecuado al régimen de propiedad comunitaria, esto es, que el capital —como elemento auxiliar de la empresa— sea proporcionado por una\textit{ institución intermedia}, que denominan Fondo, y que sirve de intermediaria entre el ahorrante
(sea persona, institución o Estado) y la empresa que lo recibe. Empero, estimamos que se debe ser flexible y, por lo tanto, también tratar de incentivar a los trabajadores, que hayan ahorrado un capital, y a los pequeños propietarios, a que aúnen sus esfuerzos para fundar empresas comunitarias con capital propio que puedan contribuir a la productividad con un profundo sentido social. Pues no pasará desapercibido que hemos hecho recaer sobre el trabajador-propietario la fundamentación de la empresa, siempre que éste dé muestras de su mentalidad comunitaria.

8. LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD Y LAS VENTAJAS DE LA POSESIÓN

Después de lo expuesto, ya estamos en condiciones de formular los elementos que deben presidir esta institución:

1) El *trabajador-propietario*, que supone la fusión de capital y trabajo en manos de una persona, que va a adquirir prestado aquél o lo va a aportar él, para hacerlo producir mediante su esfuerzo intelectual y manual dentro de la *comunidad de trabajo*, que constituye mancomunadamente con otros trabajadores, que contribuyen de igual modo a la formación del *patrimonio común*, surgiendo así esta figura jurídica que tiende a compendiar en el mismo *titular humano* lo que en la sociedad capitalista aparece dividido, en el empresario, que aporta el capital, y el
trabajador, quien desempeñando un papel subordinado en la empresa, entrega a cambio de un salario su trabajo.

Es nítido que preconizamos una posición superadora del capitalismo y del marxismo, en la que el juego de la dialéctica hegeliana: tesis (trabajador) y antítesis (propietario) se concilian en la síntesis (trabajador-propietario), quien necesariamente tiene que encarnar un ser nuevo depurado del egoísmo individualista que encierra cada uno de estos términos: el trabajador que fundamentalmente aspira a obtener un más alto salario, sin ninguna intención de producir con más eficiencia y calidad; y el propietario que tan sólo está obsesionado por obtener el máximo beneficio del capital invertido, sin tomar en consideración los deberes que tiene para con sus trabajadores y la misma sociedad.

En consecuencia la acuñación de la figura trabajador-propietario, supone alcanzar una nueva mentalidad trabajadora imbuida de espíritu de responsabilidad, y una concepción de la propiedad orientada hacia la productividad calificada y con profunda sensibilidad social. Mediante esta formulación se elimina el antagonismo entre trabajo y capital.

2) La comunidad, es el único lecho auténtico en que puede germinar la propiedad comunitaria a través de su figura radiante y sintetizadora del trabajador-propietario, que exige un círculo de acción en que su fuerza operativa surja del “grupo social” en que está inmerso, es decir, originada de adentro hacia afuera. Esto sólo puede darse en la comunidad que, según MacIver, supone una unidad espiritual basa-
da en los propósitos comunes e interdependientes de sus miembros integrantes y no una simple “suma de individuos” considerados en abstracto y sin una relación íntima entre sí. A esto responde el concepto de comunidad que acuñó Tönnies, ya en 1881, cuando le opuso al de “sociedad”, la cual tan sólo es fundada en una relación “contractual y voluntaria”. Por el contrario, el tipo de comunidad aspira a un status de sus miembros del que emana la expresión de una “voluntad esencial”. De aquí que Tönnies atribuya a la comunidad las características siguientes:

a) Constituye una relación originaria, positiva y recíproca de agrupaciones humanas, que actúa dentro de ellas mismas unitariamente y que se proyecta al exterior de idéntica manera; y
b) Denota una manifestación de la vida real y orgánica y su fundamento se encuentra en la unidad perfecta de la voluntad humana.

Así puede darse entre los trabajadores miembros de la propiedad comunitaria una vinculación íntima y profunda que en última instancia está fundamentada en el “amor social”. Nadie puede desconocer que la fuerza del amor es capaz de transfigurar a los individuos, puesto que consigue motivarlos y fundirlos en torno a una “obra común”, a base de limar las aristas egoístas que los separan estimulando su aproximación espiritual —que es la fuente prístina de la generosidad—, sin por ello subyugar las individualidades humanas.

Habida cuenta de esto es que se expresa que la
¿Comunidad implica siempre la “conjunción de personas”. Es el marco y, a la vez, el laboratorio que consigue homogeneizar las diferencias naturales personales fundiéndolas en la manifestación de una voluntad comunitaria.

3) La persona, es el núcleo vital de la comunidad de trabajadores, siendo la que dinamiza permanentemente el “colectivo personalizado”, puesto que vivimos en una época en que ya el “individuo abstracto” de la Revolución francesa, desarraigo de las instituciones en que nace y desarrolla su vida, ha perdido su vigencia ante el empuje socializador de nuestro tiempo. Es por eso —como ha escrito Héctor González Uribe— que hoy ya no debe hablarse del “hombre” solitario, sino de los hombres, con toda la rica gama de sus proyecciones sociales —como jefes de familia, trabajadores, educandos, ciudadanos, emigrantes, miembros de una comunidad religiosa—, como también de las comunidades sociales en cuanto tales, por cuanto que el nuevo concepto del hombre es el del “hombre social”, que es la síntesis armónica del individuo egoísta y del hombre masa.85

Precisamente el nacimiento de este “hombre social” significa la muerte del “individuo abstracto”, desde el momento que al tomar éste contacto con las comunidades adquiere conciencia de su “personalidad” con lo cual empieza a diferenciarse de los otros individuos y entonces deviene “persona”, debido a “que sólo en la vida social la existencia individual se hace persona”.86 Luego la persona está en función de la vida en sociedad, que es donde adquiere su “identidad” porque en ella toma conciencia de sus ideas
y de sus querencias y de las finalidades que le cometen alcanzar como ser racional. Porque el hombre es ante todo "conciencia" de los otros hombres y de las cosas; por lo tanto, desde este momento que se hace persona se convierte en un "ser abierto" a la humanidad y a las cosas y, por consiguiente, con disposición a la "cooperación" con los otros seres humanos y, al mismo tiempo, con su propia conciencia crítica, que le permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto, dentro de una concepción espiritual y moral del mundo.

En consecuencia es indudable que el arraigamiento de los trabajadores en la comunidad de trabajo sirve para acrecentar su personalidad, por cuanto es un medio adecuado para la afirmación de su libertad en comunión con los demás trabajadores de la empresa. Porque sólo es la miseria o el exceso de bienes materiales lo que despersonaliza al ser humano. O un sistema político totalitario que únicamente considera al trabajador como exclusivo "instrumento de producción", lo cual está lejos de ser en la concepción de la propiedad comunitaria que la contempla como manifestación del "soplo divino" y, por ende, viviendo en un "estado de pobreza", que equivale a utilizar los bienes materiales para la satisfacción de sus propias necesidades y puestos al servicio de los grandes ideales de la comunidad. Es por ello que los términos de "socialización" y "personalización" no se excluyen sino que, por el contrario, "ontológicamente se reclaman mutuamente, pues la persona es un ser social y la sociedad se apoya en la per-
sona”.89 De aquí que hayamos dicho, que la “comunidad de trabajadores” está integrada siempre por una “pluralidad de personas”.

4) La *justicia social*, en cuanto principio legitimador, inervador y promotor, que fundamenta, renueva e imprime agresividad a las estructuras comunitarias, para que el cambio social sea una constante de la nueva sociedad. Porque aquí al trabajador le contemplamos como miembro de su comunidad de trabajo en atención a una “justicia distributiva” que le retribuye por el “lugar que ocupa en la comunidad”, en correspondencia a su fuerza de trabajo; y que le exige dar en virtud de la “justicia legal” lo que debe a la comunidad nacional.90 Es notorio, pues, que impulsamos así a la concepción tripartita aristotélica —justicia conmutativa, justicia distributiva y justicia legal—, a abrirse hacia los nuevos tiempos que exigen poner de relieve el *aspecto social* que tenía relegado el liberal-capitalismo. Conseguimos, por lo tanto, acuñar un nuevo término de justicia —la justicia social—, utilizando elementos aristotélicos pero, a su vez, superando la clasificación clásica de la justicia para dar entrada a esta nueva visión que incorpora al goce de los bienes materiales, culturales y espirituales a ingentes masas humanas que hasta ahora permanecen marginadas de los dones de la civilización.

He aquí, pues, el criterio dinámico que toma este concepto de justicia social, que se convierte en regulador tendiente a establecer el equilibrio entre los poseedores y los desposeídos, entre ricos y pobres, entre los socialmente fuertes y socialmente débiles, en un tipo de sociedad que ha sido corroída por la
lucha de clases y en la que los trabajadores han tomado conciencia de su miseria y aspiran a una nueva perspectiva de lucha y de transformación global para alcanzar una nueva concepción de las relaciones económico-sociales. Entonces no cabe duda de que la justicia tiene que abrirse hacia los valores de la personalidad, que se encuentran marginados en la masa humana que integra el proletariado, para hacer un esfuerzo que conlleve su incorporación al seno de una sociedad justa en la que alcancen su perfectibilidad humana. A nuestro entender, esta incorporación de los seres humanos marginados a los bienes de la sociedad tiene que lograrse a base de que ellos pasen a participar también del bien común, el cual no tan sólo exige la "comunicación" de sus bienes, sino que los beneficiados con ellos contribuyan a su acrecentamiento, función que corresponde cumplir a la justicia social, para cuyo cometido ésta puede ser "que exija la creación de nuevas instituciones —como, en nuestro caso, la propiedad comunitaria— que hagan factible la "perfectibilidad humana" —a través del logro de los "valores de la personalidad"— en el seno del bien de la comunidad. De este modo, la concepción del bien común aristotélico-tomista irradiía su luz y su bondad sobre sectores sociales que hasta ahora han venido viviendo al margen del disfrute de los bienes de la sociedad, exigiéndoles en reciprocidad a estos hombres marginados a que contribuyan con la fuerza de su trabajo a construir una nueva sociedad. Así se alcanza una nueva ordenación de la clasificación cuatripartita de la justicia —comutativa, distributiva, legal y social— en relación al bien común, ya que no nos explicamos la posición
de quienes admiten un doble plano: el del bien común —que comprende la clasificación clásica de la justicia— y el de la personalidad —que es el formulado por la justicia social—, puesto que consideramos no sea posible acrecentar los valores humanos de la “personalidad” sin conseguir una perfecta adecuación de ésta al cumplimiento del bien común, para que éste pueda derramarse sobre aquélla y así llegar al perfeccionamiento humano en una sociedad comunitaria.\(^{92}\)

Esta es la vía que consideramos más adecuada para alcanzar el equilibrio social, donde juntamente participarán la justicia social y el orden dentro del seno del Estado, puesto que aquélla no puede existir sin aquél, como medio de lograr una integración del conglomerado de los intereses en pugna y de los fines de la sociedad, tanto en el momento actual como en el horizonte histórico, teniendo en cuenta la representación de las generaciones futuras, en cuanto a sus intereses, por la representación de los intereses de las generaciones presentes, tomando en consideración la perspectiva de una integración de los intereses emergentes de la totalidad del correspondiente ambiente social. Empero, nuestra visión de la sociedad no es estática sino dinámica; esto es, en constante revisión y crítica, para lo cual hemos de estar en constante toma de posición frente a los acontecimientos sociales contemplados desde los diferentes puntos de vista que nos puede ofrecer el crisol de la justicia social. Pues ésta tiende a promover una comunicación participativa a fin de que los individuos alcancen una realidad cultural que sea compartida por

230
todos los miembros de la comunidad; pues si es cierto que cada individuo es distinto e irreductible respecto a los demás individuos, no es menos verdad que cada uno de nosotros singularmente implicamos también a la pluralidad de los miembros que integran el conglomerado social, por cuanto que toda manifestación de vida individual es una manifestación dialógica.\textsuperscript{93}

Evidentemente que este diálogo social es consustancial para la existencia y revitalización de las comunidades de trabajo, constituidas en sistema de propiedad comunitaria, puesto que en las mismas conviven una pluralidad de trabajadores. De este modo la justicia social es la fuente de inspiración permanente para mitigar las desigualdades sociales a base de ofrecer correctivos institucionales que faciliten el bienestar, el diálogo y la armonía que son siempre imprescindibles en una sociedad que vive fundamentada en la justicia.

\textbf{.........}

Fácilmente se desprende de los elementos esenciales que terminamos de enumerar para la configuración de la propiedad comunitaria, que ésta no encaja dentro de un concepto estático de la misma, que se caracteriza por tender a proteger a unos presuntos titulares de derechos abstractos,\textsuperscript{94} sino que nos movemos en una posición dinámica, que hace más hincapié en el goce o disfrute de la cosa que en su titularidad; o sea que la figura del trabajador-propietario se contempla como una voluntad activa generadora de riqueza mediante el trabajo que incide en
el goce directo de los bienes, es decir en la posesión (o en la tenencia, según terminología agraria) de la cosa o de la empresa. Así superamos el concepto estático de la propiedad que se limitaba, en último extremo, al desarraigo de la propiedad del uso de las cosas, reduciéndose a una abstracta titularidad como instrumento de cambio, de renta o de herencia, posibilidades que están descartadas en nuestra concepción comunitaria.

En este sentido, podemos afirmar, aplicando a la propiedad comunitaria la tesis de Hernández Gil sobre la posesión, que en aquélla el centro de la tutela jurídica lo ocupa la posesión, como situación de disfrute de los bienes, frente a la propiedad como titularidad; pues rechazamos la imagen del propietario rentista o meramente lucrativo y exaltamos al propietario trabajador que se acerca a los bienes con una finalidad de uso (la adquisición de vivienda popular propia), que da lugar a la propiedad comunitaria imperfecta; o de producción (la empresa comunitaria). Así conseguimos, conjugando los términos de propiedad y posesión, satisfacer en el trabajador sus ansias de libertad y sus necesidades atendiendo a una concepción existencial de la vida.95

En esta misma línea nos encontramos a Proudhon, quien contrapusiera la posesión cálida, viva y animada por la personalidad del poseedor, frente a la propiedad fría, impersonal y independiente de toda aprehensión material y psicológica. De este modo, la propiedad no es reconocida más que en cuanto es sostenida por una posesión subyacente, y dejaría de ser tal en cuanto no pudiera ser ya aprehendida, cor-
pore et animo, por la comunidad de trabajadores, con lo cual se da una solución justa al problema de las dimensiones de la propiedad. Porque en equidad, el hombre no deberá estar provisto más que de aquello que puede poseer y deberá renunciar a todo aquello que no puede animar, a los bienes cuyas dimensiones mismas los condenan a quedar inertes, a la propiedad muerta.96

Esta adecuación de la propiedad a la posesión nos permite realizar la socialización personalista de la propiedad privada, enrumbándola al cumplimiento de los fines de la comunidad, despojándola de todos sus ingredientes individualistas que son suplantados por la idea de servicio. Estamos conscientes que no conseguiremos eliminar totalmente el ánimo de lucro, que es consustancial a la faceta egoísta del hombre, esto es, una proyección de su ego; sin embargo, por lo menos lo condicionamos en virtud de las tendencias cooperativas que se manifiestan en el ser humano. Precisamente estas tendencias cooperativas que se advierten en el hombre son las que le llevan a organizar el trabajo en común por tener conciencia de que la sociedad es consustancial a su naturaleza. En este sentido se trata de eliminar el motivo de lucro y centrar la cuestión en el principio de utilidad, para saber si ésta es suficiente para que la economía pueda asumir los riesgos que necesita a fin de alcanzar su crecimiento.97
pore et animo, por la comunidad de trabajadores, con lo cual se da una solución justa al problema de las dimensiones de la propiedad. Porque en equidad, el hombre no deberá estar provisto más que de aquello que puede poseer y deberá renunciar a todo aquello que no puede animar, a los bienes cuyas dimensiones mismas los condenan a quedar inertes, a la propiedad muerta.96

Esta adecuación de la propiedad a la posesión nos permite realizar la socialización personalista de la propiedad privada, enrumbándola al cumplimiento de los fines de la comunidad, despojándola de todos sus ingredientes individualistas que son suplantados por la idea de servicio. Estamos conscientes que no conseguiremos eliminar totalmente el ánimo de lucro, que es consustancial a la faceta egoísta del hombre, esto es, una proyección de su ego; sin embargo, por lo menos lo condicionamos en virtud de las tendencias cooperativas que se manifiestan en el ser humano. Precisamente estas tendencias cooperativas que se advierten en el hombre son las que le llevan a organizar el trabajo en común por tener conciencia de que la sociedad es consustancial a su naturaleza. En este sentido se trata de eliminar el motivo de lucro y centrar la cuestión en el principio de utilidad, para saber si ésta es suficiente para que la economía pueda asumir los riesgos que necesita a fin de alcanzar su crecimiento.97
9. EL TRABAJO SOCIAL: LA PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS, EL ACCIONARIADO POPULAR Y LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Es notoria la preocupación por estructurar la nueva sociedad sobre la base del trabajo social, en contraste con el sistema capitalista de base eminentemente empresarial. Fíjemonos en la nueva corriente de neoliberalismo de postguerra, superadora del capitalismo clásico en la que el trabajo del asalariado se encuentra de manera absoluta subordinado al capital y, por lo tanto, desligado de toda posible participación en los beneficios de la empresa, cuando hoy se empieza a abrir paso la corriente doctrinal de que el trabajador no tan sólo tenga una ingerencia en la gestión sino que, inclusive, en la propiedad de la empresa.

Se argumenta a favor de la participación del trabajador en los beneficios de la empresa, que si el capitalista expone su capital a riesgos en el supuesto de que fracase su negocio, también los sufre el trabajador que pierde su empleo y los años dedicados a esa empresa.98 Hay que tener en cuenta que, generalmente, la quiebra de una fábrica, la suspensión de pagos de una inmobiliaria o la congelación de actividades en la construcción son asuntos que se deciden al margen de los trabajadores, a pesar de ser ellos quienes sufren las peores consecuencias; pues la desaparición o cierre de una empresa no repercute casi nunca en el tren de vida de sus propietarios y familiares, mientras que, por el contrario, la pérdida del empleo colo-
ca en grave situación económica a los trabajadores y sus hogares.\textsuperscript{99} Se hace, pues aconsejable, que las decisiones y los riesgos en las empresas deben compartirse entre los propietarios y los trabajadores.

Por esta razón, los capitalistas cediendo a la presión de la clase obrera, por lo general han preferido acceder a la socialización más que en el campo de la participación en las decisiones, en el económico. Así se ha estimado la creación de un accionariado popular, mediante el cual el trabajador adquiere acciones de su empresa o a veces las recibe en concepto de bonificaciones convirtiéndose en un pequeño capitalista de la sociedad anónima en que presta sus servicios; pero, en el fondo, la empresa sigue con la misma estructura capitalista, y el poder de decisión del obrero no alcanza, frecuentemente, una influencia exagerada.\textsuperscript{100} Ya, desde este momento, el trabajador actúa con una mentalidad de patrono y de ánimo de lucro. Por eso se piensa que la participación trabajadora en la propiedad del patrimonio empresarial es una buena fórmula de ahorro y que contribuye a la desproletarización de la clase obrera, pero no se crea que se fomenta con ello la transformación de la empresa. De aquí que el tema del capitalismo popular o accionariado obrero, en cuanto a su influencia en la propiedad de los elementos de producción, es un mero espejismo. Es verdad que se nos ofrecen como ejemplos las sociedades Preussag y Volkswagen en Alemania y de la General Motors y la American Telefon and Telegraph en Estados Unidos, como situaciones revolucionarias en el mundo de la empresa: miles, millones de pequeños ahorristas, incluso
entre los mismos operarios. Empero hay que hacerse la pregunta: ¿Es que alguna de estas pruebas ha modificado la estructura interior de la empresa?.

De otra parte, pareciera que el accionariado obrero no ha despertado demasiado interés entre los trabajadores, quizá debido a que los salarios no les son suficientes para atender a sus necesidades, o también puede influir la falta de una educación que les frene ante el acoso desmedido del consumismo, por lo tanto prefieren adquirir ventajas inmediatas salariales a obtener unas acciones pagaderas en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que los sindicatos no ven con buenos ojos estas medidas, pues con ellas temen que los trabajadores se integren en la empresa. Sea como sea, nos dice François Bloch-Laimé, el Estado ha dado ejemplo haciendo que la Renault, y después los Bancos y compañías de seguros nacionales, lo fueron poniendo en práctica. Sin embargo, también ya lo habían hecho algunas empresas privadas sin mucho éxito; incluso se presentó algún caso en que los trabajadores vendieron las acciones en Bolsa.

Este mismo autor, se pronuncia por la necesidad que tienen todas las naciones industrializadas de mejorar las condiciones de trabajo, tanto materiales como morales. Esto es evidente, especialmente en las generaciones jóvenes, que tienen contacto mediante la televisión y la información general con lo que ocurre en el mundo, y, por lo tanto, con lo que hacen los demás. Porque los jóvenes de hoy no aceptan ser meros robots. “Una de las huelgas del personal de la Renault fue muy reveladora de lo que estamos hablando: se trataba de una huelga de jóvenes, dirigida a protes-
tar no contra unas remuneraciones demasiado bajas, sino contra las condiciones reales de su trabajo”. 103

En cuanto a la aplicación del sistema de participación en los beneficios y el accionariado del trabajo en la propiedad comunitaria, cabe decir que es loable en el supuesto de la propiedad comunitaria imperfecta, puesto que en ella participan el empresario capitalista y la comunidad de trabajadores; por consiguiente, un modo de que estos últimos vayan teniendo acceso a la propiedad de la empresa, será utilizando estos instrumentos de participación. En cambio, por lo que se refiere a la propiedad comunitaria plena, hay que tener en consideración que al surgir en la empresa la figura del trabajador-propietario, quiere decirse que la comunidad de trabajadores es la única propietaria de la empresa, respondiendo así a una estructura distinta a la que impera en la sociedad capitalista y en la marxista. Porque en la capitalista el único propietario es el empresario, mientras que en la empresa marxista todo se encuentra en manos del Estado. En la empresa comunitaria predomina no tan sólo una participación social sino una “minimización del ánimo de lucro” y, en forma actuante, una voluntad de servicio a la comunidad; pues su naturaleza no es puramente económica, sino que tiene que ver con el sistema educativo, social y estatal. Por eso el trabajador tiene una participación creciente en la elección y definición del puesto de trabajo; una expresión más libre de iniciativa económica (personales o de grupo), y una progresiva armonización de su iniciativa particular con la de su empresa. 104
10. LA LEGITIMACION DEMOCRATICA DEL PODER SOCIAL EN LA EMPRESA: AUTORIDAD POLITICA Y AUTORIDAD PROFESIONAL

Hay que precisar muy cuidadosamente los límites de esta legitimación democrática del poder social, para no caer en la creación de un tipo de *propiedad utópica*. Hinkelammert se pronuncia por la necesidad de asegurar una verdadera *autonomía y eficacia* de la función empresarial del *ejecutivo* una vez que ha sido elegido democráticamente por los votos de los trabajadores participantes de la propiedad social; es decir, que el empresario debe tener libertad de acción tanto en lo que se refiere a la *capitalización de la empresa* como a las *decisiones sobre inversiones*, etc.\(^{105}\) Por lo tanto, se considera que la buena marcha de la empresa exige en nuestro tiempo el conocimiento de la dinámica y del cambio de la *tecnología*, por eso su dirección debe recaer en los que tengan capacidad creadora.\(^{106}\)

En consecuencia, debido a los conocimientos que debe poseer el empresario y la libertad de acción para poder actuar con eficiencia, hay quienes consideran improcedente que el *ejecutivo empresarial* se haga por *sufragio universal* de los trabajadores, lo mismo que no debe designarse por los empresarios capitalistas (cuando se trate de la modalidad de propiedad comunitaria imperfecta), ni impuesto por el Estado. Se opina, en este caso, que los dirigentes de la empresa surgen por *selección natural*; o sea, que serán elegidos aquéllos que logren hacerla prosperar, respetando a sus colaboradores en sus respectivas
jerarquías, al mismo tiempo que salvaguardan sus iniciativas y aseguran a todos las condiciones de un trabajo humano. Luego el verdadero empresario es quien es aceptado por todos; esto es, el mejor del equipo, porque siempre se empeña en hacer prevalecer el bien común sobre su propio bien. Por eso, se afirma, que importa poco su modo de designación, dado que en la propiedad comunitaria su propia estructura permite que prevalezcan las cualidades humanas y técnicas de sus integrantes. En una empresa nueva debe seleccionarse su fundador, mientras dura el período de organización ya que es el que gozará de la mayor confianza de todos; pero en una empresa ya en funcionamiento se elegirá entre los colaboradores del consejo de dirección, a base de evitar cualquier tipo de abuso o de formación de “roscas”; o, en última instancia, será designado el empresario entre sus iguales, esto es, sus compañeros de trabajo, lo cual en el supuesto de la propiedad comunitaria no presenta ningún problema ya que todos los comuneros son propietarios y, por consiguiente, se encuentran en un plano de paridad por lo que respecta a la propiedad, si bien exista una jerarquía por la índole de sus conocimientos o formación técnica. Además, que un error en la elección del equipo ejecutivo, perjudicará a todos los trabajadores-propietarios de la empresa.

El problema en la elección del equipo dirigente en la empresa comunitaria, está en que hay que conjugar el máximo de democracia en la implantación de las decisiones, con el máximo de eficiencia en su ejecución. Es obvio que la democracia sólo determina el modo de tomar decisiones, y no la calidad de
las decisiones. Entonces se pone de relieve, que la democracia y la eficiencia no sólo no son idénticas, sino que es evidente que existe la posibilidad de conflicto entre ellas. Es por eso que se hace necesario la separación de la autoridad política de la autoridad profesional. En la primera esfera todos tienen solamente un voto, en la segunda esfera el peso de la opinión depende de la especialidad que es requerida para esos trabajos. La definición acerca de cuánta es la diferencia deseada entre las ganancias personales depende de valorizaciones subjetivas. Por el contrario, la definición acerca de la conveniencia de una máquina para la producción de cierta mercancía depende de conocimientos especializados. La primera le corresponde a una organización política y la segunda a una jerarquía especializada. Sin duda alguna, que en un tipo de sociedad comunitaria, sobre todo las grandes empresas, deben gozar del máximo de descentralización, en cuyo caso las decisiones, en principio, se toman al nivel inferior y en los niveles superiores tan sólo se adoptan aquéllas que puedan ser más complejas.  

Es muy importante observar –cualquier que sea la concreción de la nueva sociedad que ya se vislumbra–, que nos encontramos dando pasos decisi-
vos en la configuración social actual, en la que cada vez se esfuma con más intensidad la figura del capi-
talista, para hallarnos ante nuevas perspectivas de organización. Juan Manuel Fanjul Sedeño, aun inclinándose por la idea de una reforma de la empresa capitalista, mantiene, no obstante, que una eficien-
te línea empresarial de futuro tan sólo ha de conseguirse a través de un sistema comunitario en el que
los partícipes de la empresa se encuentran en una situación de mayor paridad y equilibrio en el reparto de los resultados y, sobre todo, de mayor interés directo en su mejor obtención.\textsuperscript{109}

11. EL SINDICALISMO EN LA PROPIEDAD COMUNITARIA

Es evidente el avance social que se ha conseguido como consecuencia del proceso de industrialización, que nos ha permitido pasar de una sociedad de propietarios a una sociedad de trabajadores, donde la mayoría de los hombres viven ahora del salario, es decir, que sus rentas no encuentran su origen directo en la propiedad sino en el trabajo. Así para el año de 1974 el porcentaje de empleados y obreros respecto de la población ocupada era el siguiente: En los EE.UU. el 88 por 100; en Alemania, el 84 por 100; en Francia, el 81 por 100; en Italia, el 71 por 100; en Holanda, el 84 por 100; en Bélgica, el 83 por 100; en el Reino Unido, el 92 por 100; en Dinamarca, el 82 por 100; y en el Japón, el 69 por 100.\textsuperscript{110}

Este incremento fabuloso del asalariado ha favorecido el fortalecimiento del sindicalismo, que lucha permanentemente por conseguir mejoras a los trabajadores, estableciendo medidas de control sobre las decisiones de los procesos del trabajo. Es por eso que la mayoría de los trabajadores están comprometidos ideológicamente con los sindicatos, puesto que éstos son representantes de la clase colectiva, enfatizándose en el "deber moral" de todos los trabajadores de
pertenecer a ellos. Pues, en palabras de Spinrad, los sindicatos contemplan el trabajo, el lugar del trabajo, los compañeros y la clase trabajadora como formando parte de la vida de los miembros del sindicato. Esto responde a una conciencia tradicional proletaria, que es alimentada por el desarrollo de la colectividad, instrumentalmente orientada hacia mejores salarios y más márgenes de beneficios. A este respecto es menester señalar, que investigaciones recientes realizadas en la Gran Bretaña han demostrado que los trabajadores se sienten comprometidos con los sindicatos más de lo que generalmente se aprecia.

Y es que los miembros de un sindicato lo que buscan en éste es seguridad en el trabajo y control en lo que se refiere a las oportunidades limitadas de empleo que puedan existir. Es por ello que en los períodos de depresión económica, cuando hay “escaz que de oportunidades” en el trabajo, son los obreros sindicalizados los que tradicionalmente suelen protegerse de esa situación, controlando las oportunidades de empleo ejerciendo lo que se ha llamado el “comunismo de oportunidades” entre los miembros del gremio.

Por lo general, los trabajadores tienden crecientemente a llegar a ser “instrumentalmente orientados”, siendo considerada la retribución económica como la única meta de sus proyectos. Sin embargo, hay trabajadores que han sido clasificados como “sindicalistas políticos”, en el sentido de enfatizar, sobre todo, en las medidas de control sobre los procesos de las decisiones a tomar en el trabajo en orden de asegurar una gran equidad y justicia y la protección contra la arbitrariedad y el caprichoso ejercicio de
la autoridad directiva en la empresa. Desde este punto de vista, la mayoría de estas orientaciones hacia las actividades sindicales consisten en buscar las extensiones del poder de los empleados sobre las decisiones a tomar a un nivel de trabajo. Para una "mente conservadora", el principal propósito del sindicato de trabajadores debe consistir en mantener y, si es posible, extender el control de trabajo; pero las decisiones a tomar a un alto nivel son, por el contrario, potencialmente secundarias. Esto no ocurre así con los "sindicatos ideológicos", que siempre están dispuestos a favorecer propósitos más ambiciosos para la "democracia industrial", mientras que los "sindicatos revolucionarios", en contraposición, tienden a percibir cualquier forma limitada de control que valga la pena, a costa de desviar las actividades de los trabajadores de sus metas primarias.  

De todas maneras, cuando una empresa funcione en régimen de propiedad comunitaria, el sindicato perderá una gran parte de su importancia. Hay quienes piensan que conservará las funciones de coordinación nacional y de formación obrera, pero el papel más importante de oposición en el interior de la empresa desaparece. No obstante, como nos dice Heleno Saña, en el caso más probable de un período de transición de la sociedad capitalista a la sociedad comunitaria, habrán de coexistir las diversas formas de propiedad de que hemos hablado más arriba, asumiendo los sindicatos una doble función: de un lado seguirán siendo organizaciones de lucha, y del otro ejercerán actividades gestoras de carácter general.  

A nuestro entender, una vez implantada la pro-
piedad comunitaria, desde el momento que los trabajadores disfrutan del *status* de propietarios, dispondrán de los mecanismos adecuados para hacer valer sus derechos y cumplir con sus deberes tanto respecto a sí mismos, como en cuanto al Estado y la misma comunidad. Por eso la participación de la organización sindical se verá restringida o sufrirá una transformación en este campo, ya que pudiera surgir un *sindicato de propietarios comuneros* encargado de proteger sus derechos y de la formación educativa de sus miembros, como del cumplimiento de las funciones sociales de las empresas. Aparte de que el sindicalismo seguirá ejerciendo sus actividades en lo que afecta a la propiedad artesanal y a la empresa pública.

De todos modos, una cosa es evidente a estas alturas del desarrollo de nuestra sociedad, y es que está dominada por el principio de la *socialización* completamente distinto de la imagen que nos ofrecía la sociedad individualista, que surge como consecuencia de la Revolución francesa. En el momento actual, los instrumentos de producción, al menos los más importantes entre ellos, no pertenecen a los propietarios individuales sino que son objeto de una apropiación colectiva; las pequeñas empresas que sobreviven han perdido una parte de su autonomía; más de las tres cuartas partes de los hombres acceden a los bienes de la tierra, no por la propiedad sino por el salario; su seguridad reposa menos sobre las reservas acumuladas, sino más bien sobre una solidaridad organizada a escala nacional; y un gran número de bienes de consumo, incluso poseídos privadamente, levantan una
red de organizaciones que les confieren un carácter colectivo.\textsuperscript{114}

12. BIENES DE USO COLECTIVO: LA IMPORTANCIA DEL "PODER DE DECISION" SOBRE LA PROPIEDAD. EL EQUIPO EJECUTIVO. EL PEQUEÑO AHORRO

A medida que se ha ido superando el concepto de la propiedad individualista en la sociedad moderna, se va produciendo el fenómeno de que la mayoría de los bienes adquieren el carácter de uso colectivo. Ya el enfermo no se le cuida en casa sino que se le traslada al menor síntoma al hospital o la clínica. Nuestro bienestar depende de una buena red de agua, gas y electricidad. Nuestras necesidades de distracción se obtienen a través de la radio, televisión, etc.; cuando tomamos vacaciones necesitamos un equipo de hoteles, paradores de turismo; inclusive la asistencia a lugares de diversión (espectáculos, cabarets, etc.) ya se hace mediante agencias de viajes; es decir, que hoy día la sociedad está montada en base a la eficiencia de los bienes de uso colectivo que nos proporcionan la satisfacción de nuestras necesidades sin que éstas pudiéramos cubrirlas mediante la simple propiedad individual. Esto ha incidido —como escribe Rogelio Sotela Montagné— sobre el concepto clásico de la propiedad, debido a que el propietario cada vez se encuentra más limitado en su derecho individual por la acción del derecho de los demás, pudién-
dose decir que cada día toman mayor vigor las formas comunitarias de la propiedad.115 Aquí es importante considerar, que el Estado o las entidades públicas o privadas al facilitar estos servicios tiendan a satisfacer el bien común, es decir, aquellas condiciones que hagan posible una vida humana decorosa de sus ciudadanos; o sea, que este bien común no absorba ni anule la actividad de los individuos, sino que se extienda en cuanto sea necesario para facilitar la acción libre y personal del conglomerado social.116

De otra parte, los directores de empresa o los técnicos han sustituido a los propietarios en el poder económico, o sea que no son necesariamente los que poseen (los accionistas) los que mandan. Hoy lo más importante no es la propiedad, sino el poder de decisión, que, por lo general, actúa independientemente de ella. Así ha surgido un desdoblamiento en la empresa capitalista entre la propiedad formal (que es la de los accionistas, a través de la mediación de la persona jurídica) y el poder de decisión y de control que corresponde a los administradores. Estos a veces no tienen ninguna participación o, si la tienen, es insignificante en el capital social de la empresa. En consecuencia la propiedad del accionista se relega a ser una “propiedad pasiva”, que no participa en la gestión y se beneficia de los resultados económicos. Este mismo desdoblamiento entre “propiedad” y “control” se observa en los ordenamientos socialistas, donde el poder se concentra en manos de la clase dirigente, cuyo poder central (el Estado es formalmente el propietario de los organismos productivos, ya que sustancialmente lo es el pueblo) delega en la

246
“administración operativa”, que es la minoría que ejercita la actividad económica.\footnote{117}

Luego, en principio, los accionistas, que son los dueños de la propiedad en la sociedad capitalista, son unos seres económicamente insignificantes frente a los directores, a los “managers”, que tienen el poder. A estos últimos, pues, les corresponde la iniciativa, el prestigio y, en definitiva, los beneficios. La disociación entre propiedad y poder, “ownership” y “control”, era ya clásica en la doctrina americana, donde a partir de 1932 la introdujeron Berle y Means, y desde allí llegó a Francia, sobre todo gracias a Bloch-Laine. Sus virtudes tranquilizantes son manifiestas. Se halaga a los \textit{cuadros técnicos} y se abre a los obreros una puerta a la esperanza (a través de la formación profesional y de la promoción se transformarán en “managers”, con más facilidad que en otro tiempo sus padres en propietarios a través del trabajo y del ahorro).

De todos modos, no debemos ser excesivamente optimistas sobre esta teoría, pues no se puede confundir el verdadero poder, que es el \textit{poder financiero}, con lo que sólo es \textit{administración técnica}, cotidiana de las empresas. El poder financiero, en su mayor parte, sigue siéndolo la propiedad. En los años sesenta, las concentraciones de empresas han puesto al desnudo la fragilidad de los tecnócratas no propietarios, por muy arriba que estuviesen situados. Con gran frecuencia han sido barridos por las coaliciones y los comandos de la propiedad: los bancos de negocios, los llamados inversores institucionales o los grupos rivales, que mediante opciones de compra lograron apoderarse de paquetes de acciones. Es

247
verdad que el accionista solitario se mezcla poco en esta revancha inesperada de la propiedad sobre el poder, pero no se debe subestimar la potencia encerrada en su "ius abutendi", mediante el cual vendiendo sus títulos y no suscribiendo en las ampliaciones de capital (lo cual es perfectamente legítimo), se puede, consciente o inconscientemente, contribuir a hacer pasar sobre los "managers" el viento de la derrota.\textsuperscript{118}

Esto no es óbice para reconocer que la empresa moderna —aun dentro del sistema capitalista—, ha experimentado una transformación importante. Ya el capitán de industria de antaño es una figura legendaria que ha sido sustituida por el staff de técnicos o expertos al servicio de la empresa, como hemos visto más arriba; pues el conocimiento de los mercados, el análisis de la coyuntura y la organización interna de los procesos productivos exigen la colaboración en equipo de todos los factores de la producción, especialmente del trabajo.\textsuperscript{119} Ya el concepto de patrono ha sido rebasado. Anteriormente las relaciones de éste con el obrero presentaban todavía un cariz humano. Hoy los obreros cuando hacen sus peticiones tienen que enfrentarse, por lo general, a un poder aparente que es constituido por el "equipo ejecutivo" y a un poder real anónimo, que son los dueños ocultos del capital.\textsuperscript{120}

A pesar de lo acabado de indicar cabe señalar, que los directores de empresa en nuestros días, no acaparan la concentración de poder de que disfrutaban los antiguos propietarios. Esto sin duda les obliga a tomar las decisiones como resultado del diálogo con los otros poderes de la empresa. Cada vez se hace más necesario contar con administradores de empresa
con más capacidad de “comprensión” de los problemas laborales. Se necesita en estos puestos gente especialmente sensibilizada en las cuestiones del mundo de lo social y con los esquemas mentales abiertos a las exigencias de la sociedad futura; pues hoy los acuerdos de la empresa deben tomarse con los “otros poderes” que existen en ella.

En otro aspecto, hay que tener en cuenta que la separación de las figuras del capitalista y del empresario, ha sido consecuencia de la cada vez mayor dimensión de las empresas, que han de buscar fondos en las fuentes más diversas, entre las que va adquiriendo mucha importancia el pequeño ahorro. A esto se une la complejidad de los problemas actuales; es decir, que todo se confabula en la sociedad moderna para que las decisiones en equipo constituyan la figura del empresario actual. De aquí la importancia que toma la “clase media” en la medida que aumenta su capacidad de ahorro y no se deje deslumbrar por el espejismo de emular a la clase alta privilegiada, ni llevar por una demagogia barata de adulación al proletariado. Es por eso que hay que pelear por la estabilidad de una clase media con un trabajo asegurado y un beneficio apropiado a su rendimiento tendiendo a darle una educación que la conduzca a la creación de unos valores propios que la lleven a entusiasmarse con su modo de vida y así no tenga que estar anhelando lo que otros sectores sociales puedan tener. Es menester señalar, que a la clase media deben ser incorporados aquellos trabajadores cualificados que han alcanzado un tenor de vida que los hace acreedores a un sistema de organización, cón-
son con las características atribuidas a este sector social.

13. EL CONCEPTO EMPLEO: LOS DERECHOS DEL COMUNERO. LA IMPORTANCIA DE LA ACCION COMUNITARIA

Toda nueva configuración de la sociedad contemporánea nos lleva a toparnos con otros conceptos sin apenas relevancia en la sociedad agrícola de otros tiempos. Nos referimos a la importancia del empleo en el momento histórico actual. Se ha dicho que al lado de la propiedad el empleo ha sido siempre tratado como el *pariente pobre*, si bien en materia fiscal se les parangona, desde el momento que a los salarios les grava el mismo régimen impositivo que a las rentas que provienen de la propiedad. Así, Héctor Valenzuela Valderrama nos ha hablado de la “Ley de propiedad del empleo”, 122 pronunciándose porque éste se configure como *propiedad del trabajador*; es decir, que es dueño de su empleo con la misma razón y fuerza jurídica con que es dueño, por ejemplo, del terreno que adquirió mediante sus ahorros. Eso sí, lo mismo que se puede expropiar aquél también podrá perderse el empleo cuando el trabajador incumpla los requisitos exigidos; v. gr., honradez, capacidad y cumplimiento responsable y fiel de las obligaciones.

Pues bien: el problema radica en *caracterizar este bien en el patrimonio del trabajador*; o sea, si éste puede disponer de él con la misma libertad con que lo hace de los otros bienes de su patrimonio. ¿Po-
drá enajenarlo, donarlo, permutarlo, gravarlo, ...? ¿Podrá transmitirlo a su mujer, hijos, parientes, extraños, ...? No hay la menor duda de que debe tratarse de una figura especialísima que se revista de caracteres personalísimos, por cuanto que la razón de su existencia radica, no para que entre en el comercio de los hombres sino para que se cumpla con el principio de justicia social.

Es por eso que configuramos más arriba la empresa como un derecho de la personalidad, donde sus titulares adquieren siempre a título originario, ya que la industria o la cosa abarca a toda la hacienda en su complejidad. En consecuencia, los propietarios-trabajadores no pueden disponer de ella a título particular, porque no se admite el concepto de cuota-parte de que nos habló el Derecho romano. Esto por lo que se refiere a su titularidad personal; pues la titularidad comunitaria —que recae sobre los bienes comunes de la empresa—, les pertenece a ellos “en común” y, por ende, pueden enajenarlos de forma parcial o total; o sea, los comuneros tienen capacidad de disposición para gravar o vender la empresa o parte de su maquinaria, v. gr., por reducción de la producción u otras causas. Esto es muy distinto de la titularidad personal —o el derecho al empleo, utilizando una terminología clásica—, que le pertenece al trabajador-propietario con carácter personalísimo y, por consiguiente, “ex novo”, sin posibilidad de ulterior gravamen o alienación.

Es notorio que la legitimación de esta propiedad comunitaria está fundamentada en el principio de justicia social, ya que la protección de los intereses de los trabajadores-propietarios se debe a la finalidad
social que cumplen, por lo cual se prohíbe que el ejercicio de sus derechos se aparte de la realización del bien de la comunidad. A este respecto, la propiedad se constituye en un centro de poder al que se encuentran directamente vinculados vastos estratos de la población (trabajadores, consumidores, técnicos, empresarios, capitalistas, etc.), cuyas actividades se desarrollan dentro de un ámbito de autonomía que los poderes públicos han de respetar, siempre que se adecúen a los intereses comunitarios. Entonces es que se produce la transformación de la propiedad como un derecho subjetivo en la propiedad como una institución, bajo un aspecto dinámico. Aquí se produce la aglutinación de las voluntades individuales en torno a la idea directriz de realizar un trabajo “en común” en beneficio de la sociedad y del desenvolvimiento de sus propias personalidades. Es indudable que así se asegura y fortalece el empleo del trabajador, mediante el cual adquiere una posición de status de la que se derivan derechos estatutarios, que alcanzan de manera gradual o súbitamente la categoría de los derechos del comunero, según que compartan los trabajadores la propiedad de la empresa con los antiguos propietarios o que lleguen a constituir una comunidad de trabajadores por sí misma. Por eso, como decimos más arriba, esta nueva situación del trabajador en la propiedad comunitaria conlleva que sus derechos revistan una característica especial, en virtud de hallarse legitimados por el principio de justicia social por la función social que cumplen, lo que impide puedan ser considerados como un simple bien patrimonial, que sea cotizado libre-
mente en el comercio en detrimento de los derechos que corresponden directamente a la comunidad de trabajadores.

Indiscutiblemente que el reconocimiento de la “acción comunitaria” en beneficio del pobre y desposeído viene a contribuir a la nivelación de las clases sociales en el país, desde el momento que mediante este sistema podemos alcanzar “soluciones privadas” para los “asuntos públicos”, ya que ponemos a disposición de la sociedad unos recursos humanos que no estaban produciendo rendimiento social. Pues una participación activa del pueblo en los asuntos comunitarios facilita la “desburocratización del Estado” que, generalmente, hasta ahora tiene que hacer frente a esta “penosa carga de funcionarios” que trabajan con desgano y sin grandes estímulos. Estamos conscientes que la “acción comunitaria” en manos del trabajador es ineficaz cuando éste es negligente, porque entonces conduce rápidamente al fracaso y a la desmoralización. Es por eso que el pueblo tiene que “luchar fuerte” para la afirmación de sus derechos, como medio de tender a mitigar las desigualdades sociales en nuestros países; por ejemplo, en la explotación de la tierra, en el montaje de la pequeña industria, en buscar soluciones a la escasez de vivienda. Pues en la medida que el casero insiste en recibir un canon alto, y la pobreza persiste, la posibilidad del vicio permanece, ya que el trabajador así nunca tendrá dinero para satisfacer las exigencias del arrendador. Sin duda que este es el resultado de la concentración de la propiedad en manos de pocos propietarios. Esto impide la extensión de la propiedad. Porque ante salarios bajos, largas horas de trabajo, el
desempleo y falta de oportunidades, es natural que aumenten los problemas de la comunidad, lo cual es lógico que provoque “conflictos sociales”¹²⁵.

Estamos conscientes que en la medida que la “acción comunitaria” abarque a grandes sectores populares, los pueblos irán encontrando soluciones para resolver o aminorar los problemas de la comunidad y el hombre desposeído hallará la vía adecuada para incorporarse civilizadamente al disfrute de los bienes culturales.

14. LA COPROPIEDAD. LAS ORGANIZACIONES DE BARRIO Y LA VIVIENDA POPULAR

Dentro del concepto de la propiedad comunitaria la institución de la copropiedad viene a jugar el papel de punto de partida. Recuérdese que el Código Napoleón le asigna un lugar secundario en atención a su carácter eminentemente individualista. Este Código exalta la propiedad del individuo, prestando poco interés a la propiedad de grupo, que es lo que conlleva la copropiedad, si bien ésta presenta rasgos individualistas muy acusados, propios del pueblo romano, que fue su creador y quien nos legara esta institución jurídica.

Hoy día la copropiedad ha sido remozada en todas partes a través de la legislación sobre “Propiedad horizontal” o “Propiedad de casas por pisos”, que introduce correctivos a la tendencia individualista de la copropiedad, que otorga a los condueños la “actio communi dividundo”, mediante la cual en todo momento pueden solicitar la división de la cosa po-
seída en común y sobre la que ellos tienen, en virtud de la concepción romanista, el derecho a una parte intelectual o cuota, que les pertenece a cada uno de los condueños particularmente. Sin embargo esta nueva legislación suprime el ejercicio de la “actio” por consideración al interés que pone en que los condueños vivan permanentemente en régimen de comunidad de bienes.

De todos modos esta legislación de la propiedad horizontal se caracteriza porque cada condómino es titular y puede disfrutar el piso de la casa de que es dueño, aparte del derecho que tiene sobre las partes comunes del edificio (portal, escaleras, ascensor, tejado, etc.). Es decir, que materializa en el piso la cuota ideal que reconoce la copropiedad romana y que es signo de su carácter individualista, aunque sirvió para consagrarse la propiedad de grupo.

Actualmente nos encontramos, que el régimen de copropiedad con las modalidades señaladas, se extiende sobre todo en el campo de la vivienda debido a la carestía del suelo; pues hace unos años este sistema nuevo de propiedad era inconcebible, ya que cada familia tendría a ocupar su propia casa. Entonces advertimos que el aumento de la población —sobre todo en las grandes urbes— ha obligado a construir grandes edificios en los que las familias adquieran en propiedad sus pisos para alojarse en ellos. 

Toda familia tiene un derecho natural inalienable a la vivienda, porque ésta le es consustancial para poder desarrollar su vida. Ahora bien, este derecho puede ejercitarse viviendo en comunidad, esto es, compartiendo en un mismo edificio sus respectivas viviendas. Claro es que este vivir en comunidad exige a las
familias que conviven el que participen de un "espíritu comunitario", ya que hemos dicho más arriba que se ven obligados a compartir cosas comunes. Es por eso que Rafael Caldera consideró el régimen de propiedad horizontal un supuesto de "propiedad comunitaria", puesto que la presencia de este espíritu es el fermento que hace posible la solución de los problemas planteados en relación con los bienes de posesión común.\textsuperscript{126} Ya hemos indicado en otro lugar, que para nosotros la copropiedad de casas por pisos es un caso de propiedad comunitaria imperfecta, dado que los condueños se limitan a gozar el bien, esto es a vivir en el piso; pero no realizan una función activa trabajadora "generando capital", que es la característica de la propiedad comunitaria en sentido estricto.

Así se advierte, en la sociedad actual, un saludable despertar del espíritu comunitario a pesar de la apatía y de la falta de formación humanista de mucha gente aún en nuestro mundo. Y tenemos que decir que, por añadida, las familias que viven "comunitariamente" en los edificios tienen cada vez más que proyectar su "espíritu comunitario" más allá del hecho de la convivencia en las viviendas, con el objeto de defender su "espacio vital" para que reúna las condiciones apropiadas al desarrollo de una vida humana digna (limpieza de la basura, suministro de servicios públicos, defensa contra el robo, etc.), a cuyo propósito tienen que constituir las "organizaciones de barrio" mediante la fundación de las Juntas de Vecinos.\textsuperscript{127}

A este respecto, debemos mencionar la Asociación de Residentes de la Urbanización "Aruflo", que lle-
va varios años de existencia en la ciudad de Caracas y es la hermana mayor de otras sociedades de este tipo que funcionan en otras urbanizaciones de la capital venezolana. Nos dice Marcelo González, que el motivo que les llevó a fundar esta asociación fue el de defender sus derechos de miembros de una comunidad que debía recibir ciertos servicios y el de preservar en la Urbanización las condiciones de zonificación establecidas en las ordenanzas municipales. Además, han buscado fomentar la amistad entre los residentes y la protección mutua ante la acción delictiva de vagos y maleantes.

Esta organización comenzó a funcionar dirigida por un grupo de cinco directores de igual rango, lo cual no dio resultado porque se diluía la responsabilidad y no se tomaban iniciativas, lo que aconsejó sustituir esta dirección por una junta directiva constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, que se ha renovado cada cuatro meses para no hacer recaer el trabajo sobre las mismas personas. La experiencia es que la asistencia a las reuniones ha sido del 7% promedio y de un 30% el pago de las cuotas, de un número de 356 viviendas, porcentajes que suben considerablemente cuando se tratan problemas del máximo interés para los que se recaban fondos especiales. Esta asociación tiende —igualmente que sus similares— a una acción comunitaria continua.128

Es notorio que la sociedad de nuestro tiempo presenta unas características muy distintas a las épocas históricas precedentes, lo cual exige un nuevo tratamiento del derecho de propiedad. Esto es lo que nos ha llevado a concebir el derecho de propiedad comu-
nitaria en la forma en que le hemos revestido más arriba: no se destruye la personalidad individual, pero, sin embargo, se da relevancia a la comunidad. Se insti-
tuye una sociedad de trabajadores, que, como es natural, subsume el capital en el trabajo desapare-
ciendo la dicotomía que es esencial en la sociedad capitalista. Nuevos valores afloran en nuestra concep-
ción comunitaria, como lo son: la idea de servicio, la solidaridad, el bien común, etc. Aspiramos a un mundo fraternal donde el concepto de propiedad no separe a los hombres, sino que los una.

Esto mismo nos llevó más arriba a calificar esta especie de propiedad comunitaria que puede ser, en principio, el condominio, con la característica de imperfecta, por cuanto que en él aparece disminui-
do el elemento del trabajador-propietario, que aquí se nos muestra —como dijimos— no en una actitud activa de trabajo, sino pasiva de goce de la cosa po-
seída. Pero, de todas formas, cabe incluir la propie-
dad horizontal en esta clasificación, siempre que es-
tén presentes todos los elementos que atribuimos a la propiedad comunitaria y, por lo tanto, se dé un disfrute fraccionado de la cosa a la vez que se utiliza colectivamente los elementos comunes y se produ-
ce la coexistencia de poderes y derechos menores de los que corresponden al propietario único, siempre que la característica de la vivienda responda al prin-
cipio de la justicia social; es decir, que se trate de una vivienda popular, que viene a satisfacer las exi-
gencias de esta clase social y a estimular en ella el “espíritu comunitario”, que se hace imprescindible para alcanzar un sentido de convivencia humana. Porque se incurriría en un sarcasmo querer atribuir esta ca-
tegoría dominical a los *inmuebles lujosos de apartamentos*, que constituyen un reto a la sociedad de trabajadores.

Vemos, pues, como la copropiedad constituye el asiento de la propiedad comunitaria, tanto en su vertiente de la vivienda popular, que es la que hemos examinado aquí con más detenimiento, como también, principalmente, de la pequeña y mediana empresa agrícola e industrial. Porque dentro de la “economía de grupo”, la copropiedad hace hincapié en la *titularidad personal* del trabajador-propietario, sin perder de vista la “cosa puesta en común” en la relación comunitaria.

Habida cuenta de lo anterior, es que el legislador estará obligado a promover y a estimular todas aquellas iniciativas tendientes al desenvolvimiento de la institución de la copropiedad de acuerdo a una orientación comunitaria.

15. **EL PAPEL SUBSIDIARIO DEL ESTADO.**
   ¿SURGIRA UN NUEVO CAPITALISMO?
   LOS BUROCRATAS POLITICOS. EL
   RELIEVE DE LA INICIATIVA PARTICULAR

Nuestra concepción de la propiedad comunitaria es eminentemente *personalista y solidaria*, aspirando a elevar al trabajador a la categoría de sujeto histórico decisivo en los destinos futuros de la humanidad. Esta institución se pone al servicio del hombre para que sea él mismo quien se afane por buscar su propia redención y así no tenga que depender “el hilo de su vida” de que manos ajenas lo manejen a su antojo,
puesto que el ser humano debe ser el propio creador de su felicidad. Es por eso que la comunidad de trabajadores que implica toda propiedad comunitaria, si bien le da relevancia al concepto de “comunidad” es notorio que lo hace sobre la base de llenar su contenido de un “conjunto de personas” que encuentran en el “vivir en común” el más adecuado medio para desenvolver sus propias personalidades.

Este papel capital que asignamos a la “persona humana” en el orden comunitario nos lleva a relevar a un segundo plano la función que debe cumplir el Estado dentro de la “economía humana” que hemos propiciado. Pues el organismo estatal nunca debe absorber las actividades económico-sociales del individuo, salvo en aquellos renglones específicamente estipulados. Proclamamos la necesidad de una vuelta al hombre con sentido comunitario, como único medio de resaltar su personalidad dentro de un marco de equilibrio social, que evite perjudiciales desbordamientos o a favor del factor individual o del factor colectivo. A este respecto nos pronunciamos por la “función subsidiaria del Estado” en relación a la propiedad comunitaria.

Aceptaremos el principio de “subordinidad”, que ha sido incorporado de modo oficial por el Concilio Vaticano II y que arranca de la expresión que Pío XI recogiera en su Encíclica Quadragesimo Anno (1931), cuando afirmó: “Toda actividad social, por su propio dinamismo natural, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlos y absorberlos”.

Esto es, que por decirlo así, el Estado debe pasar a ocupar una posición de retaguardia a fin de permitir que las “empresas comuni-
tarias” pongan todo su trabajo y su imaginación al servicio de la creación de riqueza para su justa distribución entre todos los seres humanos. Porque la autoridad del Estado debe dedicarse a resolver los asuntos de su exclusiva competencia y dejar el campo libre a las “sociedades intermedias” —entre las cuales hemos incluido a la propiedad comunitaria— a fin de que actúen por sí mismas en busca de su mayor realización, siempre que se mantengan fieles a la observancia del “orden jerárquico” que debe presidir toda sociedad auténticamente organizada. Así evitaremos “abusos”, “absorciones” y “subrogaciones”, que tan sólo acarrearán injusticias, bajos rendimientos en la producción y traumas en la mentalidad trabajadora, que afectarán al desarrollo correcto tanto de la personalidad de los trabajadores como de los grupos sociales en los que aquéllos desenvuelven su vida profesional.

Esta posición de subsidiariiedad del Estado está lejos de mantener un desentenderse de los problemas del trabajo y de la propiedad, por cuanto que una cosa es respetar el área de acción que corresponde a las comunidades de trabajadores, dando así primacía a la persona humana dentro de un sistema de bien entendida socialización, y otra muy distinta empeñarse en “estatalizarlos”, para desmedro de la persona y de la sociedad. El Estado debe en todo tiempo tratar de “fomentar, estimular, ordenar, suplir y completar” —como expresó Juan XXIII— la actividad personalista y comunitaria en orden al desarrollo equilibrado de la economía nacional en virtud de su “función de subsidiariedad”. A este propósito establecerá un “control” que respond a los criterios de producción.
y de consumo que sean fijados por los mismos ciudadanos, ya que una economía de orientación comunitaria no aspirará solamente a aumentar la riqueza material de la sociedad, sino que tenderá a mejorar las condiciones de la vida humana para todos los miembros o trabajadores del conglomerado social.  

De esta manera, nos pronunciamos por una "función subsidiaria del Estado en sentido lato", que presente distintas gradaciones que se extiendan desde el simple estímulo a la actividad social hasta una intervención estatal a nivel de planificación, fiscalización y distribución de los ingresos que eviten las desigualdades que se han producido en la sociedad capitalista. Todo ello, claro es, respetando la autonomía de la propiedad comunitaria dentro de la estructura económica de la sociedad. Desde luego que así las empresas disfrutarán de libertad e independencia subordinadas a la comunidad nacional. Entonces el papel del Estado será evitar que a la tiranía de ciertos imperialismos económicos individualistas y a las luchas de esta orientación le reemplace el monopolio de las comunidades y una competencia desleal entre ellas para alcanzar la dominación. Un Estado social fuerte institucionalizado impedirá que se produzcan tales amenazas. Ya que para nosotros el organismo estatal no será el instrumento puesto al servicio de una clase social (capitalista o proletariado), sino la expresión organizada del pueblo desde los organismos de base pasando por las sociedades intermedias, los partidos políticos y las instituciones representativas fundamentales (Administración de Justicia, Iglesia, Ejército) hasta culminar en los poderes Legislativo y Ejecutivo.

De otra parte, en el ámbito de la Economía los
sistemas de “promoción, planificación y control” tratarán de conseguir un adecuado equilibrio entre las diversas unidades de producción a través de un proceso de diálogo entre éstas y los demás organismos estatales a fin de evitar el riesgo de caer en un nuevo capitalismo.132 Porque si se permite que surjan fuertes desniveles de productividad, es muy probable que las empresas de trabajadores contribuyan al surgimiento de nuevos sectores de la aristocracia laboral, pese a todos los controles indirectos que el Estado utilice para impedirlo; pues cada empresa comunitaria buscará por todos los medios maximizar sus ganancias, con lo cual la asignación de los recursos disponibles seguirá haciéndose de acuerdo a un criterio en esencia capitalista.133 Es obvio que, por este procedimiento, evitaríamos la explotación de los trabajadores implicados en la empresa, puesto que ésta buscaría alcanzar las mayores rentabilidades para ellos, de tal modo que se convertirían en nuevos rentistas; pues los perjudicados por este sistema serían los consumidores,134 con lo cual los trabajadores terminarían convirtiéndose en nuevos privilegiados similares a los accionistas. De aquí la necesidad de utilizar mecanismos que permitan la apropiación de los excedentes económicos por toda la sociedad.135

A este propósito, hay que dejar bien patente, que la propiedad comunitaria se caracteriza por presentar siempre un contenido vital, por cuanto está constituida por una “comunidad de trabajadores”, razón por la cual reivindicamos —en el área de la sociedad comunitaria— el concepto de “persona jurídica o social”, a base de una vuelta a la posición romanista, que distinguió entre “universitas bonorum” y “uni-
versitas personarum”, considerando entre la persona jurídica o social a la “universitas personarum” y a los “pia corpora”, por tener vida independiente de sus socios y ser de interés común, al mismo tiempo que se apoya sobre una realidad sociológica subyacente, debido a que la propiedad comunitaria se halla fundamentada en las personas humanas que la integran y nunca en un “conglomerado de intereses”, como sucede con la sociedad anónima que, en sentido estricto, es una “universitas bonorum”. Es por eso que el poder de la empresa en ésta depende del capital aportado, mientras que en la propiedad comunitaria rige el principio de que cada socio tiene un voto. Luego la base humana de nuestra concepción conjugada con la aplicación del principio de subsidiariedad del Estado de la forma flexible que lo presentamos, nos coloca en disposición de evitar el riesgo de caer en un nuevo capitalismo.

De acuerdo a esta posición eludiremos también degenerar en una burocratización de la producción y del mercado, ya que nuestro sistema reduce al mínimo la burocracia, aun cuando reconocemos que ésta supuso un tipo de organización superior a las formas institucionales anteriores, desde el momento que proclamamos “el hombre libre en las comunidades libres”. De este modo, desterraremos también a los burócratas, que tan sólo se preocupan de diseñar las “factorías políticas” sin prestar atención a las exigencias humanas y económicas, sino que tan sólo son fábricas levantadas por razones exclusivamente políticas por lo que no responden a las necesidades técnicas de la industria. Este problema se planteó en el Gobierno de Allende, en Chile, don-
de el Partido Comunista asumió el manejo del sector avícola; el Mapu se apoderó de organismos de comercialización como SACOOP, etc.; o sea que existió un paternalismo en la economía y un desprecio por la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas.¹³⁸

Estamos conscientes, pues, que tenemos que alejarnos en nuestra concepción tanto de la propiedad individualista como del socialismo de Estado. Porque nuestra principal preocupación está nimbada por una filosofía de la persona que ponga de relieve la iniciativa particular, donde los derechos y deberes que recaen sobre los trabajadores integrados en esta especie de propiedad, provienen directamente del "estatuto legal" que la regula y, por consiguiente, suponen una situación jurídica de carácter objetivo que no cumple una finalidad individual, sino que, por el contrario, tiene como cometido una finalidad social a la cual quedan sometidos los trabajadores sin menoscabo de su libertad personal. Por ello debe afirmarse un adecuado régimen jurídico de la propiedad que satisfaga las necesidades primordiales del hombre, independientemente de que sea o no propietario, como medio necesario para que alcance el nivel de persona, a través de lo cual logrará su liberación económica y moral.¹³⁹ No se nos escapa la necesidad que tenemos para ello de transformar la sociedad, cambiar radicalmente la actitud de los miembros que la integran, invertir tangible y concretamente sus fines, metas y valores, ...mediante una conjugación de la tecnología moderna y el principio eterno de la libertad a fin de alcanzar un nuevo destino para el hombre.¹⁴⁰ Este es el único camino para alcanzar una auténti-
ca solidaridad humana en la que los principios económicos aparezcan sometidos de nuevo a la voluntad humana orientada a la consecución del bien común sin que sufra menoscabo la personalidad individual.

16. LA SOLIDARIDAD HUMANA: LA DOCTRINA DEL SOLIDARISMO. LA DESCONCERTANTE POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS CON LA AMÉRICA LATINA

Ya hemos dicho que la “sociedad comunitaria” está fundamentada en las tendencias cooperativas que se dan en el ser humano, lo cual nos lleva a fundamentar nuestro tipo de sociedad en el principio de solidaridad en el sentido de “fraternidad humana”, que es como lo recoge la doctrina del Concilio Vaticano II, siempre en creciente desarrollo y transida totalmente de tensión escatológica; pues la máxima preocupación de esta concepción solidaria es el respeto de todos a la persona humana, por lo que siempre constituye un estímulo decisivo del necesario proceso de personalización. De esta manera se alcanza una perfecta adecuación entre las personas que integran la comunidad, sin que el “vivir en común” sea obstáculo sino que, por el contrario, aliciente y motivo ventajoso para el desenvolvimiento de las personalidades humanas que conviven juntas.

Recórdemos que Heinrich Pesch (1854-1926), imbuido del espíritu de Ketteler, marcha del seminario de Maguncia a la Universidad de Berlín para estudiar Economía política, aportando así al pensamiento

266
social reformista cristiano un andamiaje de filosofía social, ética social y economía social, oponiendo al individualismo y al socialismo el solidarismo, haciendo del principio de solidaridad el centro de la filosofía social cristiana, por cuanto que ya Ketteler en 1862 había expresado, que cuando los hombres viven asociados podemos advertir estas dos direcciones cardinales: una que aspira a mantener la cohesión de los miembros que pertenecen a la "asociación"; y la otra en virtud de la cual los miembros se imponen en su individualidad, en sus diferencias recíprocas, en su multiplicidad. Ambas direcciones son plenamente justas en sí mismas y son resultado inmediato de la naturaleza asociativa, que no puede concebirse sin un acuerdo entre los miembros que la integran, ni sin miembros que hayan de ponerse de acuerdo.

El solidarismo, pues, es un sistema del orden social que, a diferencia del individualismo y del colectivismo, hace justicia a la doble vertiente de la relación de individuo y sociedad. Porque si el individuo se halla ordenado a la comunidad por efecto de su tendencia social esencial, no es menos cierto también, que la comunidad, que no es otra cosa que los individuos en su vinculación comunitaria, se halla ordenada a los individuos, de los cuales está compuesta y en los cuales y para los cuales existe. Así el concepto de la común vinculación ("todos viajamos en el mismo barco") constituye el fundamento de la responsabilidad común ("uno para todos, todos para uno"), puesto que cada uno ha de responder por el todo del cual forma parte, y el todo ha de res-
ponder por cada uno de sus miembros. De esta responsabilidad común (obligatio in solidum) deriva el nombre de solidarismo, que no es en primer término una ética, sino una teoría del ser social, de las esencias y de las ideas que son determinantes en la estructura de la sociedad.\textsuperscript{142}

Esta doctrina del solidarismo puede aplicarse a la teoría de la propiedad comunitaria, por cuanto los comuneros comparten una responsabilidad común en el goce y en la explotación de la cosa o de la empresa y, por lo tanto, se encuentran vinculados en torno al “principio de relación”, característico de la vida comunitaria, mientras que rechazan el “principio de exclusión”, que es sobre el cual gira el sistema capitalista.

Es de notarse que el principio de solidaridad cada vez se acentúa más en el plano mundial, tendiéndose a una cooperación más estrecha entre los pueblos ricos y los países en vías de desarrollo,\textsuperscript{143} habiendo sido Rafael Caldera, entre nosotros, quien ha hecho más énfasis en el compromiso que tienen los Estados poderosos con los pueblos más débiles, más pobres o más atrasados.\textsuperscript{144} Estamos, pues, ante la exigencia de aplicar la justicia social internacional, para lo cual —como escribe J. M. Gatheron— es menester que el “mundo libre” se libere de la esclavitud del dinero y aborde los problemas de los países en vías de desarrollo de manera distinta a como lo ha venido haciendo hasta ahora, que se ha caracterizado por la voracidad capitalista, y se decida a dar ejemplo\textsuperscript{145} de solidaridad humana.

Sería muy importante que los Estados Unidos prestasen mayor atención a esta política de solidaridad,
ya que hasta ahora se han caracterizado por seguir una orientación desconcertante y despiadada hacia nuestros pueblos, sin duda debido a que en vez de observar el ideal democrático se han dejado guiar por un pragmatismo exclusivamente pendiente de la protección de sus intereses y, lo que es peor aún, de los de ciertas compañías norteamericanas que operan en nuestro hemisferio. Así lo expresó claramente el candidato presidencial por el Partido Demócrata, senador George McGovern, cuando en su programa electoral prometió un cambio de política respecto a la América Latina, sobre la base de poner término a la actitud de permitir que nuestra política exterior esté dominada por las grandes corporaciones y sus inversiones en ultramar. Lo que es bueno —dijo— para la International Telephone and Telegraph (ITT) o para la United Fruit Company no es necesariamente bueno para este país o para el pueblo de la América Latina.\textsuperscript{146}

Tengan en cuenta unos y otros —los europeos y los estadounidenses— que —como expresó Ted Kennedy en el funeral de su hermano Roberto en la iglesia de San Patricio— el mundo en que vivimos es revolucionario y sobre sus naciones pesa una mayor carga de responsabilidad que ninguna otra generación ha vivido jamás en la historia. De aquí que seamos conscientes de que nos urge una nueva cosmovisión del hombre y de la sociedad para despertar nuevos entusiasmos y esperanzas de redención entre las gentes.
17. LA SOCIEDAD COMUNITARIA: CARACTERISTICAS DEL PLURALISMO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDAS. DEFINICION DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA: TITULARIDAD PERSONAL Y TITULARIDAD COMUNITARIA

Hay quienes quieren ver en la propiedad comunitaria una simple modalidad de la empresa o propiedad capitalista con ciertos retoques socializantes, y otros, por el contrario, una auténtica consagración de la propiedad marxista. Es obvio que unos y otros olvidan que la propiedad comunitaria —como ha expresado Radomiro Tomic— sólo puede ser plenamente eficiente en una sociedad comunitaria. Pues resulta difícil insertar la empresa de trabajadores en una sociedad de tipo capitalista. Hace falta un desarrollo sistemático para que exista el comunitarismo. No es un conjunto de parches o mejoramientos de la estructura capitalista. Responde a otra visión de la sociedad, del hombre y de la relación entre éste y el Estado. Para nosotros la economía comunitaria va insertada en una sociedad del mismo tipo. Y este régimen comunitario se extiende no tan sólo al campo económico sino que también corresponde a las municipalidades, a la educación, al Estado, lo cual es expresión de la totalidad del pueblo institucionalmente organizado y protagonista de su destino.147 Por eso el régimen de la propiedad comunitaria no puede quedar a merced de que lo solicite o no un grupo de trabajadores, como se ha sostenido, entre otros, por Cristián Fernández Cox,148 sino que debe responder a una organización global de la sociedad, porque
de lo contrario se trataría de incrustar este tipo de organización económico-social dentro de un sistema liberal-capitalista o marxista, lo cual, a la postre, no tendría mayor relevancia, cuando lo que tratamos aquí es de *estructurar una sociedad comunitaria*. Luego habrá que establecer previamente las *áreas de la propiedad*, para avanzar progresivamente hacia el gradual establecimiento del régimen de propiedad comunitaria, valiéndose también del tipo de propiedad comunitaria imperfecta.

Hay que tener en cuenta que estas formas de propiedad responden a una *conjugación de la socialización con la justicia social* y *con la libertad del ser humano*. Empero no es suficiente —repetimos— que se den exclusivamente en uno de los planos de la vida social, particularmente en el orden económico, que hoy día ha tomado tanta relevancia. Es menester, por el contrario, que esta participación del hombre libre tenga lugar a todos los niveles mediante una *descentralización de las decisiones* para que el ciudadano pueda efectivamente intervenir. Así alcanzaremos una sociedad donde el hombre no sea olvidado o menospreciado por la "máquina burocrática" de un universo masificado, sino que la reestructuración del Estado responda a un *modelo comunitario*, que exige la *participación integral de la persona humana* en todas las actividades de la vida social (familia, educación, cultura, profesión, política, economía, etc.). De tal modo que podemos hablar —según Roberto Papini— de una economía comunitaria, de un derecho comunitario, de una educación comunitaria...; donde el principio de la participación
sea el fundamento de esta nueva organización social.\textsuperscript{150}

En tal sentido, el concepto comunitario de la vida supera, en su aspecto positivo, los sistemas liberal-capitalista y marxista-totalitario, razón por la cual la propiedad comunitaria, que responde a la esencia de este nuevo tipo de sociedad, y que constituye su célula fundamental en el orden económico-social, tiene que ser genuino exponente de la conjugación de los principios de personalidad y comunidad, dentro de una organización racional del trabajo, en el afán del trabajador de liberarse a la vez de la vieja alienación del capitalismo manchesteriano y de la alienación nueva al estilo del Estado totalitario.\textsuperscript{151}

Estas alienaciones se producen en los sistemas capitalista y marxista en tanto y en cuanto que el poder se concentra en una sola mano (sea la empresa privada o el Estado), mientras que en la sociedad comunitaria existe un equilibrio de poderes que, a través de un procedimiento de integración, culmina en la comunidad estatal, permitiéndose así que el individuo haga valer su propia personalidad mediante su participación en los grupos sociales. Esta posición responde, en principio, a una extensa genealogía que tiene sus más conspicuos representantes en Locke, Montesquieu y Tocqueville. En vez de un solo centro de poder existen una pluralidad de centros de poder, ninguno de los cuales es o puede ser completamente soberano. Así se comparte el poder entre pocos o muchos. Se provee a una extensión de la política de participación popular creando una multiplicidad de centros de poder accesibles, que no es compatible con una dirección de poder centralizado que abs.
be todas las competencias del Estado y que, por ende, no puede dar acceso a las energías de la comunidad popular a través de la participación activa de los ciudadanos. También esta posición pluralista es contemplada como una forma política por la cual todo grupo de intereses existentes en la sociedad puede ser mejor representado y, a su vez, reconciliado en los supuestos de conflicto de intereses.

En los últimos años esta tendencia pluralista ha tomado nuevo vigor, particularmente en los Estados Unidos, como la mejor defensa de política práctica en las democracias occidentales. ¿Por qué? Debido a que en los espíritus europeos quedaron tan grabados los horrores cometidos por los regímenes totalitarios nazistas y fascistas de Hitler y Mussolini, a los cuales tan sólo hubo posibilidad de arrasarlos del poder mediante la segunda guerra mundial, que dichos pueblos siguen teniendo presente en su conciencia esta tragedia para rechazar abiertamente todo lo que pueda volver a suponer una dominación omnímoda del Estado. Es por eso que cada vez se profundiza más en la búsqueda de los fundamentos de una democracia pluralista, que se presente como un equilibrio de poderes y contrapoderes dentro de una organización estatal humana, vigorosa y flexible.

¿Cuáles serán las características sobresalientes de esta posición pluralista? Jack Lively las ha resumido así:

1) La sociedad es, y debe ser necesariamente, un campo de acción de diversos y conflictivos intereses. Ahora, por añadidura, a este permanente aserto se
ha adicionado una histórica dimensión de nuestro tiempo: En los momentos actuales la creciente división del trabajo en la sociedad industrial hace más precisa y específica la articulación de los grupos de intereses y da mayor amplitud a su capacidad organizativa y educativa. El marxismo, por el contrario, pronostica una progresiva consolidación y bifurcación de las líneas del conflicto social, cuya lucha de clases favorece —según él— la división fragmentaria del pluralismo y la diversificación de intereses de la moderna sociedad.

2) Cualquier grupo de intereses, siempre en sus peticiones, tiene algo que merece ser escuchado y tomado en cuenta en la formulación de la política pública.

3) Cada uno de los individuos afiliados a los grupos de intereses son también tomados en cuenta por lo que se refiere a los intereses comunes a todos los miembros de la sociedad.

4) Si bien la intervención del Estado no es siempre necesaria en la solución de los conflictos entre los grupos sociales, ella aumenta cada día más porque el sistema económico social se hace más complejo e interdependiente, hallándose el Estado más necesitado de los recursos humanos y materiales, participando ahora en áreas que anteriormente estaban reservadas a la iniciativa privada. De esta manera, cuestiones semejantes a la discusión de los contratos colectivos o a la fijación de precios de los artí-
culos de la industria, previamente son convenidos por los sindicatos y empresarios, por los fabricantes y clientes, dentro del ámbito de una decisión política.

5) Dicha intervención estatal estará dirigida a buscar la reconciliación de los grupos en conflicto, para alcanzar convenios mutuamente satisfactorios o la formulación de políticas económicas que logren el equilibrio entre los grupos reclamantes.

6) El Gobierno atenderá más gustosamente su tarea tratando de reconciliar las demandas de los grupos que tengan algún efectivo significado de urgencia para el Estado; en otras palabras, dentro de un contexto pluralista de división del poder actuando así se cumplirá mejor el deber estatal, por cuanto que su realización se transforma en una necesidad funcional.

Es indudable que de esta forma la teoría pluralista conlleva la defensa de las democracias occidentales, reclamando para ellas una mayor sensibilidad en el juego electoral de sus minorías políticas, la extensión del campo de aplicación de los intereses por los grupos organizados y el considerable acceso a la toma de decisiones que esos grupos tienen, todo ello a través de la suficiente difusión del poder, asegurando más o menos adecuadamente la representación de los intereses.

Esta parece ser la principal orientación del reciente pensamiento pluralista: la necesaria diversidad de intereses, el derecho de los grupos a su propia pro-
tección, la vinculación de los hombres antes que al grupo a los intereses generales, la necesidad de que el Estado intervenga como conciliador o adaptándose en el cumplimiento de su papel mediador y la necesidad de que su poder sea difundido entre los grupos sociales. A todo esto, se considera que la participación del Estado en la solución de los conflictos que puedan surgir entre los grupos sociales, debe hacerse con imparcialidad y sin identificarse con ningún grupo en particular de la comunidad. Si es cierto que también los grupos son independientes del poder estatal, no lo es menos que el Estado no debe transigir ante el poder de los grupos de presión, a cuyo objeto hay que investirle del suficiente poder a fin de que sea capaz de hacer prevalecer el interés general exigido a pesar de la resistencia que pueda encontrar en los grupos sociales. Esto sin necesidad de tener que atribuir al Estado una clara hegemonía entre el complejo de intereses en pugna, sino que aquél debe valerse para ello acudiendo a la política de consenso, teniendo en cuenta que el organismo estatal debe procurar interpretar en todo momento los auténticos valores de la sociedad. A este respecto se le quiere presentar al Estado como políticamente neutral, arbitrando entre grupos sencillamente representativos de la comunidad de valores compartida. Entonces la estructura del Estado es simplemente un mecanismo para facilitar el acuerdo entre los grupos y los políticos son simplemente agentes en este proceso. La neutralidad de la política establecida y consecuentemente la general aceptabilidad de la intervención estatal para resolver los conflictos, se acata naturalmente por los grupos contendientes; pues en el caso
de que no se reconociera su papel mediador, el Estado tendría que dar marcha atrás en su política de consenso para conservar la coherencia de su teoría del poder.\textsuperscript{152}

Es incuestionable que siempre que nos enfrentemos al problema del pluralismo democrático estaríamos encarados frente al dilema del doble juego de la autoridad y de la responsabilidad compartidas. Porque a lo largo de la línea de nuestro pensamiento hemos sostenido que es necesario un Estado social fuerte institucionalizado, que comparta su autoridad y su responsabilidad con sus órganos, los partidos políticos y las sociedades intermedias.\textsuperscript{153} Ahora bien: si algunas de las instituciones señaladas no está a la altura para cumplir su responsable misión el Estado se verá obligado a tomar la decisión, con el consentimiento de los demás grupos, de detraerles la cuota de autoridad que les corresponda a la responsabilidad que voluntariamente dejan de asumir. Por lo tanto, se establece una unidad indisoluble entre autoridad y responsabilidad: A más responsabilidad de los grupos en el cumplimiento de sus funciones se producirá una mayor comunicación de autoridad hacia ellos y viceversa. Luego se establecen unos vasos comunicantes entre el poder del Estado y los grupos sociales que la integran como único medio de mantener el equilibrio de poderes necesario para que la comunidad nacional progrese sin sobresaltos y sin procesos de involución.

Estamos completamente convencidos de que a medida que la democracia política se consolide y avance se producirá el correlativo fenómeno con la democracia económica, máxime si se tiene en cuenta
que el empresario del futuro deberá ser más *humanista* que un técnico, porque las soluciones que se le demanden tendrán cada vez menos cariz económico y más *contenido social*, debiendo resolver sus problemas más con *sentido de equipo y no como hombres en solitario*.\(^{154}\) Así se ha escrito que la *empresa moderna*, ya no se basará en la oposición entre un dueño despótico de los medios de producción y una masa de obreros explotados —aunque esas formas subsistan en todos los países y, en mayor grado, en los más atrasados—, sino en la constitución de equipos de gerencia y administración, integrados con equipos de técnicos y servidos por máquinas poderosas y por sistemas científicos de organización del trabajo. Así la empresa dejará de ser regida por los intereses de un patrono pasando a ser orientada por procesos inteligentes y racionales apoyados en el enorme poder de elaboración informativa de las modernas computadoras. Probablemente el *modelo general* de empresa para la sociedad futura será el de la *empresa integrada y autoadministrada*, cuya actividad se enmarque en planes nacionales de carácter indicativo y se equilibre mediante la función regulatoria de los Estados y los organismos mundiales.\(^{155}\)

A estos lineamientos responde nuestra concepción de la *propiedad comunitaria*, dentro del contexto de una *sociedad comunitaria democrática y pluralista*, si bien profundamente preocupados por la fundamentación de una *economía humana*, que siempre evite que el hombre sea dominado por la máquina, a cuyo fin aquél debe ser caracterizado como un *trabajador-propietario*, que reúne en unas mismas manos el trabajo y el capital, pasando a ser éste auxiliar
de aquél. Pues se trata de una empresa que está al servicio de una finalidad social, cuya legitimación es su trabajo orientado a la realización del bien común. Así engarzamos la libertad política con la libertad económica, pues aquélla por sí misma, aisladamente, resulta ser siempre ilusoria. Ya que los hombres que trabajan mientras no se sientan miembros de una comunidad autónoma de trabajadores, serán esencialmente serviles —como ha escrito Erich Fromm—, sea cualquiera el régimen político en que vivan. No basta con eliminar la degradante relación en que están los esclavos asalariados con un patrono individual. También el socialismo de Estado mantiene al trabajador sometido a una tiranía no menos irritante por ser impersonal. De esta manera el autogobierno de la industria no es meramente un suplemento de la libertad política, sino que es su precursor.\textsuperscript{156} Es por eso que nosotros propugnamos el papel “subsidiario” del Estado con las atribuciones que le hemos señalado más arriba, para que su intervención sea a través de un sistema de controles que tienda a procurar la justa distribución de los ingresos de la producción.

De este modo afirmamos, que desde su faceta sociológica, la propiedad comunitaria “es una comunidad de trabajadores en el régimen de propiedad colectiva, donde cada miembro trabajador o comunero usa, disfruta o dispone de los bienes en nombre de la totalidad sin menoscabo de sus derechos personales, encauzando sus actividades al logro del bien común, para que se realice plenamente la justicia social”. Ahora, configurada jurídicamente, podemos definirla, como “el derecho de usar, disfrutar y disponer de los be-
neficios de la cosa o de la empresa, en virtud de la *titularidad personal*; o de parte o de la totalidad de ella, en nombre o en concurrencia con los demás trabajadores o comuneros, por legitimación de la *titularidad comunitaria*; pero siempre subordinada la enajenación de una parte o de la totalidad de la cosa o de la empresa a los intereses de la comunidad nacional, de acuerdo a los requisitos exigidos por el Estado".

Se advierte, pues, que el *sujeto* de la propiedad comunitaria es la *comunidad de trabajadores*, que dispone del dominio sobre la cosa, la hacienda o la empresa, a través de una doble titularidad: *la personal y la comunitaria*. En virtud de la primera obtiene los beneficios que le reporta su trabajo y que puede emplear en la constitución de un ahorro o en la adquisición de los *bienes* que le autoricen las leyes; y mediante la titularidad comunitaria tiene un derecho sobre la cosa, la hacienda o la empresa —como *proyección de su personalidad*—, que tan sólo podrá ejercer colectivamente con los demás comuneros —o en *mano común* como decían los germanos—, siempre dejando a salvo las exigencias nacionales, cuyo máximo gerente es la institución estatal. Pues al integrarse el trabajador en la *comunidad de propiedad*, el sentido de la existencia humana —como nos dice Ernesto Mayz Vallenilla— adquiere una proyección diferente: se vive, entonces, no simplemente para satisfacer egoístamente las necesidades y deseos individuales, sino para compartir con otros, bajo la luz del *altruismo y del amor*, los bienes que se alcanzan como frutos del trabajo y del común esfuerzo.157

De esta manera la propiedad comunitaria adquiere
una fisonomía propia y radiante a través de su titularidad comunitaria, que le imprime una sustantividad propia frente a las demás instituciones sociales, puesto que constituye una *irradiación de la personalidad humana*, que conlleva que la cosa, la hacienda o la empresa puedan *gravarse o venderse* por la exclusiva decisión de sus dueños cumpliendo las exigencias a que nos referimos más arriba.
NOTAS


14. René Rodríguez Heredia, op. cit., p. 64.


284


34. José M. Bover, Teología de San Pablo, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1952, p. 742.


41. Jean Carbonnier, op. cit., p. 234.


43. Braulio Alfageme, op. cit., p. 100.
44. F. Casares y J. Urenda, "En conversación sobre el salario y la política salarial", Revista El Ciervo, Barcelona, 1976, Nº 276.
48. Anna de Vita, op. cit., p. 38.
49. Salvatore Pugliatti, op. cit., p. 108.
51. Anna de Vita, op. cit., pp. 36-37.

286
68. Heleno Saña, op. cit., p. 196.
73. A. Durand, op. cit., pp. 22 y ss.
76. *Hacia un mundo comunitario*, Santiago de Chile, 1951, pp. 64-66; y la nueva edición, *El desarrollo de la Nueva*


90. Cfr. nuestro estudio, “La justicia social”, Sobretiro de


120. Emmanuel Mounier, op. cit., p. 540.


290
129. José Luis Gutiérrez García, Conceptos fundamentales en la doctrina social de la Iglesia, Madrid, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, 1971, Tomo IV, pp. 301 y ss.
130. Roberto Papini, "Pour un nouveau modèle social", La participation des citoyens au pouvoir économique dans l'entreprise, Roma, 1972, N° 14, p. 15.
135. Luis Pásara, "Propiedad social: la utopía y el proyec-
137. Milovan Djilas, La sociedad imperfecta, Barcelona, Ed. Ariel, 1970, p. 188.
143. José Luis Gutiérrez García, op. cit., p. 287.
144. Especificidad de la Democracia Cristiana, Caracas, 1972, p. 85.
146. Revista Visión, 1° de julio de 1972.
147. Revista Summa, Caracas 20 de Julio de 1972, N° 54, Año III.
149. Milovan Djilas, La sociedad imperfecta, p. 201.
151. Thom Kerstiens, “La democratie economique en Europe occidentale”, La participation des citoyens au pou-

292


156. Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, ed. 3a., p. 234.

III. MODELOS HISTORICOS Y VIGENTES
ES MANIFIESTO que la estructuración del sistema comunitario presenta una red complicadísima de cuestiones que sólo podemos enunciar en sus lineamientos generales y en algunos de sus aspectos, pero estamos seguros —al igual que ha sucedido con la implantación de otras corrientes ideológicas en el mundo— será la misma vida social, en su devenir histórico, la que se encargará de configurar adecuadamente los principios a las exigencias imperiosas de la realidad y de la práctica. Por eso manteniéndonos en el plano de los esquemas generales y en el esclarecimiento de los valores preponderantes en el nuevo tipo de sociedad, acaso sería contraproducente llegar a intentar establecer posiciones rígidas ante alternativas u opciones que serán las circunstancias del momento las que decidirán. Aquí lo importante, como nota común a todo colectivismo personalizado, es que el trabajador no quede desamparado o absorbido por la comunidad o que la empresa comunitaria quede debilitada, justificándose su existencia en beneficio de la institución familiar o de la vida familiar o de la vida nacional.
1. INSTITUCIONES FAMILIARES INDIVISIBLES: LA "ZADRUGA", EL "MASO CHIUSO" Y LA "CASA"

Entre los eslavos del sur antaño y hogaño entre los servios, existió la institución de la zadruğa, una forma curiosa de comunidad familiar. La palabra que designa esta institución está formada del prefijo za (para) y del sustantivo drug (compañero). La idea de mutua ayuda, de mutualidad, aparece claramente. La zadruğa existe allí donde hay comunidad de vida y de bienes, fundada y apoyada sobre el parentesco natural o adoptivo. La ley croata del 1° de diciembre de 1870, en su artículo 1°, define la zadruğa, como "una unión familiar, compuesta de varias familias o miembros habitando la misma casa, bajo la dirección de un jefe, formando el mismo menaje, cultivando los mismos bienes indivisos, disfrutando de las mismas rentas". Pero mejor definición es todavía la que da Emile de Laveleye:

"Grupo de descendientes de unos mismos antepasados, habitando una misma casa o un mismo mercado, trabajando en común o disfrutando en común los productos del trabajo agrícola, sobre una tierra poseída en común".

Después de fines del siglo XIX y, sobre todo, a principios del XX, bajo la influencia de una legislación nueva favorable a las particiones, la zadruğa ha desaparecido en Croacia y ha perdido mucha de su vitalidad en Bosnia; pero se la encuentra todavía en Servia.¹

Esta unión de todos los parientes viviendo bajo
el mismo techo, en un régimen de comunidad abso-
luta de bienes y de trabajo, constituye la zadru
ga, a la cual se ha dado también el nombre de kutcha (casa, señor), institución esencialmente democráti-
ca, porque el poder de decisión no pertenece a un
pater familias tiránico, sino a la asamblea de los hom-
bres de más de quince años, donde el starechina no
es más que el agente de ejecución. Para proteger a
los terceros, el Código civil servio de 1844, artícu-
lo 510, ha instituido una presunción según la cual
los contratos celebrados por el starechina se presu-
men realizados con el acuerdo de la colectividad si
ninguno de los miembros reclama antes del plazo
de un año. También el starechina posee sobre los hi-
jos de la zadruaga un poder disciplinario y el derecho
de corrección, siendo de él, y no de su padre, de quien
las jóvenes reciben las órdenes de trabajo.
La costumbre no permite a los extranjeros entrar
en la zadruaga más que en los casos siguientes:

a) Por adopción; pero para que tenga efecto res-
pecto a los miembros de la zadruaga es menester el
consentimiento de todos ellos (artículo 526 Cód-
go civil), mediante el cual deviene copropietario y
cohedero de los otros miembros de la asociación.

b) En caso de matrimonio con una hija de la za-
druaga.

En esta comunidad existen el mínimo de asalaria-
dos, pues entre sus miembros se reparten el traba-
jo. No se toleran en ella ni perezosos ni gente indisc-
iplinada. En la comunidad se exige que cada uno
de sus miembros emplee toda sus fuerzas en la pros-
peridad de la asociación y que trabaje según sus fa-
cultades y las decisiones tomadas por la zadru-
gua de las cuales el “starechina” es el contralor. Para los
miembros mayores, la sanción consiste en la exclu-
sión votada por la asamblea (artículo 514 Código
civil); no obstante el excluido tiene derecho a su cuo-
ta parte en dinero o en natura. Todos los bienes de
la zadru
ga forman patrimonio indiviso cuyo pro-
prietario es la comunidad, persona civil, pero cada
uno de los miembros posee una cuota parte de esa
indivisión la cual es de libre disposición después del
Código civil de 1844, ya que antes de este Cuerpo
legal la unidad del patrimonio de la zadru
ga estaba
mejor garantizado porque la libre disposición de las
partes se prohibía mientras durase la asociación. Por
eso, se ha dicho, que esta nueva modalidad ha con-
tribuido a la desaparición de numerosas zadrugas.
Con todo en el régimen de sucesiones, encontra-
mos vestigios del carácter de perpetuidad que po-
seía anteriormente la indivisión en la zadru
ga. Así
el Código civil dispone:

1) Los miembros de la zadru
ga se suceden los u-
nos a los otros excluyendo los parientes que no vi-
van en la comunidad; la adopción hecha en la zadru-
gua con el consentimiento de todos excluye a los pa-
rientes consanguíneos que vivan fuera de ella (artí-
culo 528 Código civil).

2) Las mujeres no pueden jamás heredar los bie-
nes de la zadru
ga, a excepción de las hijas en la su-
cesión de su padre, en caso de ausencia de herma-

300
nos; en todo caso, ellas no reciben los bienes inmuebles, sino solamente su valor.

3) En tanto que un solo miembro de la zadruga permanece vivo la apertura de la sucesión no tendrá lugar. Esto es lo que expresa el artículo 516 del Código civil. La muerte de alguno en la zadruga no cambia nada en el estado y en las relaciones de la comunidad.2

En Italia nos encontramos la institución del maso chiuso ("Grupo familiar"), que es común en todo el Tirol y consiste en una hacienda local dotada de una casa habitación, con una extensión suficiente para el mantenimiento de una familia de por lo menos cinco personas, transmitiéndose, en el caso de sucesión mortis causa, a un solo heredero, con el objeto de evitar un fraccionamiento antieconómico. Este instituto se regulaba ab antiquo por normas consuetudinarias, que después vienen a recogerse por la Ley Prov. del 12 de junio de 1900, que mantiene inmutable los principios tradicionales, pero regulando de una manera orgánica la materia. De esta manera, en el aspecto político, se propicia la constitución de una clase de campesinos-propietarios acomodados, tradicionalistas y conservadores, vasallos a la ley del Estado, encarriñados a su tierra y a su cultivo, salvaguardándose así una estirpe rural socialmente tranquila y colocada en condiciones económicas y culturales elevadas.

Esta Ley de 1900 permaneció en vigor hasta el 31 de Julio de 1929, cuando se hizo extensiva a las nuevas provincias la legislación civil italiana (R.D.
del 4 de Noviembre de 1928, N° 2325); sin embargo, este instituto ha seguido funcionando de hecho, cumpliendo sus funciones económicas y sociales.

Se establecía el vínculo de indivisibilidad absoluta de la hacienda familiar organizada en empresa agrícola, porque la antigua tradición consideraba que su bonificación y mejoramiento era obra del grupo familiar y no particularmente de sus miembros, y, por este motivo, la hacienda se revestía del carácter de bien familiar que debía transmitirse así de generación en generación: l'Anerbe, esto es, el heredero por excelencia, era solamente el representante de la familia. Pero ahora, con el gradual paso a las modernas formas de propiedad, este carácter familiar del bien, en base al cual, por ejemplo, los coherederos excluidos de la sucesión a la hacienda, podían volver a la empresa agrícola y pasar en ella los últimos años de su vida, ha desaparecido, y el empresario se ha convertido en titular de un derecho exclusivo propio, que dispone libremente de la empresa, sin ninguna limitación ni siquiera respecto a los propios familiares, permaneciendo solamente sujeto a la eventual división supletiva, si él procedía a la venta de la empresa agrícola dentro de los dieciocho años en que asumió el carácter de empresario.

La adquisición de la propiedad de la empresa agrícola por parte de un heredero preferido, como instrumento fundamental para evitar el fraccionamiento de la tierra, exige a éste que resida en la casa habitación de la empresa y que se dedique a su cultivo (Ley de 1959), teniendo que concurrir en él idoneidad para dirigirla personalmente, ya que la
orientación legislativa está a favor de la propiedad directa del cultivador.

Si el heredero llamado a asumir la empresa agrícola era ya propietario de otra en el momento de apertura de la sucesión hereditaria, su derecho de preferencia pasa a los otros coherederos; sin embargo, él conserva un derecho de elección, pudiendo ceder la empresa de que era dueño al coheredero que le sigue en el orden de preferencia. Este principio se remonta a una larga tradición que veía en la empresa agrícola la residencia de la familia campesina y la sede de su hacienda suficiente para su bienestar y mantenimiento; pues la propiedad de una segunda hacienda es extraña a este concepto, y, de otra parte, no se admite que la misma persona tenga dos veces la ventaja de una asignación en condiciones particularmente favorables.

Hay que tener también en cuenta, que de cualquier modo que sea designado el propietario de la empresa agrícola siempre sucede directamente al propietario anterior fallecido; en otras palabras, la propiedad de la empresa agrícola se transfiere al nuevo propietario desde el momento en que se abre la sucesión del propietario anterior fallecido y, por lo tanto, no existe una fase intermedia de copropiedad de la empresa entre todos los coherederos. En consecuencia, ninguno de ellos, salvo el que adquiere la categoría de propietario de la empresa agrícola, podrá ejercitar ningún acto de disposición sobre la misma que pudiera tener eficacia.

Es obvio que este sistema del Anerbe o del grupo familiar está necesariamente en contradicción con el Código civil italiano de orientación individualis-
ta, en cuanto prescinde de otorgar igual derecho a todos los descendientes legítimos a una cuota por naturaleza; con la ulterior consecuencia que, para no gravar excesivamente al propietario de la empresa agrícola, se le reconocen una serie de facilidades para entregar las cantidades que les corresponden a los coherederos excluidos de la sucesión a dicha empresa. Este es un principio que prevalece en todas las legislaciones que consagran la indivisibilidad de la hacienda familiar.3

En España, se encuentra una institución similar a las anteriores en la llamada la Casa que, según define Lacruz Berdejo, es el ente social compuesto por una familia campesina estable y los bienes —ordinariamente una explotación agrícola o ganadera— que aseguran su permanencia.4 Se basa, fundamentalmente, en la norma consuetudinaria, que ha sido incorporada a la Compilación del Derecho civil especial de Galicia, del 2 de diciembre de 1963, la cual regula en sus artículos 47-48 la Compañía familiar gallega, como la constituida entre labradores ligados con vínculos de parentesco, para vivir juntos y explotar en común tierras o lugar acasado pertenecientes a todos o a algunos de los reunidos y donde la mujer casada participa con personalidad propia y es, con relación a la Compañía, de condición igual a su marido.

La indivisibilidad de los patrimonios, que es la característica de estas instituciones, es común en los Derechos forales de las regiones españolas, como medio de mantener en vigencia la comunidad familiar. Entre estas instituciones destaca —las demás están
ordenadas en función de ellas— la transmisión de los bienes, normalmente por cláusula en los capítulos otorgados al contraer matrimonio el hijo elegido, a un solo heredero apto para desempeñar la dirección de la explotación familiar y para ocupar la jefatura de la familia, el cual, en los mismos capítulos, suele comprometerse a designar, a su debido tiempo, y junto con su mujer, a un solo heredero entre sus hijos nacidos.

La Casa se caracteriza por presentar dos elementos: uno patrimonial y el otro familiar. El primero, constituido por el conjunto de bienes que integran la explotación agrícola y cuya conservación a través de la sucesión hereditaria es indispensable. El familiar que imprime a la institución un significado moral y espiritual que trasciende del orden meramente económico. Además, concurren en ella, los siguientes elementos personales:

A) El padre, jefe de la familia, que a la titularidad sobre el patrimonio, une una soberanía doméstica, comprensiva de amplias facultades de disposición y de gestión;

B) El petrucio, que es el hijo elegido por el padre, ora en las capitulaciones matrimoniales ora en el testamento, para asumir a su muerte la posición familiar que él desempeña y el gobierno de su patrimonio. De esta manera el petrucio se va iniciando, al lado de su padre, en la dirección y manejo de los negocios y bienes de la Casa, ostentando una cotitularidad de gestión de orden fáctico, cuyo contenido se va ampliando a medida que el jefe de la fami-
lia va perdiendo facultades físicas e intelectuales. O sea, existe una forma interesante de aprendizaje que el petrucio necesita para en su día dirigir con dignidad y sapiencia la empresa agrícola o ganadera;

C) La viuda, quien ejerce una especie de regencia, con amplias facultades de usufructuaria universal, mientras el petrucio conserva su participación en la administración de la Casa, normalmente con mayores atribuciones que durante la vida del padre;

D) Los célibes, son los hermanos solteros, hijos del jefe de la familia, que continúan viviendo en la Casa sin retirar su legítima, es decir, la participación en metálico que les corresponde por razón de la muerte del padre y que, generalmente, en estos casos, es una cantidad menor de la que recibe el petrucio en concepto de bien familiar; y

E) Los legitimarios, que son los hermanos del petrucio que no han sido favorecidos por la elección del padre y tienen derecho a su porción legitimaria, que, como señalamos en el aparte anterior, se reduce a una participación en metálico, siendo el grupo que, en su mayoría, emigra a los países latinoamericanos y que después con sus envíos periódicos de dinero a los familiares de la península han contribuido —como escribe Pablo Fuenteseca— a liberar al hombre pobre del agro contribuyendo, sobre todo, en Galicia a que surjan nuevos propietarios con las aportaciones de dinero que reciben de América Latina.⁵

306
El sustrato real de la Casa gallega se halla constituido por el denominado en esta región *lugar acazarado*, que legal y socialmente queda integrado por los dos matrimonios que viven en el mismo hogar petrucial: el de los padres y el del petrucio; y, en el aspecto material, lo integran la casa petrucial, tierras labrantías, prados y montes, que aún no siendo ordinariamente colindantes constituyen una unidad orgánica de explotación. Es decir, que el soporte físico de la Casa es la explotación agrícola, que sirve de sustento a la familia asentada en ella y que se mantiene íntegra a través de las sucesivas generaciones.

Es de notar que la Casa gallega tiene sustantividad propia que se manifiesta mediante una denominación que corresponde al apellido o apodo de sus antepasados; v. gr., Casa de Souto, Casa de Herdeiro, Casa do Militar, con una abstracción total del nombre de su actual dueño, siendo conocidas en la Región más por su nombre propio que el de su propietario.

La Casa se encuentra rodeada de una aureola señorial que hace sea mirada por todos los lugareños con respeto, inclusive por los familiares que fueron desplazados de ella al casarse y entregarles la cuantía que les correspondió en dinero; pues se crea en torno de ella lazos de solidaridad que lleva a estos últimos familiares a regresar a su seno con motivo de los grandes acontecimientos, generalmente en las fiestas patronales. Aparte de que los legitimarios tienen a su favor los llamados *derechos de casa*, que consisten en la facultad de vivir en la misma mientras se conserven solteros o viudos sin hijos, aportando su trabajo personal.
Es menester señalar que el Código civil español permite la indivisión del patrimonio familiar, cuando "el padre en interés de su familia quiere conservar indivisa una explotación agrícola, industrial o fabril... disponiendo que se satisfaga en metálico su legítima a los demás hijos" (Artículo 1056, párrafo 2°). Sin embargo esta disposición del Código es una excepción dentro del sistema familiar español inspirado en la doctrina individualista del Código de Napoleón.

Indiscutiblemente que instituciones como la zadruga, el maso chiuso y la "casa" son ejemplos de organización familiar que, por otra parte pudieran multiplicarse, pero que hemos querido presentar aquí como manifestaciones de vida comunitaria, que responden a un pensamiento constante que se ha dado a través de la historia desde las comunidades cristianas, los antiguos tiempos de Roma, entre los germanos y en el momento floreciente de la Edad Media. En tales instituciones puede advertirse que el servicio a la comunidad es el norte de los individuos y sin que por ello se niegue la independencia de la personalidad individual.

Reconocemos las limitaciones a que se encuentran sometidas las instituciones a que nos acabamos de referir, precisamente por haber sido fruto de otras épocas históricas, habiéndose formado en el curso de los tiempos por influencia de las costumbres y de las tradiciones regionales de esos pueblos, sin responder a una visión dinámica del trabajo y de la sociedad. Empero no se puede negar que son exponentes de vida comunitaria familiar, que han contribuido a mantener vivos los lazos de solidaridad hu-
mana como soporte auténtico de toda estructuración social de una comunidad nacional.

2. IMPORTANCIA DE LA INSTITUCION DEL BIEN DE FAMILIA O DEL HOGAR

Es interesante observar, como en la misma patria del individualismo jurídico surge la institución del bien de familia inembargable, regulado por la ley francesa del 12 de julio de 1909, que viene a configurarse por la Ley del 7 de julio de 1948, la que lo extiende a una casa o porción dividida de la misma, sea a la vez una casa y tierras colindantes o vecinas, ocupadas y explotadas por la familia, sea solamente de tierras explotadas por la familia, sea una casa con tienda o taller y el material y herramientas de artesanos; y, por Ley del 12 de marzo de 1953, se establece que el valor de dicho bien, comprendiendo las a srcerías e inmuebles por destinación, no deberá, desde su fundación, sobrepasar los 50 mil francos.

El Código civil suizo se ocupa De los bienes de familia en el capítulo III del título IX De la familia del Libro II “Derecho de la Familia”, estableciendo que las fundaciones de familia pueden ser creadas conforme a las reglas del derecho de las personas o de las sucesiones, destinándose al pago de los gastos de educación, de establecimiento y de asistencia de los miembros de la familia o de objetos análogos, Se prohibe la constitución del fideicomiso de familia.

Los familiares pueden crear una indivisión, sea dejando todo o parte de un patrimonio, sea entre-
gando otros bienes. Puede ser convenida a término o por un tiempo indeterminado. Tienen derechos iguales los que gozan del patrimonio familiar y no pueden retirar su parte ni disponer de él, administrándose en común, si bien se puede designar a uno de ellos como jefe de la ind división, quien la representa en todos los actos que la conciernen y dirige los trabajos de explotación. La ind división del patrimonio familiar se configura como una propiedad colectiva, cuyos miembros se obligan solidariamente por sus deudas.

Los patrimonios familiares con destino agrícola o industrial y las casas de habitación con sus dependencias, pueden constituirse en asilos de familia.

El Código civil italiano se ocupa del Patrimonio familiar en la sección II, del capítulo VI referente al régimen patrimonial de familia del título VI del matrimonio, del Libro I, de las personas y de la familia, en sus artículos 167-176. Se permite constituir en patrimonio familiar determinados bienes inmuebles o títulos de crédito, con el carácter de inalienabilidad de los bienes y la destinación de los frutos en ventaja de la familia. La constitución puede hacerse también durante el matrimonio por uno o ambos cónyuges mediante acto público, o bien por un tercero por acto público o por testamento. El tribunal puede autorizar, en caso de necesidad, la venta de los bienes que integran el patrimonio familiar, cuya propiedad pertenezca a uno o ambos cónyuges. También puede hacerse, en el caso de utilidad evidente, determinando la forma en que ha de emplearse el precio que se recibe por la venta de los bienes.

310
La administración de los bienes que constituyen el patrimonio familiar corresponde al cónyuge que tiene la propiedad. Si ésta pertenece a ambos cónyuges o bien a persona distinta de éstos, la administración corresponde al cónyuge designado por el constituyente o, a falta de designación, al marido. El cónyuge que administra los bienes cuya propiedad corresponde a otros, tiene las obligaciones del usufructuario, o sea afianzar la cosa que administra.

El vínculo sobre los bienes que constituyen el patrimonio familiar cesa con la disolución del matrimonio, si no hay hijos o éstos han alcanzado la mayoría de edad. En el supuesto de que haya hijos menores, el vínculo dura hasta la mayoría de edad del último hijo. Sin embargo, si a la muerte del cónyuge propietario de los bienes, éstos forman parte de la cuota de legítima, la autoridad judicial, luego que concurren razones de necesidad o de utilidad evidente para los hijos mayores, puede disponer que sea parcialmente disuelto el vínculo, cuando dichos hijos consigan su parte correspondiente sobre la cuota de legítima.

El Código civil brasileño regula el Bien de familia en el capítulo V del libro II, sobre Los Bienes, en sus artículos 70-73, y establece que el jefe de familia puede destinar un inmueble para domicilio de la misma, con la cláusula de quedar exenta de la ejecución por deudas, salvo las que provengan de impuestos relativos al mismo predio. Esta exención durará mientras vivan los cónyuges y hasta que los hijos completen su mayoría de edad.

El Código civil mexicano se refiere al Patrimonio
familiar en el título duodécimo del libro primero “De las personas”, artículos 723-746, considerándose como tal: I La casa habitación de la familia; y II En algunos casos, una parcela cultivable. Los Bienes afectos a este patrimonio son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno. El valor máximo de los bienes afectos al patrimonio de familia será de veinticinco mil pesos para el Distrito y Territorios Federales. Hay la obligación de habitar la casa y cultivar la parcela que integran el patrimonio familiar, si bien la primera autoridad municipal del lugar en que se halle constituido puede, por causa justa, autorizar para que se dé en arrendamiento o aparcería, hasta por un año. Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban vuelven al pleno dominio del que lo constituyó, o pasan a sus herederos si aquél ha muerto.

El Código civil de Guatemala de 1933, reguló esta institución bajo el calificativo de Asilo de Familia, en el capítulo VI, del título V, Usufructo, uso habitación y asilo de familia, del Libro Segundo, sobre Los bienes, Artículos 548 a 555. Se considera el Asilo, una institución jurídico-social por la cual se dedica un bien urbano o rústico, a la protección del hogar y mantenimiento de los lazos familiares. El inmueble que se constituye en Asilo es indivisible, inalienable, inembargable y no podrá gravarse salvo servidumbre.

Posteriormente, en el Código civil aprobado por Ley N° 106 del 14 de septiembre de 1963, se dedica a esta institución el capítulo X, del título II, artículos 352 y ss., con la nueva denominación de Patrimonio Familiar. Los bienes que pueden destinar-
se a esta finalidad son: las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales, “que sean objeto de explotación familiar”.

El Código civil venezolano introduce la institución Del Hogar en la sección segunda “Del uso de la habitación y del hogar”, Capítulo I, “Del usufructo, del uso, de la habitación y del hogar”, título III, “De las limitaciones de la propiedad”, del Libro Segundo, “De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones”, artículos 632-643. Se permite a una persona constituir un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores. Tiene que establecerse a favor de personas que vivan en la época de su institución, o de los descendientes inmediatos por nacer de una persona determinada, sin menoscabo de los derechos correspondientes a los herederos legitimarios.

El hogar puede ser una casa sola, en poblado o fuera de él, o una casa con tierras de labor o cría; pero en ningún caso ha de exceder el valor del inmueble para la época de su institución, de cuarenta mil bolívares. El aumento natural del precio por el solo transcurso del tiempo, no afecta la constitución legal del hogar. Gozarán del hogar, las personas en cuyo favor se haya constituido; y si esto no consta claramente, gozarán de él los jefes de la familia para la cual se constituyó; los ascendientes de ellos que se encuentren en estado de reclamar alimentos; los varones descendientes en línea recta, mientras sean menores, las hembras, también descendientes, aunque sean mayores, mientras permanezcan solteras, y los
hijos entredichos o inhabilitados por defecto intelectual.

El hogar no podrá enajenarse nigravarse sin oírse previamente a todas las personas en cuyo favor se haya establecido o a sus representantes legales, y con autorización judicial, que no dará el Tribunal sino en el caso comprobado de necesidad extrema, y sometiéndola a la consulta del Tribunal Superior.

Una vez fallecido el último miembro de la familia para quien fue constituido el hogar, o se extinga el derecho a gozar de él, volverá la finca al patrimonio del constituyente o de sus herederos, a menos que el dominio se haya traspasado a la persona o personas a cuyo favor se constituyó el hogar. En el caso de divorcio o separación judicial de cuerpos o anulación del matrimonio, el cónyuge culpable quedará sin derecho al hogar. Si la causa fuere común a ambos cónyuges y no hubiere hijos, quedará extinguido el hogar. Si siendo común la causa existieren hijos, conservará su derecho a habitar el hogar aquel a quien la sentencia deje en ejercicio de la patria potestad. En el supuesto de que no se deje la patria potestad a ninguno de los cónyuges, el Juez determinará cuál de ellos gozará del hogar, o lo declarará extinguido respecto de uno o de ambos, según las circunstancias. Los beneficiarios, mayores de edad, que sean de mala conducta notoria, pierden su derecho al hogar.

El Proyecto de Código civil pan-americano preparado por Francesco Cosentini, acoge la institución del hogar en el título VI, “Del régimen de los bienes entre cónyuges”, en el Libro I, “De las personas”,

314
ápítulo 163, que dice: “El hogar y todos los bienes anexos, ya pertenezcan a uno de los cónyuges, ya a ambos, no podrán ser enajenados sino por consentimiento expreso de ambos cónyuges; no podrán ser hipotecados ni gravados de ninguna manera por los acreedores del marido o de su mujer, así como tampoco el terreno anexo, si la propiedad no alcanza el valor de diez mil pesos”.

El Prof. Francesco Cosentini, hablando en la introducción de su Proyecto de la justificación del hogar, señala que le ha parecido oportuno introducir una institución que ha sido consagrada en el Homestead Act del 20 de mayo de 1862 de los Estados Unidos y aceptada por las legislaciones mexicana, brasileña y venezolana, siguiendo las huellas del Código civil suizo (artículos 335-359): la que hace inalienable e insecuestrable la casa de residencia conyugal y todos los bienes anexos, pertenecientes a uno de los cónyuges o a ambos. Tal medida, añade, permite especialmente a las clases agrícolas aficionar- se a la tierra, alejarse de las lisonjas de la ciudad, atenuando los males del urbanismo y ejercitar la función beneficosa que la sociedad moderna reclama de la producción agrícola tan indispensable a la vida de una nación.\(^6\)

Ya nosotros comentando el artículo 1056 del Código civil español, en lo referente a la constitución de un patrimonio indivisible para la explotación agrícola, industrial o fabril, nos pronunciamos hace tiempo por la independencia de los bienes de familia de los de ambos cónyuges, como medio de alcanzar una mayor seguridad en las relaciones familiares, que de ninguna manera estarán expuestas a los vaivenes pro-
pios de lo que se deja al arbitrio de una sola voluntad soberana, lo cual no sucederá en el caso de existir “patrimonio autónomo”, cuyo carácter de inalienabilidad facilita a la familia un bienestar económico necesario para el fiel cumplimiento de sus fines, procurándose inclusive una mayor participación de los hijos en el patrimonio común a fin de que adquieran una más grande independencia y responsabilidad personal.

Luego el patrimonio familiar o la institución del hogar constituyen, sin duda alguna, un ejemplo notorio de propiedad comunitaria que adquiere la máxima expresión de justicia social en los supuestos de la familia artesana y campesina, porque mediante su fundación se logra una estabilidad de vida comunitaria indispensable a todo país que trate de alcanzar un desarrollo nacional. Por eso es que se hace urgente imprimir una mayor agresividad a la institución para que se generalice y obtenga consistencia económica no tan sólo en el sector agrario sino que también en el artesano e industrial. Desde el momento que se conciba como una empresa comunitaria, enfocada la institución con una mentalidad revolucionaria, se conseguirá despojarla del lastre capitalista y paternalista de que se le ha investido a través de la costumbre y la tradición histórica y por la influencia de la Revolución francesa.
3. ORGANIZACIONES TRABAJADORAS DURANTE Y LA POST-GUERRA: LA COMUNIDAD BOIMONDAU, LA AUTOGESTION YUGOESLAVA Y LA EXPERIENCIA ISRAELI

En esta parte, penetramos en una nueva etapa de la historia de la humanidad, en la que vemos aflorar al hombre con una conciencia social más acusada y con una visión más universalista de los problemas como consecuencia de la vorágine en que vivió sumergido durante el conflicto bélico. Por eso trata de dejar atrás un pasado de egoísmos individuales y opresiones colectivas y de imprimir a su vida una organización más fraterna y, por ende, menos preocupada de las apetencias materiales.

De esta manera, durante la segunda guerra mundial, surge en Francia la Comunidad Boimondau, que es fundada por Marcel Barbu, quien participa en el movimiento clandestino de resistencia contra los nazis, y la constituye en el año 1940, como primera experiencia con la cual nació el movimiento comunitario francés. Se promueve como una comunidad de familias y se integra sobre las bases siguientes:

a) La comunidad de trabajo debe brindar a sus miembros aprendizaje técnico, pero también y, sobre todo, aprendizaje humano;

b) La educación humana debe impartirse en la comunidad en todos los planos: en el físico, en el artístico y en el cultural;
c) Todos los miembros de la comunidad deben someterse a una moral común;

d) La comunidad humaniza el trabajo; y

e) Los medios de producción de la empresa Boimondau son de posesión común de todos sus miembros.

La remuneración del trabajo se hace de acuerdo con el valor humano, para cuya determinación se toman en cuenta dos elementos: el valor profesional y el valor social. Para el primero cuentan las cualidades de trabajo, calificándose a todos los miembros de la comunidad con arreglo a una escala en la cual el porcentaje mayor corresponde al jefe.

El valor social se fija atendiendo a la conducta social, es decir, comprende todo lo que el miembro aporta a sus compañeros fuera de su oficio: conocimientos prácticos, cualidades morales, conocimientos intelectuales.  

Se ve, pues, la impronta humanista en la organización de esta empresa estructurada sobre la base de forjar un tipo de trabajador en el que interesa más el esfuerzo de su músculo o de su mente, la entrega a su compañero en una sociedad fraterna que busca la superación espiritual del individuo mediante el trabajo, en vez de tratarlo como una mercancía a la que hay que estrujar todo lo más posible para obtener la mayor ganancia económica.

Es obvio que nos encontramos ante un tipo ideal de propiedad comunitaria en la que se cumplen integralmente los requisitos que le hemos señalado. No
perdamos de vista, sin embargo, que esta experiencia se produce en la cuna de la sociedad burguesa en coexistencia con el régimen capitalista que, ante su incapacidad para satisfacer las ansias de felicidad humana, suscita nuevas inquietudes y rebeldías entre los hombres en pos de sistemas más humanos de propiedad.

Nada tiene de extraño, por lo tanto, que finalizada la segunda guerra mundial y definidos los campos de influencia entre las potencias vencedoras ideológicamente antagónicas, se produjesen cambios en el sistema de propiedad de orientación comunitaria con proyección sobre todo un pueblo —ejemplo, el caso de Yugoslavia—, que al caer en la órbita del poder soviético, pudo romper con el régimen de vida anterior y, más tarde, construir su propio modelo de economía socialista gracias a la pericia de sus dirigentes políticos.

En nuestra obra Comunitarismo (Historia, Democracia, Trabajo), nos hemos ocupado ampliamente de la vida yugoeslava y de su organización empresarial, razón por la cual aquí vamos a tratar de evitar lo más posible reiteraciones y, por consiguiente, intentaremos ceñirnos al objeto de nuestro estudio.*

Quizá por la influencia del pluralismo nacional que se observa en Yugoslavia, surge la conveniencia de estructurar un sistema económico autónomo conciliable con una planificación estatal. Esto sucede, a partir de la legislación de 1950, cuando se confía la gestión de las empresas a los trabajadores, sobre la base de los principios institucionales de la Comuna de París de 1871 y, en particular, del reglamento de los talleres de armas del Louvre del 2 de mayo.
1871; pero mientras que esta reglamentación establecía la designación por los obreros del delegado a la dirección, el director de la empresa yugoeslava continúa, al principio, siendo nombrado por la agrupación económica superior, porque se mantiene la estructura jerarquizada de la industria y el sistema de planificación administrativa.9

Por otra parte, en el sector agrícola, el gobierno suprimió —a partir de 1951— los planes de siembras obligatorias, volviendo así a la libertad en el mercado de los productos agrícolas. Se sustituye el impuesto sobre la renta de los campesinos de carácter un poco arbitrario por un impuesto del 6% sobre la renta catastral; y se vuelven a instaurar las cooperativas generales dejándoles numerosas iniciativas. En fin, se suprime la mayor parte de las reglamentaciones inspiradas en el modelo koljosiano y se introducen —conforme se acababa de hacer en la industria—, los principios de autogestión y de rentabilidad en las explotaciones agrícolas.

Importa saber el sentido del término de autogestión en la legislación yugoeslava. Dicho concepto en sí mismo no es nuevo, pues en otros países existen las formas de self-government politique. Sin embargo conviene señalar que la noción de autogestión en el sistema yugoeslavo no puede definirse por su relación a los tipos tradicionales de self-government, pues no se trata ni de descentralización o desconcentración administrativa, ni de una organización a “doble vía” de la administración pública. La autogestión no constituye una categoría jurídica; ella no puede vincularse a la administración del Estado o a cualquier rama del Derecho. Es una institución de carác-
ter constitucional en estado puro. De otro lado, el self-government tradicional no concierne más que a funciones políticas o a las funciones del Estado; por lo tanto, no se extiende ni al dominio económico, ni a los otros aspectos de la actividad social. Mientras que, por el contrario, la autogestión se caracteriza porque los medios de producción están a disposición de los trabajadores.

De esta manera la autogestión yugoeslava se caracteriza porque los ciudadanos participan de la manera más directa posible en la orientación del desarrollo social, en el ejercicio del poder y en las decisiones que afectan a los demás negocios sociales. La autogestión de los trabajadores en la producción y en la distribución de la renta social en el seno de la organización del trabajo o de la comunidad social es la base de la organización socio-económica de Yugoslavia, al mismo título que el trabajo libremente efectuado en común sobre los medios de producción que pertenecen a la sociedad en su conjunto (Artículo 6° de la Constitución).

Es de notar que los órganos de autogestión dirigen la organización de trabajo de un modo exclusivo e independiente. Ellos organizan la producción, velan por el desarrollo de la organización, definen los planes y programas de trabajo, deciden el uso que será dado a los medios sociales, disponen que estos medios repartan las rentas y beneficios entre los fondos de explotación y de inversión y el fondo de distribución (rentas personales de los trabajadores) disponiendo sobre las fusiones y escisiones de las organizaciones, aprobando los estatutos de la organización, el reglamento de tarifas, etc. Como vemos la auto-
gestión en el seno de la organización del trabajo es compleja y profunda. Por eso es que la comunidad o colectividad de trabajo ha sido denominada en Yugo-
goeslavia, con justo título, “La célula de autoges-
tión social”. Corresponde a las asambleas represen-
tativas y a sus órganos ejercer el control sobre la or-
ganización del trabajo, mientras que el control so-
cial general se efectúa por las organizaciones sociales políti-
cas.  

Desde otro punto de vista, el principio de renta-
bilidad asegura a las empresas agrícolas e industria-
les y a su personal, una situación económica favo-
rible si los resultados financieros son buenos y que, 
al contrario, somete a los participantes a ciertos ries-
gos si los negocios no resultan fructíferos. En efec-
to, un resultado positivo se traduce en un aumento 
del fondo de salarios y en un crecimiento de los re-
cursos que alimentan los demás fondos de la empre-
sa; al revés, si un resultado es negativo, provoca una 
reducción de la renta individual de los obreros, que 
no puede, sin embargo, caer por debajo del salario 
mínimo garantizado, y en una disminución de los 
fondos de la empresa o incluso en su endeudamiento. 
No obstante, se considera que el capital fijo de la 
empresa es propiedad del pueblo, que se lo confía 
en administración a la misma, bajo la forma de prés-
tamos a largo plazo acordados por la Banca Nacional 
de Inversiones a cambio del pago por parte de la em-
presa de un interés.  

La forma jurídica bajo la cual se produce esta trans-
ferencia de los medios de producción a las empre-
sas por parte del pueblo, se le ha dado la denomina-
ción de *propiedad social*. Acerca de esta institución, Jovan Djordjevich ha escrito: ‘*La propiedad social es la transición entre un régimen jurídico de propiedad y la supresión total de toda propiedad*. Atribuye a los cuerpos representativos ciertos derechos sobre los medios de producción y los productos de trabajo. Estos derechos son los de administración y disposición ejercidos en nombre de la comunidad; pero están subordinados a la condición de que los productores participen activa y realmente en la gestión de sus medios de producción y se apropien una parte determinada de los productos de su trabajo. Este último derecho es de carácter fundamental, social y personal, garantizado por el carácter socialista del poder, es decir, garantizado por la participación en el poder del conjunto de la clase trabajadora’.

Es evidente que nos encontramos, al referirnos a la propiedad social, ante una noción jurídica enteramente nueva, muy lejos de estar definida en la hora actual, incluso después de la Constitución yugoslava de 1963. Esta especie de propiedad —según hemos podido ver—, presenta la particularidad de hallarse vinculada al sistema general de la auto-gestión. Esta es la razón por la cual la propiedad es una propiedad “*social*” y no una propiedad del “*Estado*”, por lo tanto, **no supone un único titular que sería el Estado**. Al contrario, puesto que ella es la propiedad de la sociedad, en su conjunto, sus titulares son, en términos jurídicos, organizaciones sociales que la Constitución denomina “organizaciones de trabajo” (Artículos 9-11). **Es imposible en Derecho yugoslav**
objeto de propiedad privada; por lo tanto, a los trabajadores no se les transfiere la propiedad de las empresas, sino su gestión y el derecho de participar en los ingresos. Porque el principal objeto de la auto-gestión es abolir el régimen de asalariado. Persiste la propiedad pública. Así lo establece la Ley sobre las nacionalizaciones de las empresas económicas del 6 de diciembre de 1946, completada por la Ley del 23 de abril de 1948. Las dos leyes comprenden las ramas económicas siguientes: industria (pesada, mediana y ligera), banca, comercio, transporte, medios necesarios al ejercicio de las actividades necesarias y culturales. No se extiende la ley a la agricultura y, a título excepcional, a la artesanía, hostelería, el pequeño transporte urbano (como, por ejemplo, los auto-taxis), los medios de transporte que pueden ser objeto de la propiedad privada.

La tierra puede ser igualmente objeto de la propiedad privada. Sin embargo, la Ley sobre la Reforma Agraria y la Colonización del 16 de mayo de 1946, ha fijado en veinte hectáreas la extensión límite de la propiedad individual del suelo (en 1953 la Ley sobre el Dominio de los Bienes Raíces Nacionales reducía este máximo a diez hectáreas). La Ley sobre la nacionalización de las casas de habitación y de los terrenos a edificar, del 31 de diciembre de 1958, ha precisado que las casas de habitación que contengan más de dos apartamentos o más de tres pequeños apartamentos no pueden ser dejados a la propiedad privada.

La propiedad social no constituye un derecho subjetivo unitario, pues son varios sus titulares. El titular de la propiedad social es, en principio, el órgano
del Estado o el órgano social que se apropia parcialmente los bienes. Este órgano se llama organización de trabajo. Tomemos el ejemplo de una empresa social. Ella es titular de la propiedad social. La empresa dispone, en tanto que persona moral de Derecho civil de un derecho subjetivo, o más exactamente de un derecho de uso sobre estos bienes, motivo por el cual se apropia una parte de la renta obtenida por su actividad. Otras organizaciones del Estado u organizaciones sociales pueden igualmente apropiarse estos bienes. El derecho de uso no pertenece sólo a la organización económica. Puede pertenecer igualmente a las organizaciones sociales, a los organismos del Estado que son personas morales de Derecho civil. Se trata, en este caso, de instituciones que disponen de autonomía financiera (instituciones científicas, establecimientos sanitarios, servicios públicos, teatros, museos, etc.). O sea, que otras organizaciones del Estado u organizaciones sociales pueden igualmente apropiarse de estos bienes. Esta propiedad social está afectada por las rentas personales de los obreros y de los empleados, puesto que en la terminología jurídica yugoslava se evita emplear el término salario. La empresa, al menos en principio, determina libremente la parte de renta que será afectada a las ganancias personales y la que se destinará a aumentar los fondos. Aquí es donde se manifiesta la autogestión de la colectividad o de la comunidad de trabajo, si bien éstas deben respetar las reglas y las directivas que emanan de órganos sociales o de órganos del Estado cuyo objeto es proteger los intereses sociales más generales y paralizar las eventuales